

PANORAMA DE NECESIDADES HUMANITARIAS HONDURAS

CICLO DEL
PROGRAMA HUMANITARIO
2023
NOVIEMBRE 2022



Sobre este documento

Este documento ha sido consolidado por OCHA en nombre de la comunidad humanitaria en los países y de los socios. En este se ofrece un entendimiento común de la crisis, incluidas las necesidades humanitarias más apremiantes y el número estimado de personas que necesitan asistencia humanitaria. También, representa una base de pruebas y ayuda a informar la planificación estratégica conjunta de la respuesta. Este es un documento técnico y debe ser interpretado como tal sin implicaciones o connotaciones políticas.

FOTO DE LA PORTADA

Foto: OCHA / Vincent Tremeau

Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.

Para obtener las últimas actualizaciones



OCHA coordina la acción humanitaria para garantizar que las personas afectadas por emergencias reciban la asistencia y la protección que necesitan. OCHA trabaja para superar los obstáculos que impiden que la asistencia humanitaria llegue de manera efectiva a la población afectada por emergencias y proporciona liderazgo para la movilización de la asistencia y los recursos por parte del sistema humanitario.

<http://www.unocha.org/rolac>

http://twitter.com/unocha_americas



ReliefWeb Response (RW Response) es el sitio web central para las herramientas y servicios de gestión de la información, permitiendo el intercambio entre los clústeres y los socios del IASC que operan en una emergencia prolongada o repentina.

<https://response.reliefweb.int/honduras>



Humanitarian InSight apoya a los tomadores de decisiones brindándoles acceso a datos humanitarios. La herramienta provee la última información verificada sobre necesidades, entrega de la respuesta humanitaria y las contribuciones financieras.

www.hum-insight.com



El Financial Tracking Service (FTS) es el proveedor primario de los datos reportados constantemente sobre el financiamiento humanitario global y contribuye a la toma de decisiones estratégicas identificando brechas y prioridades para una asistencia humanitaria eficaz, eficiente y basada en los principios humanitarios.

<https://fts.unocha.org/appeals/overview/2022>

Tabla de contenido

06	Resumen de las necesidades humanitarias y los hallazgos clave
15	Parte 1: Impacto de la crisis y condiciones humanitarias
16	1.1 Contexto de la crisis
21	1.2 Choques e impacto de la crisis
30	1.3 Alcance del análisis
31	1.4 Condiciones humanitarias y severidad de las necesidades
41	1.5 Número de personas en necesidad
44	Parte 2: Análisis de riesgos y monitoreo de la situación y de las necesidades
45	2.1 Análisis de riesgos
48	2.2 Monitoreo de la situación y de las necesidades
49	Parte 3: Análisis sectorial
50	3.1 Clúster Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
55	3.2 Clúster Alojamiento de Emergencia
59	3.3 Clúster de Coordinación y Gestión de Albergues (CCCM)
62	3.4 Clúster de Educación
65	3.5 Clúster de Protección
68	3.5.1 Área de Responsabilidad de Protección de la Niñez
72	3.5.2 Área de Responsabilidad de Violencia Basada en Género (VBG)
75	3.6 Clúster de Recuperación Temprana
78	3.7 Clúster de Salud
81	3.7.1 Área de Responsabilidad Salud Sexual y Reproductiva
83	3.8 Clúster de Seguridad Alimentaria y Nutrición
86	3.8.1 Área de Responsabilidad Nutrición
90	Parte 4 Anexos
91	4.1 Fuentes de datos
95	4.2 Metodología
98	4.3 Brechas y limitaciones de la información
99	4.4 Acrónimos




2022



ENERO	MARZO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
 Tensiones políticas Se juramentaron dos presidentes del Congreso Nacional	 Movilidad humana Incremento de ingreso de personas en movimientos mixtos por la frontera oriente (Departamento de El Paraíso, municipios de Danlí y Trojes)	 Declaratoria de emergencia nacional por fuertes lluvias	 Tormenta tropical Julia Incremento de la situación de violencia , específicamente las relacionadas con el delito de extorsión. Lo que posteriormente provocó la declaratoria de emergencia nacional por violencia anunciada por la Presidenta de la República el 24 de noviembre y ratificada por medio de la publicación del decreto adjunto el 3 de diciembre. Como referencia en el documento de HNO de acuerdo con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), al menos 13 de los 18 departamentos del país han sido escenarios de extorsión; Francisco Morazán y Cortés concentran el mayor número de denuncias (79 por ciento)	 Inicio de la temporada de frentes fríos que ocasionan precipitaciones en la zona norte

Resumen de las necesidades humanitarias y los hallazgos clave

Cifras actuales

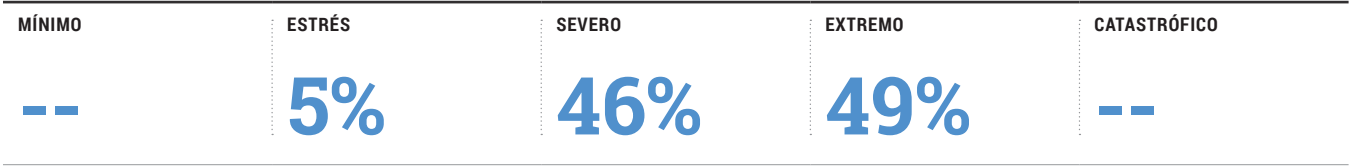
PERSONAS EN NECESIDAD	TENDENCIA (2021-2022)	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3,2M		60%	37%	6%



TROJES, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, HONDURAS

Foto: OCHA / Vincent Tremeau

Nivel de severidad de las necesidades



Por grupo poblacional

GRUPO DE POBLACIÓN	PERSONAS EN NECESIDAD
Desplazados internos	400K <div></div>
Con discapacidad	192K <div></div>
Niños y niñas menores de 5 años	424K <div></div>
Personas LGBTQI+	70K <div></div>
Migrantes y refugiadas en movimientos mixtos	160K <div></div>
Personas retornadas	100K <div></div>
Mujeres líderes de hogar	115K <div></div>
Población Indígena	188K <div></div>
Población afrodescendiente	78K <div></div>

Por edad

EDAD	PERSONAS EN NECESIDAD	% PIN
Niños y niñas (0 - 17)	1,19M <div></div>	37%
Adultos (18 - 59)	1,72M <div></div>	60%
Ancianos (60+)	224K <div></div>	7%

Con discapacidad

EDAD	PERSONAS EN NECESIDAD	% PIN
Personas con discapacidad	192K <div></div>	6%

Contexto, choques, acontecimientos en curso e impacto de la crisis

Honduras enfrenta crecientes riesgos multidimensionales y superpuestos en un contexto de extrema fragilidad, conflictos políticos y sociales exacerbados por la pandemia de COVID-19, los efectos del cambio climático, el desplazamiento forzado y la migración.

La pandemia y los impactos de los fenómenos climatológicos provocaron la mayor caída del Producto Interior Bruto en los últimos 20 años (nueve por ciento a finales de 2020)¹.

Según estimaciones oficiales, más del 59 por ciento de la población vive en la pobreza y más del 32 por ciento en pobreza extrema, en su mayoría mujeres². El 20 por ciento de los niños y niñas sufre retraso en el crecimiento, en medio de una creciente inseguridad alimentaria y altos niveles de desigualdad y violencia que afectan desproporcionadamente a mujeres, niñas, población LGBTQ+ y personas que viven en zonas urbanas periféricas o en zonas rurales.

En este contexto, las necesidades humanitarias se ven impulsadas por altos índices de pobreza y pobreza extrema, choques climáticos recurrentes, violencia crónica, alarmantes estadísticas de Violencia Basada en Género (VBG), el acceso limitado a los servicios básicos y los impactos de los movimientos mixtos³. Estas necesidades sostenidas han formado un tejido complejo de vulnerabilidades que la acción humanitaria ha buscado atender desde hace años con un abordaje intersectorial.

Entre los choques que han impulsado las necesidades humanitarias en el último año se encuentra la activa temporada de lluvias de 2022, que ha afectado las mismas zonas que sufrieron el impacto de las Tormentas Eta e Iota en 2020, así como zonas con

presencia de maras y pandillas, incrementando los retos en la provisión de la asistencia. Las inundaciones causadas por las lluvias y los efectos del fenómeno de La Niña han supuesto un incremento de cerca del 100 por ciento en el número de personas afectadas en comparación con 2021⁴ y amenazan la producción de alimentos en los próximos meses. Sólo en septiembre de 2022, las inundaciones afectaron a más de 67.700 personas, siete veces más que las 9.000 afectadas en los cuatro meses anteriores⁵.

En octubre de 2022, la Tormenta Tropical Julia dejó estragos en 15 de los 18 departamentos del país. Se estima que las inundaciones han afectado unas 200.000 personas en el Valle de Sula (norte) y 24.000 en el departamento de Gracias a Dios (20 por ciento de su población), donde habita el pueblo misquito, minando su resiliencia y medios de vida⁶.

Por otro lado, el aumento de la inflación y de los precios de los alimentos ha puesto a prueba el poder adquisitivo de los hogares de bajos ingresos, limitando su acceso a alimentos básicos. En junio de 2022, los precios del maíz blanco, fertilizantes y energía aumentaron un 70, 88 y 30 por ciento respectivamente. La crisis del coste de la vida amenaza con agravar una situación de seguridad alimentaria ya de por sí grave: antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, se estimaba que 2,6 millones de personas (el 28 por ciento de la población) enfrentaban crisis o niveles peores de inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 o peor CIF)⁷. Según las proyecciones esta cifra podría aumentar de 0,5 millón hasta junio de 2023.

Honduras figura como país de alto riesgo en el índice de riesgo INFORM y según "Insight-Crime", el país se encuentra entre los más violentos debido al narcotráfico, las pandillas, la corrupción y la actividad de organizaciones criminales transnacionales. Los impactos de la violencia incluyen homicidios,

1 Banco Central de Honduras, Memoria 2020. <https://www.bch.hn/estadisticos/GIE/LIBMemoria/Memoria%20Anual%202020.pdf>

2 Panorama Social de América Latina y el Caribe, CEPAL, 2022.

3 El término movimientos mixtos se refiere a los flujos de personas que viajan, generalmente de manera irregular, por las mismas rutas y utilizando el mismo medio de transporte, pero por diferentes motivos.

4 Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (COPECO). <http://copeco.gob.hn/>

5 Panorama Global Humanitario. Actualización de septiembre 2022.

6 COPECO.

7 FAO-WFP Hunger Hotspots 2022.

femicidios, desapariciones forzadas, restricciones a la movilidad y libertad, el uso, utilización y reclutamiento forzado de menores por las pandillas, VBG, extorsiones, desalojos forzados, despojos y el desplazamiento forzado.

En 2021, la tasa de homicidios fue de 38.6 por cada 100.000 habitantes, 13.1 puntos por encima de la tasa de Latinoamérica y el Caribe (LAC) y la más elevada de Centroamérica. Esta cifra significa que perdieron la vida de manera violenta 10 personas cada día en promedio (3.651 homicidios de enero a diciembre)⁸.

La violencia afecta de manera desproporcionada y diferencial a las mujeres, personas LGBTIQ+, niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) y personas con discapacidad. La tasa de feminicidio (6.8/100.000) es la más alta de LAC y casi triplica la tasa global (2.3/100.000). Casi el 68 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses⁹. Los NNA son especialmente vulnerables a la violencia y a ser objeto de represalias, incluida la exigencia de ser “banderas” o informantes. El 4.5 por ciento de las víctimas de homicidio en 2021 eran NNA¹⁰.

En 2022 se registró un aumento en los movimientos mixtos, exacerbando las necesidades humanitarias. Las autoridades nacionales informan que más de 140.000 personas ingresaron por puntos irregulares entre enero y octubre de 2022, nueve veces más que las reportadas en 2021¹¹. A 28 de septiembre se registró la cifra récord de 109.505 ingresos irregulares¹².

El ingreso, tránsito y salida de personas refugiadas y migrantes integrantes de movimientos mixtos que se dirigen hacia el norte ha supuesto retos para las capacidades de respuesta en el país¹³, muy especialmente en la frontera sureste, donde

las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ enfrentan crecientes riesgos de VBG.

Más de 8.000 personas hondureñas en promedio mensual han sido retornadas este año a Honduras (82.968 personas hasta el 31 de octubre), de las cuales el 9.7 por ciento son niñas, 16.4 por ciento niños, 17.2 por ciento mujeres y 56.7 por ciento hombres, superando el número de personas retornadas en 2021 para este mismo periodo (58.608 personas). El retorno forzado conlleva, en la mayoría de los casos, nuevos riesgos de seguridad y dignidad dado el limitado acceso a documentación civil y la falta de programas de retorno estatales.

En 2021 aumentaron las deportaciones desde Estados Unidos y México con respecto a 2020. Unos 12.194 niños y niñas fueron deportados, de los cuales 5.553 no estaban acompañados. Adicionalmente, las escuelas permanecieron cerradas desde 2020, privando a los NNA de uno de sus principales entornos de protección. Las niñas y niños retornados, principalmente los no acompañados, son invisibles para el sistema de protección en Honduras y carecen de acceso a los servicios básicos. Al ser excluidos y extremadamente vulnerables, son fácilmente estigmatizados por la sociedad y muchos se ven forzados a salir del país nuevamente.

Según datos porcentuales de la encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA MICS 2019), el Área de Responsabilidad de Protección de la Niñez estimó que 350.000 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan en labores peligrosas (trabajo con químicos y explosivos, entre otros) o expuestos a objetos, procesos o condiciones inseguras o insalubres.

8 <https://infosegura.org/2022/03/08/violencia-homicida-en-honduras-2021/>

9 Encuesta del Instituto Nacional de Estadística y la Secretaría de Salud de Honduras 2022.

10 Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) <https://www.sepol.hn>

11 Panorama Global Humanitario. Actualización de septiembre 2022.

12 INM <http://inm.gob.hn/estadisticas.html>

13 ONU Honduras: movimientos mixtos en la frontera suroriental.

Las diferentes crisis también han afectado el mercado laboral, aumentando las tasas de desempleo en el país y con impactos desproporcionados en mujeres y jóvenes. Esto ha generado un aumento de la informalidad, así como la carga de trabajo doméstico no remunerado asumido por las mujeres. Con la pérdida de medios de vida las personas y comunidades están más expuestas a riesgos de protección como la trata de personas, la pérdida de propiedad, la explotación sexual y laboral y las condiciones de trabajo inhumanas, incluso el reclutamiento por parte de estructuras del crimen organizado.

En términos de salud mental, algunas poblaciones en situación de vulnerabilidad experimentan un riesgo incrementado de sufrir por la correlación entre violencia y el impacto en su salud mental, especialmente las personas en situación de calle. Diversos estudios muestran la relación entre violencia, resiliencia y necesidades de salud mental¹⁴ así como la relación entre la depresión/ansiedad y las experiencias de violencia¹⁵. En términos de género, las mujeres de entre 18 y 30 años, principalmente de áreas urbanas, son más vulnerables a ser afectadas por necesidades complejas de salud mental.

El sistema de salud pública está sobrecargado, producto de debilidades crónicas a las que se suman los efectos de la respuesta a la pandemia de COVID-19. El sistema de salud público, en particular, solo cuenta con 56 psicólogas/os a nivel nacional¹⁶ para atender las necesidades de salud mental de una población de 9,6 millones de personas. La crisis sanitaria ha creado una situación de profunda vulnerabilidad para mujeres y niñas, que se han visto afectadas y con necesidades desatendidas.

Finalmente, la interrupción en el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH) está agudizando

las inequidades y poniendo en riesgo los avances sectoriales logrados en resiliencia y desarrollo. La inseguridad hídrica puede incrementar la inseguridad alimentaria y nutricional e impactar en la salud debido a la contaminación del agua para usos domésticos.

Alcance del análisis

Los factores mencionados continúan provocando impactos y situaciones de crisis humanitaria concentradas en municipios particulares ocasionando una múltiple afectación en diferentes grupos vulnerables por la combinación de los diferentes impulsores. Para el año 2022 se han identificado 3,2 millones de personas en necesidad (en adelante PIN), un 11 por ciento más que en 2021 (2,8 millones). Este dato es el resultado del análisis cualitativo y cuantitativo realizado por los actores humanitarios en coordinación con instituciones del Estado a nivel nacional y territorial.

Este Panorama de Necesidades Humanitarias (HNO por sus siglas en inglés) analiza la evolución de los vacíos humanitarios en Honduras durante el 2022 con un enfoque intersectorial que reconoce la naturaleza multidimensional de las necesidades de las personas en todos los clústeres.

Los NNA y jóvenes, las mujeres, así como los pueblos indígenas y comunidades afro hondureñas, adultos mayores, personas desplazadas y retornadas, personas afectadas por eventos climáticos, personas en condición de discapacidad, entre otros grupos, se han visto afectados de manera desproporcionada y diferencial. Estas personas requieren asistencia humanitaria diferenciada de forma integral para que las acciones de respuesta y protección garanticen su seguridad y dignidad.

El principio de acción sin daño, en conexión con la promoción de una Política de Tolerancia Cero hacia la

14 Un estudio realizado en Yoro, Choluteca y Cortés indica la prevalencia de trastornos mentales del 62 al 74 por ciento al relacionarla con la violencia. Mejía D., Pérez I., Linares R., et al. Prevalencia de trastornos mentales en relación con violencia, resiliencia y estrategias de afrontamiento en Yoro, Choluteca y Cortés, junio, 2016. Revista Portal de la Ciencia. Julio 2018;14:139-157.

15 Un estudio realizado en Tegucigalpa encontró que las personas con síntomas de depresión/ansiedad eran 2.4 veces más probables de reportar experiencias de violencia física y 3.7 veces más probables de reportar violencia sexual. Río Navarro J, Cohen J, Rocillo Arechaga E, Zuniga E, Médecins Sans Frontières Evaluation and Action Team—Honduras. Physical and sexual violence, mental health indicators, and treatment seeking among street-based population groups in Tegucigalpa, Honduras. Rev Panam Salud Publica. 2012;31(5):388–95.

16 <https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/honduras-salud-mental-psicologos-psicologia-YB9737054>

Explotación y el Abuso Sexual (EAS)¹⁷ se promoverá en las etapas de planeación y respuesta de todos los clústeres. De esta forma se busca garantizar la transversalización de la protección contra la explotación y el abuso sexual (PEAS) y la puesta en marcha de acciones de prevención y respuesta hacia la EAS, entre estas, mecanismos de reporte seguros y accesibles por las comunidades, la asistencia de calidad a las personas víctima/sobreviviente y la rendición de cuentas incluyendo investigaciones¹⁸.

Condiciones humanitarias, severidad y personas en necesidad

De las 3,2 millones de personas con necesidades se identificaron al menos 1,6 millones en necesidades agudas (nivel de severidad 4) que se encuentran en una situación crítica, con riesgos asociados a temas de morbilidad y mortalidad, ya sea por los impactos de la violencia o por la falta de acceso a los bienes indispensables para cubrir sus necesidades básicas. Estas personas requieren atención urgente en el corto y mediano plazo para evitar la pérdida de la vida o su deterioro.

El cálculo de las estimaciones de necesidades humanitarias se ha hecho a través del Marco de Análisis Intersectorial o enfoque JIAF, que analiza el tipo y severidad de las necesidades de las personas afectadas por las emergencias utilizando un conjunto de indicadores intersectoriales para obtener los resultados dimensionales de la crisis. Este análisis ha reflejado que el país enfrenta un contexto complejo de emergencia. En todos los departamentos se encuentra espacio para la acción humanitaria: en 37 de los 298 municipios del país se observa un nivel crítico de necesidades, mientras que en 220 municipios, las necesidades son severas, con presencia de grupos de población en mayor situación de vulnerabilidad. Las necesidades humanitarias de las personas que integran los movimientos mixtos en 2022

se han concentrado: (i) en su ingreso en los municipios de Danlí y Trojes (departamento de El Paraíso, en el oriente del país); (ii) en el tránsito por Tegucigalpa y municipios aledaños (departamento de Francisco Morazán); y (iii) en la salida por el municipio de Ocotepeque (departamento de Ocotepeque).

Según el análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), en el primer semestre de 2022, 2,6 millones de personas están en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria (Fases 3 y 4 CIF) lo que equivale a un 27 por ciento de la población. Los principales impulsores de la inseguridad alimentaria en el país incluyen pobreza extrema y fragilidad económica, fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, degradación de la tierra, emergencia sanitaria, los confinamientos por COVID-19 y más recientemente el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha incrementado el precio de los combustibles y fertilizantes.

Por otra parte, las constantes y fuertes precipitaciones registradas en septiembre 2022 han causado daños a las infraestructuras comunitarias y familiares como viviendas, bienes y activos productivos especialmente en la zona del Valle de Sula (norte) y occidente del país con altas probabilidades de intensificarse en los últimos meses del año debido a los efectos de las tormentas tropicales.

La desigualdad de género existente en Honduras se agudizó con la pandemia de COVID-19 y los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos que impactaron desproporcionadamente a mujeres, niñas y personas LGBTQ+, evidenciando los riesgos, necesidades y capacidades de género para hacerle frente. El Análisis Rápido de Género¹⁹ realizado por los socios humanitarios llama la atención sobre los efectos adversos específicos provocados en mujeres: empeoramiento de la calidad de vida y el incremento de la pobreza, el mayor desempleo, trabajo informal y trabajo de cuidados no remunerado y su desprotección social asociada, así como mayor migración

17 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/673/50/PDF/N0667350.pdf?OpenElement>

18 <https://psea.interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/2020-08/IASC-Plan-for-Accelerating-PSEA-in-Humanitarian-Response.pdf>

19 ONU Mujeres y CARE. Análisis Rápido de Género en Honduras. http://care.org.hn/analisis-rapido-de-genero-arg-un-panorama-frente-a-covid_19-eta-iota/

y desplazamiento, junto con la pérdida de ingresos y medios de vida, incremento de limitaciones para acceder a servicios como salud, incluyendo salud sexual y reproductiva (SSR), educación, agua, saneamiento e higiene y albergues.

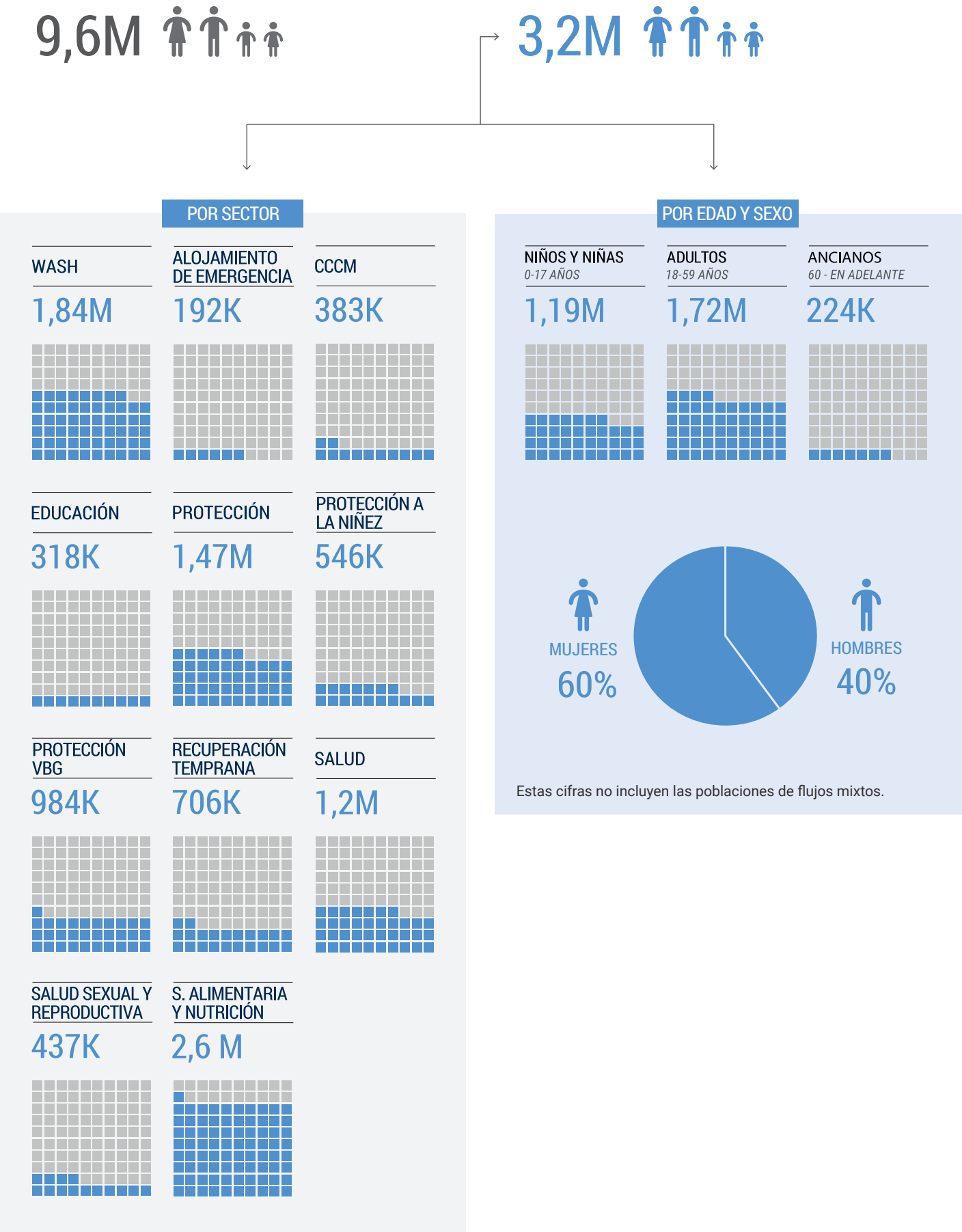
Incluso con el 32 por ciento del país ya en necesidad humanitaria, existe una fuerte posibilidad de un mayor deterioro. La mayoría de la población restante requiere restauración y sostenibilidad de servicios que aborden las necesidades básicas para prevenir y evitar que caigan en una crisis humanitaria.

Finalmente, al menos 700.000 personas continúan con necesidades de recuperación temprana producto de las tormentas tropicales de 2020 y requieren la garantía de sus ingresos para estabilizar sus medios y expectativas de vida.

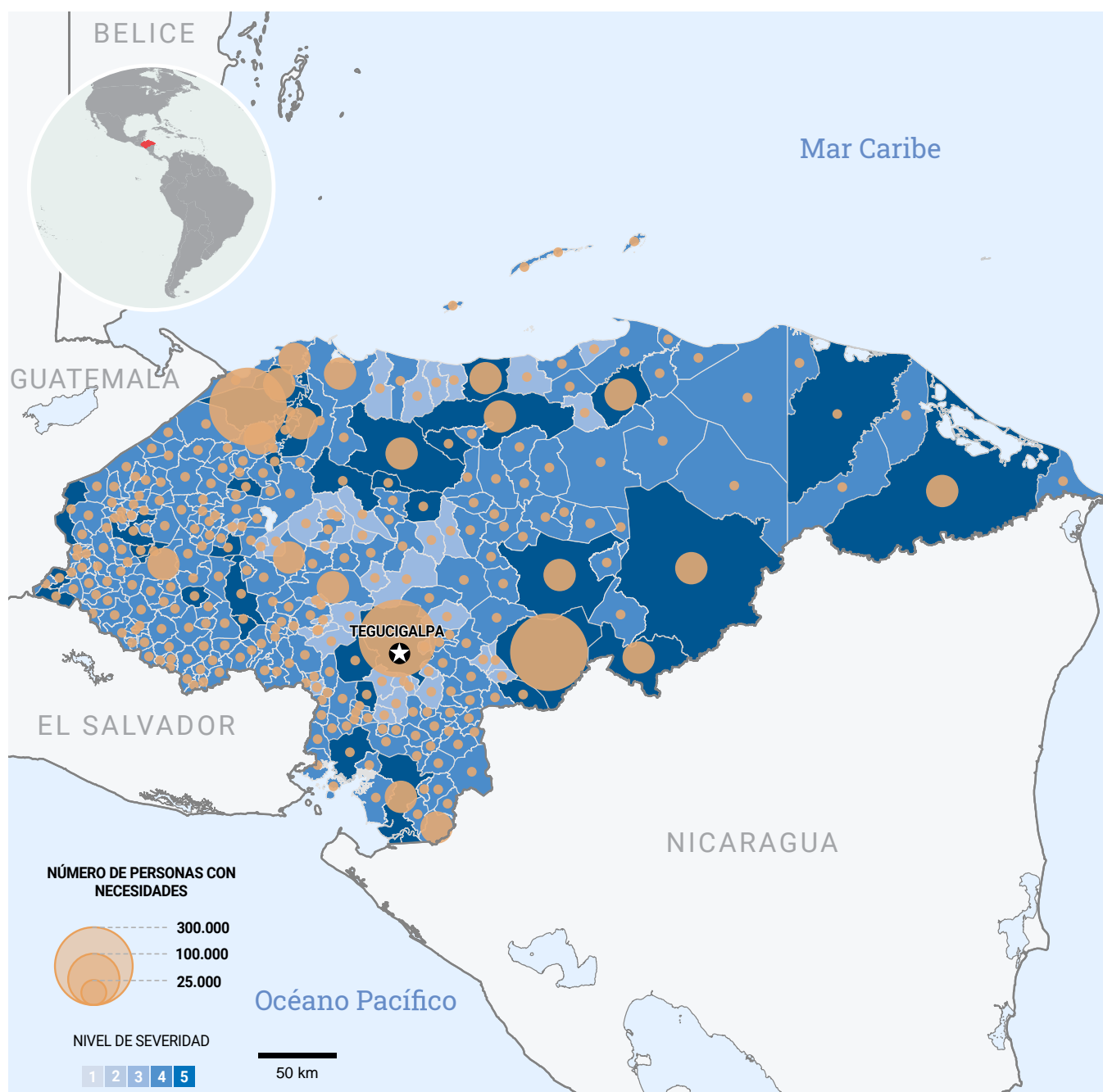
Número estimado de personas en necesidad

POBLACIÓN TOTAL

PERSONAS EN NECESIDAD



Severidad de las condiciones humanitarias y números de personas en necesidad



Las designaciones empleadas y la presentación del material en el informe no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.

Parte 1:

Impacto de la crisis y condiciones humanitarias

DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, HONDURAS

Foto: OCHA / Vincent Tremeau



1.1

Contexto de la crisis

Contexto político

Las elecciones generales en noviembre de 2021 contaron con una participación histórica del 68.58 por ciento²⁰. El proceso electoral fue pacífico y la conflictividad social disminuyó²¹ (17 conflictos en diciembre, la cifra más baja del año)²². Sin embargo, en los dos primeros meses de 2022 hubo 94 conflictos sociales. Las tensiones políticas alcanzaron su punto máximo cuando dos presidentes del Congreso, cada uno de una junta directiva, reclamaban legitimidad sobre el Poder Legislativo. El enfrentamiento político provocó escenas caóticas en el Congreso y protestas pacíficas en las calles. El 27 de enero, la presidenta electa Xiomara Castro tomó posesión del cargo y en febrero solicitó apoyo de la ONU para el establecimiento de un mecanismo de investigación contra la impunidad y la corrupción.

Perfil demográfico

Honduras tiene una población de 9.630.856 habitantes: 4.685.766 hombres (48.6 por ciento) y 4.945.090 mujeres (51.4 por ciento). El 39.4 por ciento son menores de 18 años. La población es relativamente joven (el 64 por ciento son personas de entre 15 y 64 años). La expectativa de vida ha ido aumentando, siendo de 72 años para los hombres y 77 años para las mujeres. Se estima que seis de cada 10 personas viven en zonas urbanas.

La población hondureña ha crecido de forma acelerada en las últimas décadas. La tasa media de crecimiento

anual de la población entre 2015 y 2020 superó el 1.6 por ciento, muy por encima de LAC (1.07 por ciento) y del mundo (1.11 por ciento), con repercusiones en el aumento del desempleo juvenil y la migración²³.

Honduras sufre un fuerte desequilibrio demográfico por la pérdida permanente de población en los constantes procesos de emigración. Según datos de la Encuesta de Hogares de 2017, en Honduras había unas 282.000 familias en las que al menos una persona se encontraba viviendo en otro país, lo que equivale a unos 424.000 migrantes (59.4 por ciento hombres y 40.6 por ciento mujeres). Estos hogares tienen menor porcentaje de personas viviendo en pobreza o pobreza extrema. Desde 1990, el número de migrantes hondureños que viven fuera del país ha aumentado de 156.000 a 985.000²⁴.

La ubicación de una vivienda en los centros urbanos influye en el acceso a los puestos de trabajo y servicios públicos. La permanente exposición a deslaves, inundaciones, fenómenos climáticos, la ubicación y precariedad de asentamientos y la insuficiencia en servicios sanitarios y de gestión de residuos son multiplicadores de amenazas que amplifican las dimensiones humanitarias de cualquier emergencia. En las zonas rurales esta situación es más preocupante debido a que el acceso a los servicios básicos requiere viajar largas distancias y muchas familias no cuentan con los recursos económicos para cubrir estos traslados. Las personas más pobres que alquilan o tienen una tenencia

20 Consejo Nacional Electoral, Honduras. Elecciones Generales, 28 de noviembre de 2021 - Escrutinio General. Resultados Elecciones.

21 Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Informe: "Conflicto y violencia política en las elecciones de Honduras, 2021. Causas, detonantes y oportunidades de mitigación". Noviembre 2021. Pág. 26.

22 ASJ. Boletín En-Fe 2022 Pág. 4.

23 ONU, 2017- Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, 2021. Informe WFP y OIM.

24 UNDESA, 2020.



TROJES, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, HONDURAS

Foto: OCHA / Vincent Tremeau

irregular están en mayor riesgo, ya que a menudo tienen pocos activos y la falta de oportunidades económicas aumenta los riesgos de reclutamiento de pandillas y reduce las opciones de arreglos de vivienda alternativos.

Perfil sociocultural

La tasa de alfabetización en Honduras es del 87 por ciento, una de las más bajas de Latinoamérica. Los valores son aún menores para mujeres adultas mayores indígenas. El 47 por ciento de las mujeres no

tiene educación secundaria y solo el 9 por ciento tiene licenciatura o educación superior²⁵.

La alta desigualdad de género se evidencia en los niveles de acceso a los servicios básicos. Las mujeres y niñas, en especial indígenas y rurales, enfrentan mayor pobreza, desempleo, carga de trabajo de cuidados no remunerado y limitación de acceso a servicios de salud, condiciones que empeoraron durante la pandemia de COVID-19 y el impacto de los huracanes. Las mujeres poseen solo el 12 por

25 OIM. Perfil Migratorio de Honduras 2019. https://publications.iom.int/system/files/pdf/mp_honduras-2019-es.pdf

ciento de la tierra, en un contexto caracterizado por la inseguridad jurídica de la tenencia. Las mujeres también tienen dificultades para acceder a créditos o propiedades por inestabilidad e informalidad laboral, brecha salarial y/o roles de cuidado, en el que invierten del cuatro al 15 por ciento más tiempo que los hombres.

En Honduras, el siete por ciento de la población es indígena. En términos generales, los indicadores de desarrollo de esta población son inferiores a las medias nacionales, lo que suscita una mayor vulnerabilidad al surtido de riesgos que existen en el país y una mayor brecha para acceder a la asistencia humanitaria, a la recuperación y al desarrollo. A pesar de que la política pública asegura la inclusión de las poblaciones indígenas y afro hondureñas, su participación en las decisiones de política pública es baja a nivel departamental y casi inexistente a nivel nacional. Además, la población misquita considera que las políticas educativas y económicas del país no los reconocen; por ejemplo, en la transición hacia la educación virtual no se consideraron las limitaciones que enfrentan y en la respuesta a la pandemia, la región misquita fue una de las últimas en recibir pruebas PCR. Las mujeres indígenas son el grupo que muestra mayores situaciones de desigualdad en todos los indicadores socioeconómicos.

Perfil económico

Si bien Honduras es un país de renta media, alrededor del 70 por ciento de la población trabaja en la economía informal, caracterizada por ingresos bajos y sin protección social ni los beneficios del limitado crecimiento económico en los últimos años. Al contrario, el ingreso real per cápita para los sectores más vulnerables ha disminuido. Además, persisten las condiciones precarias en el trabajo: ocho de cada 10 mujeres y siete de cada 10 hombres trabajan en

condiciones precarias y mal remuneradas, situación que se pronuncia más en las trabajadoras domésticas. Muchas personas enfrentan dificultades para acceder a la seguridad social o recibir subsidios u otro tipo de apoyo financiero por no aparecer en ninguna nómina.

En el Índice de Desarrollo Humano, Honduras descendió del puesto 132 (de 191 países) en 2020 al puesto 137 en 2022, el segundo más bajo en LAC después de Haití.

Pese a algunos avances significativos y diferenciados, la pobreza, la pobreza extrema y las inequidades siguen haciendo que Honduras tenga uno de los coeficientes de Gini más altos del mundo (0.55 en 2021)²⁶. Casi la mitad de la población vive en pobreza, condición que alcanza niveles críticos en comunidades rurales y afecta en mayor medida a la población indígena y/o afrodescendiente. Este determinismo socioeconómico exacerba la vulnerabilidad de estas poblaciones frente a los efectos del cambio climático, las epidemias u otros choques.

Marco legal y jurídico

Honduras ha hecho esfuerzos importantes para promover una migración segura, ordenada y regular y fortalecer la protección de las personas refugiadas. El Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4) firmado por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (1991) permite el tránsito de personas en estos países sin necesidad de pasaporte y con trámites migratorios expeditos.

Honduras es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como de la Declaración de Cartagena de 1984. El proceso para determinar la condición de refugiado está integrado en la Ley de Migración y Extranjería (2004) y se encomienda al Instituto Nacional de

26 El coeficiente de Gini mide la desigualdad en los ingresos. Es un número entre 0 y 1, donde cero (0) corresponde a la igualdad perfecta (todos tienen los mismos ingresos) y 1 corresponde a la desigualdad perfecta (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 2021.

Migración (INM). Honduras es parte del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones para abordar el desplazamiento forzado en Centroamérica y México (MIRPS), aunque aún no cuenta con una Ley que regule el desplazamiento forzado.

Honduras también es parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres de Belén do Pará y la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, cuyo Protocolo facultativo aún no ha ratificado, afectando la garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Después del impacto desproporcionado de la pandemia de COVID-19 en las mujeres, personas LGBTIQ+ e indígenas y afro hondureñas, Honduras estableció el Decreto No. 99 (2020) para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en emergencias y ha adoptado compromisos para la protección de poblaciones indígenas y personas LGBTIQ+.

También se han hecho avances en los marcos legales de gestión de riesgos en línea con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Entorno de seguridad

Según el Índice Global de Paz de 2021, Honduras sufrió el tercer mayor deterioro de su nivel de paz (su puntuación global cayó en un 7.1 por ciento). La paz está ahora en su nivel más bajo de la última década, ocupando el puesto 124 (de 163 países) a nivel global y décimo en LAC.

En 2021, la tasa de homicidios fue de 38.6 por cada 100.000 habitantes, inferior a la de 2020 pero 13.1 puntos por encima de la tasa de LAC y la más elevada de Centroamérica. Esta cifra significa que perdieron

la vida de manera violenta 10 personas cada día en promedio (3.651 homicidios de enero a diciembre)²⁷.

Aunque durante 2021 las actividades delictivas disminuyeron, al cierre del año y en el primer semestre de 2022 la criminalidad y sus impactos diferenciados por género han repuntado. Durante 2021, se registraron 318 muertes violentas de mujeres y femicidios y hasta septiembre de 2022 se reportan 211 femicidios²⁸. Casi el 68 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses²⁹.

Los NNA están expuestos a la violencia armada, sexual e intrafamiliar, abuso, negligencia y explotación (de los casi 3.651 homicidios en 2021, un 4.5 por ciento eran de menores de edad). La deserción escolar y el cierre temporal de las escuelas representan la pérdida del entorno protector y aumentan los riesgos de protección.

Perfil medioambiental

Honduras es uno de los países de más alto riesgo de desastres del mundo y de los más afectados por eventos climáticos extremos, como inundaciones, huracanes y sequías. Estos choques recurrentes son cada vez más intensos y se vinculan con la migración.

En los últimos años, las sequías más prolongadas en ciertas zonas del país, relacionadas al fenómeno climatológico de El Niño y las lluvias cada vez más fuertes provenientes de depresiones o tormentas tropicales y del fenómeno de La Niña en otras partes, han tenido un efecto devastador e incurrido en costos elevados. En los últimos seis años las tormentas y huracanes han incrementado en número y grado de destrucción.

27 <https://infosegura.org/2022/03/08/violencia-homicida-en-honduras-2021/>

28 Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), Informe infográfico N. 10 Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios de enero a diciembre de 2021. <https://iudpas.unah.edu.hn/dmsdocument/11995-boletin-infografico-muerte-violenta-de-mujeres-y-femicidios-25-enero-2022>

29 Encuesta del Instituto Nacional de Estadística y la Secretaría de Salud de Honduras 2022.

Los mercados agrícolas locales fueron diezmados en 2018 por una de las peores sequías de los últimos 40 años y en 2020, las Tormentas Tropicales Eta e Iota fueron las más graves en más de 20 años, afectando unos cuatro millones de personas³⁰. Las frecuentes sequías en el Corredor Seco, una subregión climática que Honduras comparte con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, han perturbado gravemente las prácticas agrícolas, socavando la producción de alimentos y aumentando los niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición, especialmente en las comunidades rurales³¹.

Estos factores ambientales son acompañados por la degradación ambiental, erosión y salinización de suelo afectando la salud y los medios de vida, especialmente en comunidades rurales.

Existe una inseguridad jurídica en la tenencia, la propiedad y el uso de la tierra por la superposición de títulos (entre privados y comunidades étnicas) que provoca conflictos sobre el territorio. Esta situación afecta de manera desproporcionada a las comunidades garífunas e indígenas y a defensores de derechos ambientales o territoriales³².

Los asentamientos urbanos precarios están permanentemente expuestos a deslaves e inundaciones y a menudo no cuentan con servicios sanitarios y de gestión de residuos, amplificando las dimensiones humanitarias en emergencias.

Estas consideraciones ambientales exponen a las mujeres y las niñas a mayores riesgos, impactos y desigualdades que resultan en niveles elevados de mortalidad y morbilidad, pobreza, inseguridad alimentaria, residencia en viviendas inadecuadas, limitaciones en el acceso a servicios de salud y educación y menor participación en temas sobre cambio climático y reducción de riesgo de desastres.

Arquitectura humanitaria

Honduras cuenta desde 2010 con un Equipo Humanitario de País (EHP o Red Humanitaria) que vela por la coordinación internacional de la asistencia humanitaria mediante protocolos acordados entre autoridades nacionales y sus socios.

La Red Humanitaria incluye agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas, ONG nacionales e internacionales, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el sector privado y otros actores, quienes colaboran en actividades coordinadas de preparación y respuesta a desastres.

30 El Salvador, Guatemala y Honduras: Panorama de Necesidades Humanitarias Resumen (Ciclo de Programa Humanitario, julio 2021).

31 Ecological Threat Report 2021, Understanding Ecological Threats, Resilience and Peace. Institute for Economics and Peace (IEP). <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ETR-2021-web.pdf>

32 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 4 de marzo de 2022.



GUARUMA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Foto: OCHA / Vincent Tremeau

1.2 Choques e impacto de la crisis

Choques, acontecimientos en curso y sus impactos

Para el análisis de las necesidades humanitarias en Honduras, así como para la definición del nivel de severidad por municipio, los clústeres priorizaron cuatro choques críticos que condicionan el contexto humanitario a nivel nacional: la seguridad alimentaria y nutricional; la violencia; la crisis de movilidad humana y desplazamiento; Cambio climático y desastres: sequía, inundaciones y los remanentes de Eta e Iota.

Seguridad alimentaria y nutricional

En 2022, al menos 2,6 millones de personas (27 por ciento de la población clasificada; 51 por ciento

mujeres, 49 por ciento hombres) se encuentran en Crisis alimentaria o peor (Fase 3 o peor CIF) y requieren acciones urgentes.

De los 18 departamentos, 17 se clasificaron en Fase 3 excepto Cortés (Fase 2 CIF). Las lluvias en septiembre de 2022 afectaron drásticamente los cultivos en las zonas norte y occidente, lo que podría incrementar el número de personas en Crisis o peor (Fase 3 o peor CIF). Los departamentos con mayor severidad son Gracias a Dios (43 por ciento), Lempira (32 por ciento) y La Paz (30 por ciento); estos dos últimos son productores de granos básicos de subsistencia y cultivo de café.

Los hogares que no pudieron dedicarse al trabajo agrícola o cosechar sus cultivos vieron agudizada su inseguridad alimentaria por la falta de empleo, el agotamiento de las reservas, el alza de los precios de alimentos y la crisis en la cadena de suministros a nivel internacional, entre otros. El período de hambre estacional podría acentuar el uso de las estrategias de afrontamiento de crisis y emergencia en los hogares afectados. El incremento de los precios de los insumos productivos (fertilizantes principalmente) repercute negativamente en los procesos productivos y se prevé la reducción de áreas de siembra de granos básicos en los próximos ciclos.

Los hogares urbanos de periferia, a raíz de los confinamientos y las recientes inundaciones, han visto mermados sus ingresos. Además, se enfrentan a tasas de inflación acumulada del 6.57 por ciento e interanual del 10.22 por ciento a consecuencia de los altos precios de los combustibles y el conflicto entre Ucrania y Rusia, que han incrementado a niveles exacerbados los costos de los alimentos. El agotamiento de reservas en el mercado afecta principalmente a hogares que obtienen sus alimentos por medio de compra.

Nutrición

La malnutrición en Honduras muestra tanto los excesos como las deficiencias en el consumo de alimentos, resultando en sobrepeso u obesidad y en desnutrición. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA-19, publicada en 2021), el 19 por ciento de niñas y niños sufre retardo en el crecimiento (desnutrición crónica) y el cuatro por ciento retardo en el crecimiento severo (desnutrición crónica severa). La prevalencia de bajo peso es del siete por ciento, con mayor incidencia en el área rural. Las personas más vulnerables son las más afectadas: mujeres embarazadas o lactantes y los niños y niñas menores de cinco años.

A pesar de las intervenciones de asistencia alimentaria humanitaria ejecutadas tanto por el Estado como por agencias de cooperación, el apoyo brindado ha sido insuficiente para cubrir los impactos sufridos en 2020 y 2021.

Violencia

De acuerdo con la actualización del Análisis de Protección del Clúster de Protección y sus Áreas de Responsabilidad, Honduras enfrenta una violencia generalizada que sigue generando múltiples impactos humanitarios y riesgos de protección³³.

Los grupos y organizaciones delictivas ejercen control sobre la población tanto urbana (personas que viven en lugares estratégicos de interés para maras y pandillas) como rural (campesinos, comunidades garífunas e indígenas). Dichos grupos imponen restricciones a la movilidad y a la libertad a través de las denominadas “fronteras invisibles”, los toques de queda y las restricciones en el ejercicio de las actividades cotidianas. Las personas no pueden acceder a la salud, la educación, el trabajo y la utilización de espacios públicos como escenarios de protección y participación. Los NNA, mujeres y niñas y personas con discapacidad son especialmente vulnerables.

La extorsión es fuente de financiación y mecanismo de control social y territorial sobre las comunidades. Afecta principalmente a comerciantes y transportistas, pero cada vez más se extiende a otros perfiles de población como quienes trabajan en la construcción o las personas que reciben remesas. De acuerdo con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), al menos 13 de los 18 departamentos del país han sido escenarios de extorsión; Francisco Morazán y Cortés concentran el mayor número de denuncias (79 por ciento)³⁴. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

33 En los ejercicios de análisis conjunto que sustentan el documento de Análisis de Protección se acordó caracterizar la situación que enfrenta el país como un contexto de violencia generalizada considerando que a pesar de que este no es un término técnico y, en consecuencia, no tiene una definición estricta o cerrada, sí permite describir situaciones caracterizadas por un nivel de violencia que en intensidad, extensión o densidad geográfica generan afectaciones sobre un grupo de personas que, a causa de los riesgos sobre su vida, seguridad, libertad o integridad personal se ven forzadas a desplazarse. Estos elementos constitutivos del contexto de violencia generalizada, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, son desarrollados a lo largo del documento considerando de manera particular la intensidad y la extensión de los riesgos priorizados. https://www.globalprotectioncluster.org/sites/default/files/2022-09/220912_pau_honduras_2.pdf

34 Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH). “La extorsión: un detonante del desplazamiento forzado de personas en Honduras”.

los Derechos Humanos (OACNUDH) reportó que en 2021 al menos 209 personas defensoras de derechos humanos y 93 periodistas fueron víctimas de ataques como amenazas, hostigamientos y hasta de homicidios. De las 302 personas afectadas, 119 pertenecen a pueblos étnicos y 169 son defensores del territorio y el medio ambiente³⁵.

Crisis de movilidad humana y desplazamiento³⁶

Históricamente, Honduras ha sido un país de origen, ingreso, tránsito y, en menor medida, de destino de personas refugiadas y migrantes. Los efectos de la crisis multicausal que se desarrollan en este documento generan que Honduras sea un país de origen de personas refugiadas y migrantes.

De acuerdo con el reporte Tendencias Globales (ACNUR), en 2021 Honduras fue el sexto país con mayor cantidad de solicitudes de asilo presentadas (59.800, lo que representa un 13 por ciento más que las 52.800 en 2020).

A inicios de 2021, continuó la salida de movimientos masivos de personas en grupos (“caravanas”). Sin embargo, en 2022 se observan grupos reducidos que evitan ser detectados por las autoridades de frontera.

En 2022 aumentó el número de personas retornadas (82.968 al 31 de octubre); un 41 por ciento más respecto al mismo periodo de 2021, muchas con necesidades de protección y asistencia.

Con respecto al desplazamiento interno, de acuerdo con el Estudio de Caracterización de 2019, al menos 247.090 personas (2.7 por ciento de la población) se vieron forzadas a desplazarse por la violencia entre 2004 y 2018 (55 por ciento mujeres, 45 por ciento hombres y 43 por ciento menores de edad). De ellas, el 56 por ciento se desplazaron entre 2014 y 2018.

De acuerdo con el CONADEH, las denuncias presentadas por los desplazados internos incrementaron un 55.64 por ciento entre 2016 y 2019 (13.91 por ciento por año). Esta cifra disminuyó en 2020 y 2021 (1.428 y 1.511) debido a las restricciones de movimiento consecuencia de Eta e Iota y la pandemia y a una constante pérdida de confianza en la eficacia de las instituciones públicas. No obstante, durante 2022 estas cifras volvieron a registrar un aumento significativo³⁷.

Las principales causas que generan el desplazamiento interno incluyen: las amenazas (55 por ciento), los homicidios (40 por ciento), las restricciones a la movilidad (24 por ciento), las lesiones (16 por ciento), las extorsiones (13 por ciento), la violencia sexual (10 por ciento), y la usurpación o despojo de vivienda (9 por ciento)³⁸.

Movimientos mixtos

Honduras no se caracteriza como un país de destino. De acuerdo con cifras oficiales, en 2021 se recibieron 108 solicitudes de asilo, de ellas 78 fueron reconocidas. Hasta octubre de 2022, se han recibido 103 solicitudes (equivalente a un 95 por ciento de la cifra registrada en 2021).

Por su posición geográfica, Honduras ha sido tradicionalmente un país de ingreso y tránsito de personas que integran movimientos mixtos que se dirigen hacia el norte del continente americano, desde Suramérica u otros países transcontinentales.

El país enfrenta retos para mejorar las condiciones de recepción de personas migrantes y refugiadas integrantes de movimientos mixtos que ingresan por la frontera con Nicaragua (principalmente por los departamentos de El Paraíso y Choluteca), transitan por el centro del país (Distrito Central y municipios aledaños del departamento de Francisco Morazán) y

35 La Oficina de Derechos Humanos reportó 10 casos de homicidios, siete hombres y tres mujeres, dos de ellas transgénero, dos afrodescendientes y una indígena. Dos de ellas eran beneficiarias de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Protección. Op.cit OACNUDH. Informe 2022 Pág. 19.

36 Análisis de Protección desarrollado por el Clúster de Protección en conjunto con las Áreas de Responsabilidad de Violencia Basada en Género (VBG) y de Protección de la Niñez publicado en septiembre de 2022.

37 Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Informe Especial: “Situación del Desplazamiento Forzado Interno en Honduras entre 2016 y 2021”.

38 Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Joint IDP Profiling Service (JIPS). Estudio de Caracterización Desplazamiento Interno por Violencia en Honduras 2004-2018. Diciembre 2019.

salen por la frontera con Guatemala (departamentos de Ocotepeque, Copán y Cortés).

En 2022 destacaron los ingresos irregulares registrándose cifras récord. De acuerdo con cifras oficiales, al 31 de octubre habían ingresado irregularmente 141.200 personas (26.83 por ciento mujeres, 55.09 por ciento hombres, 9.97 por ciento niños y 8.1 por ciento niñas). De ellas, el 74 por ciento (104.548) lo hicieron por las delegaciones de Trojes y Danlí. Esta magnitud, junto con la vulnerabilidad y necesidades de protección, han sobrepasado las capacidades de respuesta en las zonas de ingreso, tránsito y salida, imponiendo retos de coordinación entre los actores humanitarios. Adicionalmente, 323.813 personas de nacionalidad nicaragüense ingresaron en 2022 de manera regular. Por las condiciones de país de origen y las cifras de salida que reporta el Instituto Nacional de Migración, podrían estar en necesidad de protección internacional y protección específica.

De acuerdo con el análisis del Clúster de Protección³⁹, este aumento refleja el cambio en la dinámica del ingreso por la frontera oriente. De las 104.548 personas que ingresaron al 31 de octubre por esta frontera, 58.522 eran hombres (56 por ciento), 26.984 mujeres (26 por ciento), 10.672 niños (10 por ciento) y 8.370 niñas (8 por ciento). El 74 por ciento son de origen venezolano y cubano seguidas por personas de origen ecuatoriano, haitiano y colombiano con una participación del 16 por ciento.

Estas cifras de ingreso, aunado al aumento del tiempo de permanencia registrado desde marzo, han sobrepasado las capacidades de las instituciones⁴⁰. Los municipios de ingreso no cuentan con las condiciones de recepción adecuadas: alojamiento,

atención en salud, apoyo psicosocial, nutrición, WASH y servicios de protección adecuados para los riesgos identificados.

Las dinámicas de la ruta, los riesgos de trata y tráfico y las múltiples violaciones a los derechos humanos durante el trayecto, incluyendo algunos casos de corrupción que han sido advertidos, imponen múltiples retos para la consolidación de una ruta integral que permita consolidar las condiciones de recepción de las personas refugiadas y migrantes en movimientos mixtos.

Entre 2021 y 2022, al menos 180.000 personas resultaron afectadas por 11 tipos de emergencias por desastres relacionados con el clima, en su mayoría inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y sequía (Corredor Seco) en municipios cuyos Comités de Emergencia Municipal (CODEM) estaban recién conformados o no contaban con recursos para implementar planes de respuesta a desastres.

En septiembre de 2022, las lluvias afectaron a más de 80.000 personas, de las cuales, más de 9.000 fueron albergadas. Se reportaron más de 2.000 viviendas dañadas, así como daños agrícolas y de infraestructura vial en más de 250 comunidades, con impactos diferenciados en mujeres rurales líderes de hogar, quienes han perdido sus animales domésticos y huertos y enfrentan problemas para obtener alimentos⁴¹. Los daños en los cultivos y otros medios de vida se prolongan en el mediano y largo plazo y dificultan el acceso a alimentos.

En octubre de 2022, la Tormenta Tropical Julia afectó 15 de los 18 departamentos del país. Se estima que las inundaciones han afectado unas 200.000 personas en el Valle de Sula (norte) y 24.000 en el departamento de

39 Honduras Análisis de Protección, Septiembre 2022, desarrollado por el Clúster de Protección, en conjunto con las Áreas de Responsabilidad de Violencia Basada en Género (VBG) y de Protección de la Niñez.

40 ONU Honduras: Movimientos mixtos en la frontera suroriental.

41 Afectaciones a campesinas durante las tormentas. Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina. Septiembre 2022.

Gracias a Dios (20 por ciento de su población), donde habita el pueblo misquito, minando su resiliencia y medios de vida⁴².

Muchas áreas geográficas afectadas en 2022 coinciden con las zonas impactadas en 2020 por las Tormentas Eta e Iota y/o con zonas controladas por grupos delictivos, aumentando los riesgos de protección y las necesidades específicas de la población doble o triplemente afectada (especialmente para personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento).

Las necesidades también se han agudizado en las personas que integran movimientos mixtos y se han visto expuestas al aumento en los niveles de los ríos o al daño a la infraestructura vial al intentar cruzar el territorio.

Ante las afectaciones por desastres, las necesidades de alojamiento, acceso a servicios de protección, agua segura y servicios de saneamiento básico, atención a la salud física y mental y la seguridad alimentaria de la población se ven cada vez incrementadas. El alto nivel de vulnerabilidad de las comunidades genera desastres recurrentes o cíclicos cuya población afectada no está saliendo de la pobreza ni de su exposición al riesgo⁴³.

Impacto en las personas

Violencia basada en género (VBG) y los impactos sobre las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+

El contexto en Honduras representa múltiples desafíos para el respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres y niñas, siendo el país con la tasa más alta de femicidios en LAC. En 2021 se registraron 342 muertes violentas de mujeres y hasta septiembre de 2022 se reportan 211 femicidios⁴⁴.

Los niveles alarmantes de violencia sexual se relacionan con el alto índice de embarazos y maternidades en la adolescencia. El 23 por ciento de las adolescentes de entre 15 y 19 años han estado embarazadas al menos una vez en su vida⁴⁵ y un alto número de estos son consecuencia de violencia sexual. La violación sexual es el tercer delito más denunciado en el país, en cuanto a violencia contra las mujeres⁴⁶.

Los riesgos para las mujeres, las adolescentes y las niñas en el país están íntimamente relacionados con el contexto humanitario, y con las manifestaciones sociales de la violencia urbana, el desplazamiento forzado y las barreras que enfrentan las personas sobrevivientes de VBG para acceder a la justicia y a la reparación del daño.

En emergencias, los riesgos de VBG incrementan, las necesidades diferenciadas de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ pueden verse desatendidas y las brechas en el acceso a servicios especializados de respuesta a la VBG pueden ser mayores.

Impacto de la violencia sobre las niñas, los niños y adolescentes (NNA)

Los NNA en Honduras enfrentan diferentes formas de violencia en el hogar, la escuela y la comunidad. Según el Informe de Progreso Educativo para Honduras (2021) 758.095 NNA de entre cinco y 17 años estaban fuera de la escuela (el 50.2 por ciento por falta de recursos económicos y el 26.3 por ciento por no querer seguir estudiando)⁴⁷.

Las NNA corren un riesgo desproporcionado de muerte violenta. Durante los últimos 24 años (entre febrero de 1998 y junio de 2022) se han registrado 14.084 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes

42 COPECO

43 Comité Permanente entre Organismos (IASC) 2009. Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes.

44 Centro de Derechos de Mujeres (CDM) (s. f.) Observatorio de Violencias contra las mujeres 2022.

45 Instituto Nacional de Estadística. Marzo 2022. Situación de la Mujer Hondureña en el Marco del Día Internacional de la Mujer. INE. Situación de la Mujer Hondureña.

46 Centro de Estudios de la Mujer Honduras. Julio 2020. Informe de veeduría social sobre la calidad en los servicios de atención en las instituciones de acceso a la justicia Intibucá. CEM. Informe de Veeduría Social.

47 FEREMA. (s. f.). Informe de Progreso Educativo HONDURAS 2022.

violentas de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años⁴⁸. En 2021, se registraron 14.385 denuncias por delitos cometidos contra la niñez asociadas a violencia, negligencias o situación de vulnerabilidad de los menores de 18 años⁴⁹, aunque las denuncias no reflejan toda la problemática ya que para muchas niñas y niños víctimas no es accesible ni seguro denunciar.

Según datos oficiales, desde enero de 2014 a agosto de 2022, se han registrado 101.097 casos de NNA retornados y solo en 2022 ya se contabilizan 12.268 casos (56 por ciento niños y 44 por ciento niñas); de estos, el 49.6 por ciento pertenecen al ciclo etario de primera infancia, el 29.3 por ciento a la adolescencia y un 21.1 a la infancia⁵⁰.

Impacto en la salud mental

La violencia crónica ha afectado la salud mental de la población. Un estudio realizado en Yoro, Choluteca y Cortés⁵¹ indica la prevalencia de trastornos mentales relacionados con la violencia hasta en un 74 por ciento. Otro estudio realizado en Tegucigalpa⁵² encontró que aquellas personas con síntomas de depresión/ ansiedad tenían 2.4 veces más probabilidades de reportar violencia física y 3.7 veces más probabilidades de reportar violencia sexual.

Las mujeres de entre 18 y 30 años principalmente de áreas urbanas son más vulnerables a ser afectadas por necesidades complejas de salud mental. La última Encuesta de Demografía y Salud Mental (ENDESA)⁵³ dedica una mirada a la salud mental masculina, reportándose como los grupos con mayores necesidades complejas/crónicas de salud mental a los varones del área rural (10 por ciento), sin escolaridad (17 por ciento), mayores 35 años (de 11 a 12 por

ciento), grupo étnico chortí (17 por ciento) misquito (17 por ciento), y mayor pobreza (15 por ciento). El departamento de Gracias a Dios es el que reporta el valor más alto en este indicador (21 por ciento).

Protección contra la explotación y abuso sexual (PEAS)

En contextos humanitarios, las comunidades afectadas enfrentan el gran riesgo de la explotación y el abuso sexual (EAS) por parte de actores humanitarios. En particular, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultas mayores, LGBTIQ+, de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes en situación de vulnerabilidad están en mayor riesgo.

En Honduras se observa con preocupación el limitado número de organizaciones humanitarias que han tomado pasos significativos con respecto a acciones de prevención y respuesta a la EAS en línea con los Estándares Operativos Mínimos de PEAS⁵⁴ y el Plan de Aceleramiento para PEAS del IASC⁵⁵. Aunque a finales de 2021 comenzaron los esfuerzos para conformar una Red Inter-Agencial de PEAS con puntos focales de las agencias, fondos, y programas de las Naciones Unidas y ONG, es en 2022 cuando se han producido unos términos de referencia de la Red, como también una estrategia y plan de trabajo para la Red, el UNCT y la Red Humanitaria.

Un gran número de organizaciones humanitarias en Honduras han designado puntos focales para PEAS. Sin embargo, muchos de ellos deben fortalecer su entendimiento sobre la prioridad de PEAS y las responsabilidades de su rol y el de la alta gerencia en impulsar acciones de prevención y respuesta, en línea con los Estándares Operativos Mínimos para

48 Casa Alianza Honduras. Junio 2022. CASA ALIANZA. Informe mensual.

49 Datos registrados a partir del informe de la Secretaría de Seguridad sobre denuncias de delitos contra la niñez, que incluyen: homicidio, suicidio, asesinatos, abandono, negligencia, maltrato, acoso sexual, abuso sexual, explotación sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, proxenetismo, incesto, pornografía, secuestro, trata, tortura, violencia intrafamiliar y otras formas de violencia.

50 Instituto Nacional de Migración. INM. Niños y niñas retornados.

51 Mejía D., Pérez I., Linares R., et al. Prevalencia de trastornos mentales en relación con la violencia, resiliencia y estrategias de afrontamiento en Yoro, Choluteca y Cortés, junio, 2016. Revista Portal de la Ciencia. Julio 2018;14:139-157.

52 Río Navarro J., Cohen J., Rocillo Arechaga E., Zuniga E., Médecins Sans Frontières Evaluation and Action Team—Honduras. Physical and sexual violence, mental health indicators, and treatment seeking among street-based population groups in Tegucigalpa, Honduras. Rev Panam Salud Publica. 2012;31(5):388-95.

53 Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS 2019).

54 <https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/Minimum%20operating%20standards-psea%20by%20own%20personnel%202012.pdf>

55 https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_plan_for_accelerating_psea_in_humanitarian_response.pdf

PEAS y los tres resultados prioritarios del Plan de Aceleramiento del IASC, como son el contar con canales seguros y accesibles para el reporte de EAS, asistencia de calidad para personas víctima/sobreviviente de EAS y fortalecer la rendición de cuentas, incluyendo las investigaciones de reportes de EAS.

La EAS por personal humanitario va en contra del principio de acción sin daño, transgrede los derechos fundamentales de personas afectadas y constituye una amenaza para la vida de estas.

Impacto en los sistemas y servicios

Los diversos choques que enfrenta la población han reducido la disponibilidad, calidad y accesibilidad a los sistemas y servicios básicos. La reducción de actividades comerciales y productivas por la pandemia de COVID-19 y las tormentas ha disminuido la recaudación tributaria y las inversiones públicas, interrumpiendo programas sociales y debilitando las redes de protección social, lo que afecta la recuperación a largo plazo.

Servicios de salud

Las restricciones de movilidad, carencias de equipos de salud y el cierre de instalaciones limitó la continuidad de servicios de salud primaria, especialmente en zonas urbanas y periurbanas incluyendo: cuidados obstétricos y neonatales de emergencia, SSR, inmunizaciones, atenciones especializadas a personas LGBTIQ+, salud mental y gestión clínica de la violación sexual. Según encuestas sobre los servicios de salud para febrero-marzo 2021, el primer nivel de atención enfrenta brechas de recursos humanos, escasez de medicamentos y suministros, entre otros.

La priorización de la COVID-19 también redujo las pruebas para detectar enfermedades endémicas como el dengue y retrasó las cadenas de suministros de medicamentos e insumos sanitarios.

Se estima que el 51.7 por ciento de las mujeres en Honduras recorren unos 30 minutos para ir a un

servicio de salud; el 58 por ciento no tienen acceso a servicios de SSR y un mismo porcentaje tampoco tiene acceso a servicios de higiene.

Salud mental

El 94 por ciento de mujeres no tiene acceso a servicios de salud mental, afectando la salud física y mental de mujeres y niñas que enfrentan embarazos forzados y el trauma de las agresiones sexuales, así como las consecuencias de la violencia de pareja íntima. En el país existe una presencia institucional importante con foco en salud mental, sin embargo, su capacidad se ha visto desbordada.

Servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH)

Los desafíos en la restauración del acceso a servicios WASH después de Eta e Iota han puesto a prueba las capacidades limitadas de los proveedores. Las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en septiembre de 2022 interrumpieron el acceso de las familias en albergues a servicios adecuados de WASH, aumentando el riesgo de COVID-19 y brotes de enfermedades transmitidas por el agua, sobre todo en menores de cinco años.

Las inundaciones recurrentes en las zonas urbanas han afectado los servicios de agua y alcantarillado, exponiendo a la población a graves necesidades de WASH, especialmente a las mujeres, niñas y niños. Los Análisis Rápidos de Género en Honduras muestran que tan sólo el 35 por ciento de las mujeres tienen acceso a agua potable permanentemente.

Según el Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de WASH (OMS y UNICEF 2021), la cobertura del servicio de agua potable con una fuente mejorada se estima en un promedio nacional del 95.69 por ciento (99.84 por ciento urbana y 89.87 por ciento rural); en cuanto a agua gestionada de manera segura, la cobertura solo pudo estimarse para el área rural en 18.71 por ciento. La Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LATINOSAN 2019) ya reportó que la cobertura nacional del servicio gestionado de manera segura era tan solo del 9.84 por ciento (9.95 por ciento urbana y 9.72 por ciento rural).

Servicios de educación

El sistema educativo sufrió serios efectos durante la pandemia y la temporada de huracanes en 2020. Pese a las reaperturas paulatinas y modalidades híbridas de enseñanza que se aplicaron desde marzo de 2022, existe información reducida acerca de la calidad de estos modelos de aprendizaje y su impacto en el aprendizaje y bienestar de los NNA⁵⁶. Muchas zonas rurales o remotas no cuentan con condiciones adecuadas de suministro eléctrico y/o servicios de internet⁵⁷, llevando a un abandono escolar generalizado. Se estima que casi el 55 por ciento de estudiantes matriculados no pudieron continuar sus estudios.

Si se contemplan las 3.493.181 personas en edad escolar proyectadas para 2021 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) frente a las 1.806.486 matrículas que registra la Secretaría de Educación para el mismo año, la cifra de exclusión supera el millón y medio de NNA, o casi la mitad de la población escolar.

La habilitación recurrente de centros escolares como albergues para personas afectadas por las inundaciones ha limitado el acceso a la educación y deteriorado marcadamente estas instalaciones.

Impacto en el acceso humanitario

Las lluvias en septiembre de 2022 dañaron más del 60 por ciento de las carreteras primarias y secundarias y dejaron incomunicadas más de 90 comunidades

a nivel nacional⁵⁸ retrasando las actividades humanitarias y de desarrollo.

Aun considerando que las operaciones humanitarias emprendieron un esfuerzo colectivo para superar los retos, los daños extensos a la infraestructura de transporte y redes viales redujo el acceso requerido para realizar todas las asistencias necesarias y prestar ayuda crítica⁵⁹.

Las zonas rurales y con difícil acceso presentan más limitaciones en la respuesta debido a los recursos limitados disponibles y a las condiciones geográficas. Se ha dificultado la provisión de ayuda humanitaria en territorios cuyas vías de acceso se ven bloqueadas producto de los deslizamientos, inundaciones y/o crecidas de los ríos.

El control territorial ejercido por grupos delictivos en áreas afectadas supuso otra capa de complejidad a las ya limitadas condiciones de acceso y al entorno de seguridad para las personas afectadas y el personal humanitario. En zonas donde estos grupos criminales han avanzado su alcance y control, las restricciones de movilidad por intimidación y amenazas han afectado el acceso a bienes y servicios básicos y humanitarios.

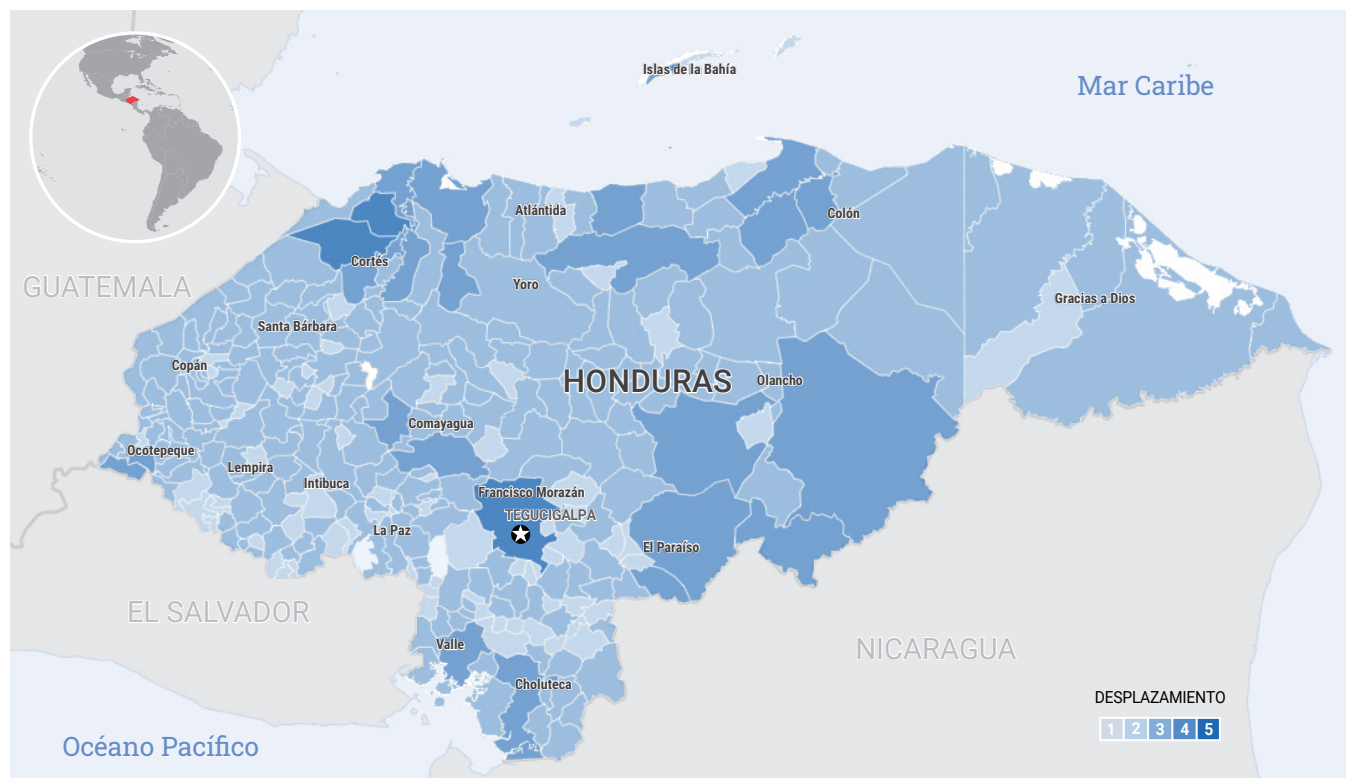
56 Actualización 24 de Educación UNICEF. www.unicef.org/lac/media/22981/file

57 <https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-25/el-coronavirus-en-latinoamerica-y-el-caribe-un-ano-sin-pisar-mi-escuela.html>

58 COPECO. Septiembre 2022

59 [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020-12-23 6W After %28SPA%29.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020-12-23%206W%20After%20SPA%29.pdf)

Impacto en las personas: desplazamiento interno



Las designaciones empleadas y la presentación del material en el informe no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.

1.3

Alcance del análisis

El análisis de las necesidades humanitarias integra un contexto de múltiples crisis en el ámbito social, económico, político y ambiental. En este escenario, el HNO se concentra en los impactos generados por la inseguridad alimentaria, los efectos del cambio climático (inundaciones y sequías), la violencia y la crisis generada por el desplazamiento y la movilidad humana.

El análisis abarca todo el territorio nacional y los resultados muestran que las necesidades se concentran en 3,2 millones personas que habitan en 257 de los 298 municipios del país (86 por ciento del total nacional) incluyendo zonas urbanas donde confluyen la presencia de maras y pandillas y el riesgo ambiental, así como zonas rurales con escenarios de control territorial dada la existencia de intereses relacionados con la tierra.

Al menos el 41 por ciento de las personas en necesidad han tenido repercusiones en su bienestar físico y presentan afectaciones a su salud mental por la exposición a riesgos de protección y contra su integridad, ya sea por agresiones físicas, por actos de violencia sexual, heridas, atentados, por la amenaza que supone vivir bajo el control de grupos delictivos, por la exposición a otras violencias que se invisibilizan o por enfermedades adquiridas por la falta de acceso a los medios de vida que aseguran su bienestar.

Se identificaron cerca de 1,6 millones de personas (47 por ciento de las personas en necesidad) que requieren atención en mediano plazo para asegurar estándares de vida dignos debido a las barreras de accesos a servicios, bienes y medios de vida fundamentales, ya sea por condiciones de seguridad como parte del control e intimidaciones que sufren o por el desborde de capacidades para realizar la atención necesaria o limitaciones en los presupuestos o recursos humanos de las instituciones. Cabe resaltar la debilidad del sistema unificado de registro catastral del Instituto de la Propiedad, que, unido al desplazamiento forzado y a los desastres

de origen natural, lleva a la pérdida de los derechos de propiedad.

Además, se estima que al menos 2,6 millones de personas (81 por ciento de las personas en necesidad) adoptan diferentes mecanismos de afrontamiento para solventar sus necesidades básicas. Ante la falta de ingresos o las fuentes para acceder a estos y en caso de no adoptarse medidas para su integración socioeconómica como parte del nexo entre lo humanitario y el desarrollo, podrían empezar a configurarse colapsos en sus medios de vida en un largo plazo.

Los principales grupos vulnerables priorizados por tener necesidades derivadas de la múltiple afectación y riesgos latentes incluyen: personas víctimas de desplazamiento; personas en riesgo de desplazamiento; personas refugiadas y migrantes en movimientos mixtos; personas afectadas por desastres; y aquellas pertenecientes a pueblos indígenas y afro hondureñas. Las mujeres (1,8 millones), niñas (253.000) y niños (243.000), representan la mayoría de las personas en necesidad (64 por ciento) y forman parte de todos los grupos mencionados anteriormente.

El análisis también ha identificado a unas 262.000 personas pertenecientes a grupos étnicos en necesidad, de las cuales alrededor de 184.000 pertenecen a pueblos indígenas y 78.000 a comunidades afrodescendientes. Estos grupos, principalmente los que habitan en la región de la Mosquitia (departamento de Gracias a Dios) presentan serias barreras de acceso a servicios de salud, educación y alimentación debido a dificultades de acceso y brechas históricas.

A este escenario se suman 160.000 personas migrantes y refugiadas que ingresan por las fronteras de Honduras con el propósito de cruzar hacia el norte, expuestos a riesgos de protección. No obstante, el flujo puede variar de manera drástica, siendo una coyuntura de seguimiento y atención.



DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, HONDURAS

Foto: OCHA / Vincent Tremeau

1.4

Condiciones humanitarias y severidad de las necesidades

Las profundas condiciones humanitarias de las personas en necesidad en Honduras, particularmente algunos grupos vulnerables analizados, permitió su priorización. Las características del contexto donde habitan estos grupos y los factores de riesgo los hace especialmente vulnerables a los choques, de acuerdo con la edad, sexo o pertenencia étnica y esa vulnerabilidad se agrava cada vez más en los diferentes niveles de severidad. La capacidad de respuesta oportuna e integral de la institucionalidad e incluso comunidad humanitaria resulta insuficiente ante el impacto y desigualdades que aún persisten. Además, muchas de estas personas habitan en zonas de riesgo y son propensas a sufrir afectaciones por los fenómenos climáticos.

Bienestar físico y mental

Los grupos vulnerables priorizados presentan graves afectaciones en su salud mental resultado de las dinámicas de violencia ejercida por los grupos delictivos, maras y pandillas, los impactos asociados a desastres y el impacto remanente de la pandemia. Los grupos en mayor situación de vulnerabilidad enfrentando las consecuencias desproporcionadas de las crisis son las mujeres, NNA, personas LGBTIQ+, personas pertenecientes a grupos étnicos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Estas personas requieren atención rápida para asegurar el acceso a medidas de protección y atención psicológica por el impacto en su salud física, reflejado en casos de VBG, malnutrición que ocasiona

enfermedades o la pérdida de vida, e incluso de heridas y/o lesiones físicas por agresiones o ataques.

En cuanto al bienestar mental, han evidenciado el impacto de la violencia en la salud mental y la alta prevalencia de necesidades de mediana y alta complejidad en la población afectada por eventos violentos / traumáticos.

Algunas poblaciones en situación de vulnerabilidad experimentan un riesgo incrementado de sufrir por la correlación entre violencia y el impacto en su salud mental, especialmente las personas en situación de calle; así lo demuestra otro estudio realizado en Tegucigalpa que encontró que aquellas personas que reportaban síntomas de depresión/ansiedad fueron 2.4 veces más probables de reportar experiencias de violencia física en general y 3.7 veces más probables de reportar violencia sexual⁶⁰.

Condiciones de vida

El deterioro de las condiciones de vida de las personas se refleja en las consecuencias que ha dejado la crisis económica agudizada por la COVID-19, como la pérdida de empleo y la consecuente inseguridad alimentaria, así como las dificultades de acceso a derechos como la educación y servicios de salud. Estas necesidades requieren garantizar el acceso o soluciones para generar sustento/ingresos y medios de vida.

Las condiciones de vida de las personas que son víctimas de desplazamiento se enfocan más en la dificultad de acceder a servicios de agua y saneamiento básico, salud, educación y pérdida de alojamiento y fuentes de ingresos. Por esta razón, se debe garantizar el acceso a educación, soluciones en términos de alojamiento, alimentos y medios de vida.

Las personas afectadas por situaciones de desastres se enfrentan a la dificultad de acceso a agua y saneamiento básico, salud y educación, además de la pérdida de alojamientos, bienes domésticos (necesidades básicas insatisfechas) y medios de vida representados en producción agrícola u otros medios de subsistencia. Estas necesidades requieren intervenciones en un mediano plazo para garantizar el acceso a estas privaciones/carencias sectoriales y evitar que la severidad ocasione un daño irreparable.

Mecanismos de afrontamiento a la crisis

Los mecanismos de afrontamiento negativos más frecuentes están relacionados con la venta de medios de producción, la mendicidad, el sexo por supervivencia, dejar a los niños y niñas al cuidado de adultos mayores (por lo que terminan a merced de los grupos delictivos, maras o pandillas para el reclutamiento o como informantes o colaboradores de dichos grupos), matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas. Estas situaciones requieren de acciones de prevención y protección de estos grupos vulnerables que cada vez más están siendo afectados.

Perfiles de población en condiciones de vulnerabilidad

En Honduras 3,2 millones de personas tienen necesidades humanitarias. Las crisis convergentes, los impactos asociados al cambio climático (especialmente inundaciones y sequías) y la violencia han afectado ciertos grupos poblacionales que solo tienen un acceso limitado a servicios de salud esenciales y de emergencia y se encuentran en inseguridad alimentaria y en movimientos mixtos que continúan alterando las condiciones humanitarias. Estos grupos sufren un deterioro de sus estándares de vida y un impacto en su bienestar físico y mental que se suma a la creciente búsqueda de mecanismos negativos de afrontamiento.

60 Río Navarro J, Cohen J, Rocillo Arechaga E, Zuniga E, Médecins Sans Frontières Evaluation and Action Team–Honduras. Physical and sexual violence, mental health indicators, and treatment seeking among street-based population groups in Tegucigalpa, Honduras. Rev Panam Salud Publica. 2012;31(5):388–95.

Grupo poblacional #1

Mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad

POBLACIÓN TOTAL	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
1,8M	--	5%	46%	49%	--

Las mujeres, y en particular aquellas en edad reproductiva, las niñas y adolescentes, con discapacidad, personas LGBTIQ+, jefas de hogares monoparentales, las sobrevivientes de VBG, migrantes, desplazadas, refugiadas y retornadas, las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes o de otros pueblos originarios, se han visto afectadas de manera desproporcionada por las diferentes emergencias con impacto humanitario.

Las mujeres están más expuestas a la violencia ejercida por grupos criminales y a la VBG. Además del impacto de la violencia y la pobreza multidimensional, las mujeres y niñas también se ven severamente afectadas por la inseguridad alimentaria y los efectos socioeconómicos de los desastres.

Las mujeres y niñas enfrentan menos oportunidades para acceder a educación y su participación en el mercado laboral formal es limitada, afectando su autonomía económica. Las crisis han reducido sus oportunidades de ingresos económicos detonando mecanismos de sobrevivencia negativos como sexo transaccional, matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, así como el abuso y la explotación sexual. Las trabajadoras domésticas remuneradas, muchas de ellas migrantes, indígenas o afrodescendientes, carecen de acceso a la seguridad

social y están más desprotegidas en escenarios de desempleo sostenido.

Las mujeres y niñas con discapacidad sufren diferentes manifestaciones agravadas de VBG en tasas desproporcionadamente más altas, violencia doméstica al doble de la tasa de otras mujeres y en formas únicas debido a la discriminación basada tanto en el género como en la discapacidad⁶¹. La discriminación interseccional influye negativamente en su propia percepción y en su capacidad de autodeterminación y libertad⁶².

Las mujeres que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) están expuestas a mayores riesgos y vulnerabilidades, incluidas situaciones que afectan sus derechos sexuales y reproductivos, violencia al comunicar el diagnóstico, niveles altos de violencia de género, discriminación y violencia psicológica.

Muchas mujeres y niñas y adolescentes migrantes, refugiadas y retornadas se enfrentan a la pérdida de medios de vida y autonomía económica, barreras de acceso a derechos como salud y SSR, trabajo, educación, protección, información y justicia, así como a manifestaciones específicas de violencia de género (sexual, física y psicológica) en el tránsito y lugares de destino. Esta situación se agrava ante

61 Asamblea General de la ONU, Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, "Situación de las mujeres y las niñas con discapacidad y el estado de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo.

62 Ministerio de igualdad de España. Federación de Mujeres Progresistas. 2020. Mujer, discapacidad y violencia de género.

factores que incrementan la vulnerabilidad y el riesgo de las mujeres migrantes ante la violencia de género, lo cual las limita para acercarse a la protección del Estado y al acceso a servicios esenciales en casos de violencia. Entre estos factores se encuentra la falta y/o de desconocimiento de redes de apoyo y de servicios sociales básicos, la irregularidad en su condición migratoria y falta de documentación, la falta de sensibilización sobre la explotación y/o abuso sexual por el personal humanitario, la falta de tolerancia cero hacia estos actos y los canales para reportarlos.

Las mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales viven a menudo en situación de pobreza y enfrentan condiciones críticas: falta de certeza sobre la propiedad de tierras, falta de acceso a servicios de salud y SSR o limitada autonomía económica. Estas mujeres se ven expuestas a ser víctimas de la violencia, así como la exclusión de los espacios de participación y toma de decisiones. Su ubicación geográfica, falta de transporte y condición de pobreza limita muchas veces su acceso a servicios de atención integral y a medios alternativos para presentar sus denuncias.

Las mujeres con malnutrición tienen más probabilidades de enfermarse durante el embarazo y tienen un mayor riesgo de parto prematuro, aborto espontáneo, muerte fetal e incluso su propia muerte. También es más probable que contraigan infecciones, experimenten debilidad y tengan menor productividad. Las mujeres que padecen deficiencias de micronutrientes corren un mayor riesgo de morir durante el parto, dar a luz a un bebé con bajo peso o con deficiencias cognitivas y afectar la salud y el desarrollo de las niñas y niños en etapa de lactancia.

Grupo poblacional #2

Poblaciones en movilidad humana

POBLACIÓN TOTAL	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
180K	--	--	25%	--	75%

A nivel global se ha advertido un incremento en las crisis de movilidad humana y desplazamiento. Durante 2022 han surgido nuevos conflictos y se han exacerbado los ya existentes. La escasez de alimentos, la inflación, la crisis climática y el impacto de la COVID-19 han acentuado las dificultades de las personas impulsando aún más los movimientos de población. Este contexto global se ha visto reflejado en el aumento de las cifras de personas refugiadas y migrantes en movimientos mixtos ingresando por las fronteras de Honduras impactando las ya débiles condiciones de recepción de las poblaciones de acogida, así como de las instituciones nacionales y locales.

Las personas refugiadas y migrantes en movimientos mixtos son personas que enfrentan un nivel de vulnerabilidad alto dadas las condiciones de la ruta, la distancia con sus redes de protección, los riesgos de protección a los que están expuestos y los múltiples escenarios que enfrentan y vulneran sus derechos. En Honduras, estos riesgos se exacerbaban en un contexto de violencia generalizada y de impactos por desastres de origen natural que también los afecta en su paso por el territorio nacional, alertando sobre la necesidad de reforzar las capacidades de intervención de los actores humanitarios, considerando de manera transversal los impactos agravados sobre los niños

y las niñas, principalmente no acompañados; las mujeres y la población LGBTIQ+ que se ven expuestas a los riesgos de VBG; las personas con discapacidad; adultos mayores; y aquellas que por la barrera del idioma no pueden acceder a los bienes y servicios.

A nivel nacional, Honduras sigue enfrentando un contexto de violencia generalizada que se evidencia, entre otras manifestaciones, en el desplazamiento forzado. De acuerdo con el último estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno por Violencia en Honduras⁶³, el impacto sobre las personas y comunidades afectadas es multidimensional, limitando el goce efectivo de sus derechos humanos. En materia de salud, el 41 por ciento de las personas manifestó afectaciones a la salud mental, física y continuación de tratamientos médicos. Por otro lado, el 38 por ciento de las personas tuvieron que cambiar o abandonar su empleo o negocio. En este escenario, las principales necesidades de las personas al momento de desplazarse fueron: alojamiento (74 por ciento); ayuda para el traslado (74 por ciento); alimentos, vestuario y aseo (62 por ciento); protección durante el movimiento (18 por ciento); y asistencia psicológica (17 por ciento), entre otros.

El 43 por ciento de los hogares desplazados poseían una vivienda antes del desplazamiento, de estos sólo

63 Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Joint IDP Profiling Service (JIPS). Estudio de Caracterización Desplazamiento Interno por Violencia en Honduras 2004-2018. Diciembre de 2019. CIPPDV. Caracterización 2004-2018.

el 32 por ciento logró conservar la vivienda y el 67 por ciento restante sufrió alguno de los siguientes impactos como consecuencia del desplazamiento: el 19 por ciento tuvo que abandonarla, el 10 por ciento sufrió la usurpación de sus viviendas, al 5 por ciento les fueron destruidas, mientras que el 33 por ciento vendió su vivienda.

Estos impactos y la limitada capacidad de respuesta generan que la alternativa de huida interna sea limitada y que la ausencia de rutas integrales de atención impulse la salida del país bajo riesgos considerables de deportación o retorno forzado a zonas en donde la causa de la huida persiste y se requiere de una respuesta que responda a las necesidades humanitarias.



TROJES, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, HONDURAS

Foto: OCHA / Vincent Tremeau

Grupo poblacional #3

Niños, niñas y adolescentes (NNA)

POBLACIÓN TOTAL	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
496K	--	5%	46%	49%	--

Los NNA requieren acciones de protección incluyendo la prevención y respuesta ante el aumento del abuso, negligencia, explotación y la violencia ejercida en el contexto de las emergencias. Los NNA en condición de vulnerabilidad (migrantes, refugiados, con discapacidades, indígenas y en riesgo de exclusión)⁶⁴ pertenecen a hogares que han sufrido una contracción de ingresos y están expuestos al abandono escolar, pudiendo caer en mecanismos de sobrevivencia negativos como el trabajo infantil, los matrimonios tempranos o reclutamiento por las pandillas.

Los niños y niñas menores de cinco años tienen necesidades nutricionales muy específicas y nacen con un sistema inmunológico poco desarrollado que les hace vulnerables a las infecciones, como neumonía y diarrea. En contextos de escasos recursos, los niños y niñas pequeños con necesidades nutricionales en el período de lactancia tienen más probabilidades de morir de neumonía y diarrea que los niños y niñas en etapa de lactancia que viven en entornos diferentes. Los menores que padecen deficiencias de micronutrientes tienen un mayor riesgo de muerte por enfermedades infecciosas y de deterioro del desarrollo físico y mental. Las niñas y niños pequeños con desnutrición aguda, en particular la forma severa, tienen hasta nueve veces más probabilidades de morir que los niños y niñas sin desnutrición⁶⁵.

En el caso de NNA desplazados y retornados se agregan desafíos adicionales en relación con el acceso a la educación y la continuación de sus estudios. Igualmente tienen dificultad para acceder a la protección social. Entre las principales razones por las que los NNA migrantes y refugiados tienen dificultades para asistir a la escuela destacan los reducidos recursos económicos de sus hogares, la falta de acceso a dispositivos informáticos y de conexión a Internet, la discriminación y la xenofobia y la falta de documentación. Es importante mencionar que los NNA están altamente expuestos al riesgo de abuso sexual por personal humanitario, en particular, NNA no acompañados. En la mayoría de los casos, los NNA no tienen información sobre qué es abuso sexual, cuáles son los canales para reportar y la asistencia que les debe ser brindada.

64 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200616_HNO_CENTROAMERICA_ADDENDUM.pdf

65 Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, Caulfield LE, de Onis M, Ezzati M, Mathers C, Rivera J; Maternal and Child Undernutrition Study Group. (2008) Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. Lancet, 371:243–60.

Grupo poblacional #4

Personas indígenas y afro hondureñas

POBLACIÓN TOTAL	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
262K	--	5%	46%	49%	--

De acuerdo con el Informe Anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), los efectos de la pandemia de COVID - 19 y de los huracanes tuvieron un impacto desproporcionado en los pueblos indígenas y afro hondureños, agudizando las brechas históricas en el acceso limitado a los bienes y servicios, principalmente de alimentación adecuada y a los servicios de salud y educación.

En Honduras, las personas indígenas y afrodescendientes, particularmente las mujeres y niñas, pertenecen en su gran mayoría a los grupos más pobres y/o invisibilizados históricamente marginalizados. La situación social, política y económica de los pueblos indígenas en la mayoría de los aspectos es mucho peor que la de las personas no indígenas con características similares, como el mismo nivel de educación, edad, lugar de residencia rural o urbana, tipo de trabajo y las tipologías de hogar.

Las personas que pertenecen a las comunidades rurales, mayormente indígenas, tienen los índices de pobreza y pobreza extrema más altos. La COVID-19 supuso una múltiple afectación en zonas rurales y remotas, donde el acceso a servicios de salud, muchas veces insuficientes, se presenta difícil.

El limitado acceso a servicios básicos como educación, salud y saneamiento, así como el hacinamiento afectan el bienestar físico de estas poblaciones, aumentando la morbilidad y el riesgo de mortalidad por epidemias. Además, la comunicación de riesgos representa un desafío en regiones multiculturales y multiétnicas donde se hablan varios idiomas.

Para las mujeres y niñas, las brechas en el acceso a servicios especializados de respuesta a la VBG, así como la discriminación que sufren en los mismos, profundiza su situación de vulnerabilidad y sufrimiento.

Las y los migrantes indígenas enfrentan múltiples formas de discriminación; su vida y trabajo están invisibilizados; por temor no acceden a mecanismos de denuncia y se encuentran en extrema situación de vulnerabilidad frente a la violencia, la explotación y la marginación, incluyendo EAS por personal humanitario. Las mujeres indígenas enfrentan riesgos de explotación laboral y sexual. La migración ofrece oportunidades para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas indígenas y en muchos casos constituye una estrategia de supervivencia de los pueblos. Sin embargo, también se reconoce la discriminación interseccional que deriva de la triple condición de mujeres, migrantes e indígenas⁶⁶, que se exacerba en zonas de ausencia y desatención de los Estados (como en las zonas de frontera) y de lejanía de las redes familiares y comunitarias.

66 Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)- División de Población de la CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas. Informes de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (A/HRC/39/17/Add.3 y A/HRC/39/17/Add.2).

Grupo poblacional #5

Personas con discapacidad

POBLACIÓN TOTAL	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
196K	--	5%	46%	49%	--

Las personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad en algunos casos dependen de los cuidados de otras personas al tener dificultades para desplazarse o conseguir ayuda. En general, la prestación de servicios de salud para personas con diferentes discapacidades se ve afectada en contextos de emergencia.

Las personas con discapacidad encuentran múltiples barreras para acceder a los servicios y a la ayuda humanitaria. Considerando la diversidad dentro de la discapacidad, estas barreras pueden incluir la accesibilidad física para personas con discapacidad motriz a los puntos de entregas y servicios o el acceso a la comunicación para personas con discapacidad auditiva y visual. Por otra parte, la dependencia de las personas con discapacidad mental genera barreras

en el acceso a servicios de protección. Las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan riesgos de VBG incrementados. Entre la población afectada por las Tormentas Eta e Iota, las personas con discapacidad reportaron no encontrar condiciones seguras en albergues temporales ni medidas de cuidado seguro.

En el contexto de desastres y crisis, muchas veces se agudiza la discriminación que padecen y se reduce su participación, que luego radica en el acceso inequitativo a la información y a la asistencia humanitaria. Por otra parte, para mujeres y niñas con discapacidad física y/o mental, las violencias son múltiples y basadas en la desigualdad por género y por condición, sufriendo mayores riesgos de explotación sexual, incluyendo EAS por personal humanitario.

Grupo poblacional #6

Personas LGBTIQ+

POBLACIÓN TOTAL	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
70K	--	5%	46%	49%	--

Las personas LGBTIQ+ son afectadas por un alto nivel de riesgos que incluyen diversas formas de violencia, incluida la VBG, explotación sexual, incluyendo EAS por personal humanitario, trata, abusos, extorsiones, amenazas, estigmatización y discriminación. Enfrentan además limitaciones en el acceso a servicios integrados y la falta de servicios especializados de atención de calidad, diferencial y no discriminatoria que aborden con un enfoque diferenciado e interseccional la respuesta y atención a las personas LGBTIQ+.

En el país continúa siendo un reto el acceso a la justicia y la denuncia de los crímenes de odio, lo cual genera un subregistro de la violencia contra las personas LGBTIQ+ y enormes desafíos en el levantamiento de estadísticas fieles a la realidad.

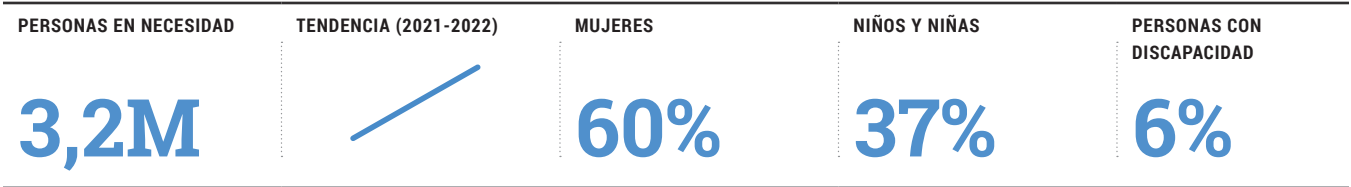
En Honduras, las mujeres lesbianas y transgénero se ven afectadas particularmente y representan un mayor número de muertes violentas.

Las personas LGBTIQ+ enfrentan riesgos desproporcionados y diferenciales generados por la estigmatización generalizada y la discriminación que perpetúa la violencia en su contra por su orientación sexual e identidad o expresión de género diversa. En este escenario, son víctimas de desplazamiento forzado interno y en muchos casos, dada la ausencia de medidas de protección en los lugares de llegada, salen en búsqueda de protección internacional mediante rutas que exacerban los riesgos de protección.

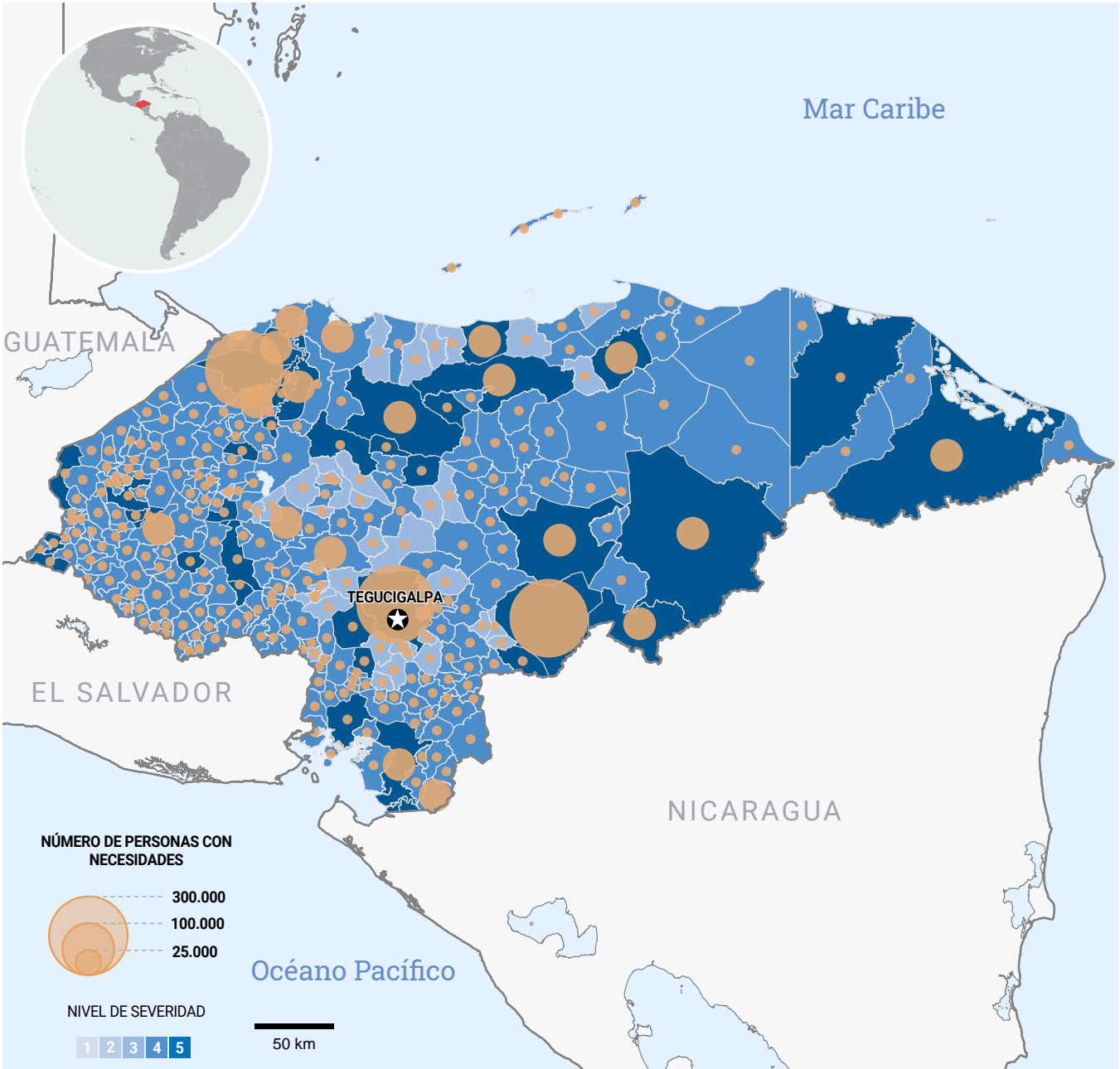
1.5

Número de personas en necesidad

Cifras actuales



Número de personas en necesidad por severidad y ubicación



Número de personas en necesidad por nivel de severidad y ubicación

DEPARTAMENTO	NÚMERO DE PERSONAS EN CADA NIVEL DE SEVERIDAD		
	SEVERIDAD 2	SEVERIDAD 3	SEVERIDAD 4
Atlántida	35.564	58.137	68.749
Choluteca	--	122.400	61.600
Colón	9.697	54.420	27.434
Comayagua	46.626	120.819	--
Copán	921	101.405	41.009
Cortés	--	142.301	392.303
El Paraíso	3.850	69.300	210.200
Francisco Morazán	45.045	46.553	368.851
Gracias a Dios	--	12.238	62.800
Intibuca	--	64.678	32.561
Islas de la Bahía	--	19.659	--
La Paz	1.990	84.400	--
Lempira	--	151.500	12.000
Ocatepeque	--	42.450	13.700
Olancho	--	105.297	83.100
Santa Bárbara	1.465	166.959	6.500
Valle	--	51.963	19.600
Yoro	--	52.434	176.200
Subtotal	145.158	1.457.713	1.576.607
PIN total			3.188.678

En Honduras se identificaron al menos 3,2 millones de personas en necesidad que viven en 257 (85 por ciento) de los 298 municipios, muchos de ellos en zonas rurales dispersas de difícil acceso. El incremento respecto al año anterior fue de 400.000 personas más, consecuente con el deterioro de la situación humanitaria del país.

Entre las personas en necesidad, destacan las vulnerabilidades particulares de comunidades étnicas afro hondureñas (3%), indígenas (6%), mujeres (60 por ciento), y NNA (37 por ciento).

La priorización geográfica se determina por las 1,6 millones de personas que viven en los municipios

clasificados en nivel de severidad extremo, concentrados particularmente en: las zonas urbanas y con necesidades de protección urgentes; las zonas fronterizas en el suroriente del país y occidente con el impacto de la movilidad humana; las poblaciones étnicas en la Mosquitia; y zonas vulnerables a choques climáticos (como inundaciones) en zonas del Valle de Sula, así como zonas rurales de occidente y oriente del país. Las personas que habitan en estas zonas presentan necesidades agudas (por vivir en municipios clasificados en un nivel de severidad 4 o críticas), y están localizadas principalmente en áreas urbanas y algunas rurales dispersas de 37 municipios en 15 de los 18 departamentos del país.

Otros 1,5 millones de personas con necesidades severas viven en 220 municipios (74 por ciento) también necesitan una respuesta humanitaria intersectorial para mitigar afectaciones ante la falta de acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales que podrían estar a punto de colapsar; estas personas se concentran en su mayoría en zonas rurales dispersas y otras en ciudades intermedias.

Las zonas priorizadas son parte de los 18 departamentos de 18 en el país. Adicional a la priorización e identificación de estas personas con necesidades, se determinó que el 9 por ciento de ellas pertenecen a grupos étnicos, ya sean pueblos indígenas o afro hondureños, particularmente en la zona noratlántica del país.

Preocupa la doble afectación por la confluencia de factores de violencia y emergencias climáticas. Al menos 92.000 personas no han superado la afectación por emergencias asociadas a los efectos de las Tormentas Tropicales Eta e Iota.

Todas las personas en necesidades clasificadas en los diferentes grupos vulnerables requieren de asistencia humanitaria en 2023 y serán objeto de monitoreo y seguimiento.

Parte 2:

Análisis de riesgos y monitoreo de la situación y de las necesidades

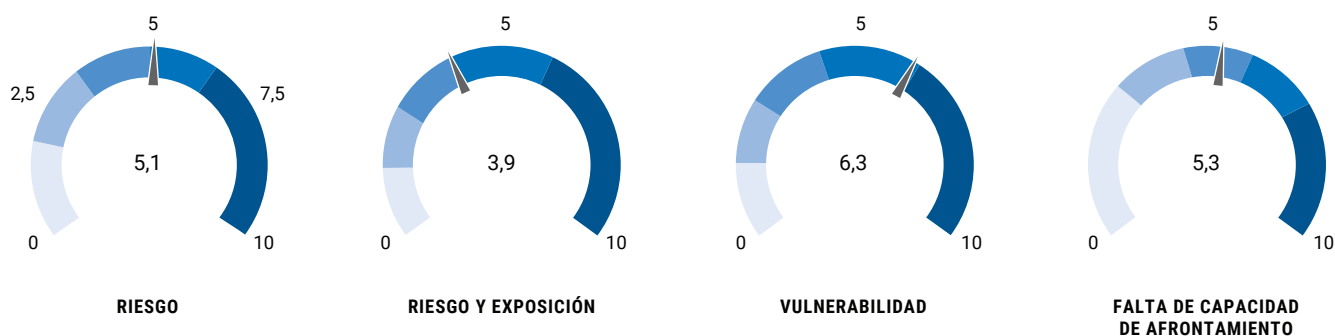
GUARUMA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

OCHA / Vincent Tremeau



2.1 Análisis de riesgos

ÍNDICE INFORM



Para más información, visite: <https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Risk/Country-Risk-Profile>

Las organizaciones humanitarias del Equipo Humanitario País, con base en evidencias y análisis del contexto, identificaron los grupos vulnerables y las zonas más afectadas en términos de necesidades humanitarias, definiendo la severidad de sus necesidades y considerando un enfoque diferencial. La situación humanitaria sigue estando influenciada por el reciente impacto de la pandemia de COVID-19 junto a dinámicas de violencia, pobreza y desastres asociados a eventos socio naturales, deteriorando considerablemente las consecuencias humanitarias. El número de personas con necesidades humanitarias ha incrementado de 1,3 millones en 2020 a 2,8 millones en 2021 y 3,2 millones en 2022, según

datos actualizados en este documento. En los tres principales componentes del Índice de riesgo INFORM (riesgo y exposición, vulnerabilidad y falta de capacidad de afrontamiento), Honduras se sitúa entre los primeros países de la región, con una puntuación de 5.1 (riesgo alto). Considerando que muchos de los factores de vulnerabilidad son estructurales, este análisis pretende identificar su existencia a través de un análisis que determinará la severidad de las necesidades humanitarias. El análisis de severidad de las necesidades que prioriza grupos vulnerables y las zonas más afectadas se llevó a cabo a través de un análisis cuantitativo y cualitativo en consulta con los equipos de terreno en varias regiones del país.



ENERO

Tensiones políticas

Se juramentaron dos presidentes del Congreso Nacional.



MARZO

Movilidad humana

Incremento de ingreso de personas en movimientos mixtos por la frontera oriente (Departamento de El Paraíso, municipios de Danlí y Trojes).



SEPTIEMBRE

Declaratoria de **emergencia nacional por fuertes lluvias.**



OCTUBRE

Tormenta tropical Julia

OCTUBRE

Incremento de la situación de violencia, específicamente las relacionadas con el delito de extorsión, lo que posteriormente provocó la declaratoria de emergencia nacional por violencia anunciada por la Presidenta de la República el 24 de noviembre y ratificada por medio de la publicación del decreto adjunto el 3 de diciembre. Como referencia en el documento de HNO de acuerdo con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), al menos 13 de los 18 departamentos del país han sido escenarios de extorsión; Francisco Morazán y Cortés concentran el mayor número de denuncias (79 por ciento).

NOVIEMBRE

Inicio de la temporada de frentes fríos que ocasionan precipitaciones en la zona norte

Evolución prevista de las necesidades

La evolución prevista de necesidades se realiza a partir de los cuatro choques identificados: (i) los choques de origen natural y el cambio climático; (ii) la inseguridad alimentaria; (iii) la violencia; y (iv) la crisis de movilidad humana y el desplazamiento. De no ser atendidos, estos choques generarán un aumento en el número de personas afectadas.

Esta estimación se realiza considerando la tendencia histórica del deterioro de la situación humanitaria provocada por la violencia generalizada, los impactos de las nuevas emergencias asociadas a eventos de origen natural, eventos relacionados al fenómeno de La Niña y otros propiciados por el cambio climático que en el último año tuvieron un incremento exacerbado en comparación con años previos.

El mayor riesgo de eventos socio naturales siguen siendo las afectaciones por lluvias y sobre todo por

tormentas tropicales que afectan el país y provocan inundaciones, deslizamientos y desplazamientos de población con mayores probabilidades en el mes de octubre y noviembre. Los actores humanitarios temen no poder responder a esos múltiples desastres por la dificultad de movilizar la ayuda en el terreno y la complejidad de implementar medidas de aislamiento social suficientes en los alojamientos temporales.

Además, el agua de las tormentas y huracanes puede dispersar los desechos sanitarios (incluyendo biológico infecciosos), domésticos y residuos.

Se corrobora la persistencia de riesgos ambientales en las zonas impactadas debido a daños y contaminación de fuentes y sistemas de agua y de saneamiento, aguas estancadas y lodos, riesgos que son críticos para los ciclos de temporadas de lluvias.

El aumento del número de personas en movilidad registrado desde finales de 2021 hace prever un

número más alto de personas que podrían ser retornadas a Honduras en 2022 y 2023, incluida la particular situación de personas que a su retorno requieren protección y asistencia. El número de personas que ingresan al país, algunos de ellos en necesidad de protección internacional también se han incrementado en el último año.

De acuerdo con las proyecciones [Foresight del Consejo Danés para los Refugiados](#), el desplazamiento seguirá al alza basándose en los indicadores de violencia y derechos humanos.

La situación de inseguridad alimentaria podría verse empeorada por efectos adversos de amenazas climáticas pronosticadas para la región. Los últimos modelos meteorológicos mundiales analizados por el grupo de alerta temprana y análisis de riesgos del IASC (que incluye a la OMM y al IRI) indican un riesgo de lluvias por arriba del promedio para los próximos meses, con un impacto potencial elevado en la ocurrencia de inundaciones y deslizamientos debido a la saturación de suelos, especialmente en la zona norte cuando la temporada de frentes fríos (diciembre-marzo) significa mayor cantidad de precipitaciones.



DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, HONDURAS

Foto: OCHA / Vincent Tremeau

2.2

Monitoreo de la situación y de las necesidades

Para el monitoreo de la situación humanitaria, se hará seguimiento a los indicadores definidos tanto por los clústeres a nivel nacional, como por los Equipos Locales de Coordinación en los territorios, lo que permitirá establecer la evolución de la situación. Se cuenta con instrumentos que dan cuenta de la situación y respuesta a las necesidades, identificando los vacíos que puedan estar quedando y requieran

priorizar la asistencia. Se procurará consolidar periódicamente los resultados de las evaluaciones humanitarias efectuadas por los socios en las zonas de implementación para analizar conjuntamente la evolución de las necesidades de los grupos más vulnerables, el número de personas necesitadas, la aparición de nuevos grupos y subgrupos que requieran asistencia humanitaria y los riesgos asociados.

Parte 3: **Análisis sectorial**

GUARUMA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

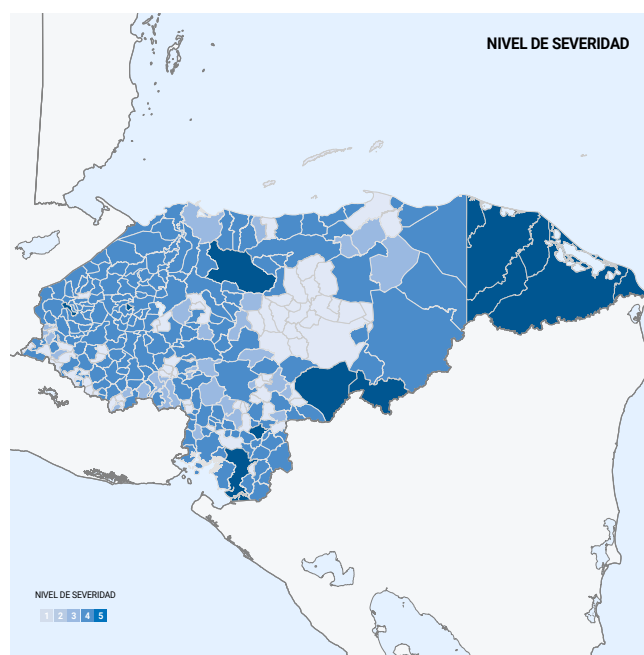
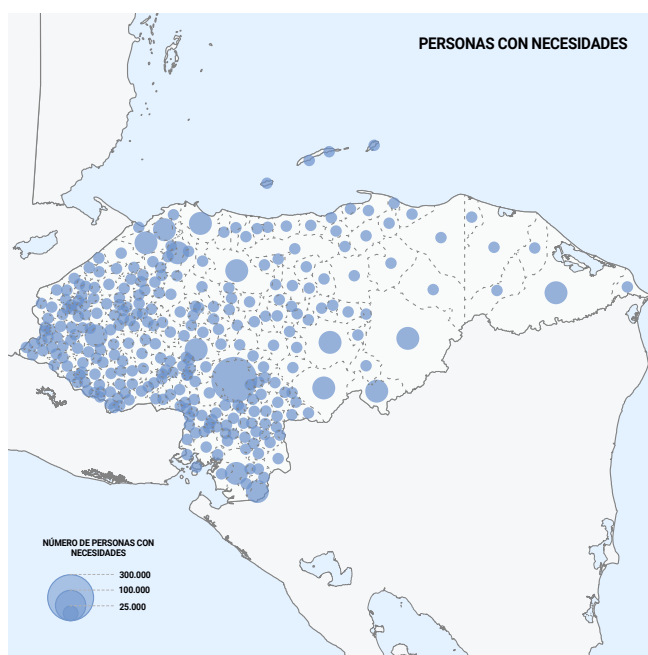
Foto: OCHA / Vincent Tremeau



3.1

Clúster Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

PERSONAS EN NECESIDAD	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	ADULTOS MAYORES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MOVILIDAD HUMANA
1,84M	51%	40%	8%	5%	160K



En noviembre de 2020, la Tormenta Tropical Eta afectó el norte y atlántico del país, con mayor fuerza en los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón y esta situación se agravó con el paso de la Tormenta Iota, que se extendió también a la zona noroccidental y oriental del país, en los departamentos de El Paraíso, Olancho, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira y Comayagua.

El impacto de estas dos tormentas dejó una fuerte caída en el acceso a servicios de WASH seguros y se identificó una capacidad limitada de los entes proveedores de los mismos para restaurar rápidamente estos sistemas. Honduras reportaba más de 500 sistemas de agua potable y saneamiento dañados debido en parte a la carencia de resiliencia

climática de los servicios e infraestructura de WASH, además de al menos 5.000 sistemas de agua dañados, muchos de estos continúan en fase de reconstrucción.

Los indicadores de cobertura de la prestación de servicios mejorados de Agua Potable y Saneamiento (APS) se pueden valorar como “servicios mejorados” (ODM) o como “agua gestionada de manera segura” (ODS 6.1).

En Honduras, los indicadores resultan satisfactorios cuando la valoración se realiza bajo características de “servicios mejorados”, sin embargo, no son satisfactorios cuando esta valoración de calidad se realiza sobre la base de “agua gestionada de manera segura”, enfrentándose a desafíos importantes con

relación a la calidad de prestación del servicio tanto desde el punto de vista de su aptitud para consumo humano como desde su nivel de disponibilidad en términos de cantidad y continuidad.

Los resultados del Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (JMP) de la OMS y UNICEF 2021 muestran que en 2020 la cobertura del servicio de agua potable con una fuente mejorada se estimó en un promedio nacional de 95.69 por ciento (99.84 por ciento urbana y 89.87 por ciento rural); en cuanto a agua gestionada de manera segura, la cobertura solo pudo ser estimada para el área rural en el 18.71 por ciento. Este último dato se ve reforzado por el último informe de país para la Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LATINOSAN) en 2019, en el que se reportó que la cobertura nacional del servicio gestionado de manera segura resultó del 9.84 por ciento (9.95 por ciento urbana y 9.72 por ciento rural).

Los índices de cobertura expuestos anteriormente son difíciles de ampliar porque Honduras es uno de los países más afectados por el cambio climático. Los desastres de origen climático que acontecen cíclicamente impactan cada vez la infraestructura de los servicios de agua potable y saneamiento interrumpiendo transitoria o permanentemente su prestación en las zonas geográficas afectadas y disminuyendo la calidad y cantidad de agua potable. Además, se está reduciendo la disponibilidad de recursos hídricos debido a los fenómenos cada vez más recurrentes de sequía y por las inundaciones que producen daños y pérdidas cada vez mayores en los sistemas de distribución y conducción por la falta de resiliencia de estos. Se requiere fortalecer las capacidades locales, la regulación y supervisión para la construcción y la operación de estos sistemas.

Análisis de las necesidades humanitarias

El análisis se basa en el principio universal de asegurar el acceso seguro a agua apta para uso humano y servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos a las personas afectadas por desastres de origen climático como Eta e Iota, sequías e inundaciones, infecciones y brotes de enfermedades, así como por los impactos de la crisis de movilidad humana y desplazamiento, integrando los enfoques de género, edad y diversidad.

Las familias sin acceso a servicios de WASH adecuados han aumentado su exposición al ya alto riesgo de contraer COVID-19, así como a los brotes de enfermedades transmitidas por el agua que afectan de manera desproporcionada a las niñas y niños menores de cinco años.

La interrupción en el acceso a servicios de WASH exacerba las inequidades y pone en riesgo los avances sectoriales logrados en resiliencia y desarrollo. Igualmente, la inseguridad hídrica puede incrementar la inseguridad alimentaria y nutricional e impactar en la salud debido a la contaminación del agua para usos domésticos.

Respecto a la situación social de movimientos mixtos, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha reflejado un aumento histórico de los datos de flujos migratorios mixtos irregulares: en 2021 se registraron 17.590 atenciones en las diferentes delegaciones a nivel nacional y a agosto 2022 ya se registraban más de 88.000⁶⁷. Estos elementos generan impactos sobre los recursos escasos de WASH en las comunidades de acogida.

Se debe propiciar y fomentar la sostenibilidad del acceso al agua apta para uso humano y servicios de

67 <http://inm.gob.hn/estadisticas.html>

saneamiento e higiene adecuados y mejorados que sean igualitarios y basados en Gobernanza Hídrica y adaptados a los diferentes grupos de género y edad, incluyendo control vectorial y gestión de residuos sólidos en comunidades, centros de salud, entornos de aprendizaje, centros de atención de población afectada, centros de reclusión, mercados y comedores públicos.

Los sistemas de suministro de agua a las zonas rurales son pozos y fuentes de agua a través de tuberías, lo que pone en riesgo la contaminación del agua debido a la falta de tratamiento. Los costos de mantenimiento son responsabilidad de los usuarios, organizados a través de comités o juntas de agua comunales y municipales. Los desechos sólidos y líquidos se descargan en los ríos causando contaminación. En las zonas rurales, el drenaje sanitario es inexistente, por lo que las excretas y los desechos líquidos se depositan directamente en los campos. Las tasas de contaminación, tanto de fuentes como de arroyos, aumentan en general.

La situación ambiental, con la recurrencia de períodos secos prolongados, ha hecho que disminuyan las fuentes de suministro de agua de las comunidades. Esto afecta no solo el acceso al agua para consumo humano, sino también el acceso al agua para otros usos, en particular para garantizar la seguridad alimentaria. La ausencia de saneamiento adecuado y defecación al aire libre tiene una correlación directa con la diarrea, una causa clave de desnutrición.

Proyección de las necesidades

En 2021 se han presentado emergencias tanto por el incremento de la migración con flujos mixtos como por desastres de origen natural. En 2022 existe un monitoreo de posibles tormentas tropicales y sistemas de baja presión que causan precipitaciones pluviales extremas. Es preocupante saber que muy pocos sistemas de agua han sido reparados y que el Plan de Respuesta Humanitaria 2021-2022 ha recibido poca atención incluso después de varios eventos que afectaron el Clúster WASH en 2020 y 2021, como las Tormentas Tropicales Eta e Iota, la COVID-19 y un aumento inquietante de la migración que no sólo

repercute en las personas migrantes, sino también en las comunidades de acogida.

Las malas condiciones de WASH causadas por el deterioro de la infraestructura aumentan la probabilidad de contraer enfermedades transmitidas por el agua que afectan de forma desproporcional a la niñez y que se agudizan con las malas prácticas de higiene alimentaria.

Igualmente, los riesgos para mujeres y niñas incrementan ya que, en la mayoría de los hogares, las responsabilidades relativas al agua son actividades que realizan de forma predominante las mujeres y las niñas.

Los riesgos también incrementan por la presencia de posible contaminación química y una gran cantidad de residuos sólidos. Adicionalmente, la pérdida de los servicios WASH en centros de salud compromete el acceso a servicios de salud en tiempos de crisis.

La combinación de problemas estructurales y coyunturales ha generado un impacto humanitario que está poniendo en riesgo la vida, la seguridad y el acceso a derechos y servicios básicos de miles de personas.

Así también, no se ha prestado la debida atención a los sistemas de agua y saneamiento rurales y a fortalecer a los CODEM locales.

Monitoreo

Desde la perspectiva sectorial de la Mesa WASH en emergencias de Honduras, liderada por SANAA y coordinada por UNICEF y activada como Clúster en diciembre de 2020 tras el paso de Eta e Iota, se requiere monitorear la evolución de las necesidades y sincronizar las mismas con las metas propuestas bajo el sistema de respuesta humanitaria del país. Esta articulación permitirá actuar bajo criterios que organicen y coordinen las acciones intersectoriales que se requieren para apoyar a los diferentes grupos de género y edad en necesidad, siendo muy importante abogar sobre las necesidades humanitarias.

Las acciones de monitoreo y seguimiento estarán basadas en la construcción de indicadores que permitan medir los avances en la obtención de metas y resultados previstos para el cumplimiento de los objetivos del clúster en el plan, integrando los enfoques de género, edad e interculturalidad.

Las acciones de monitoreo sectorial tendrán como herramienta principal la plataforma 345W en situación de emergencia, los datos oficiales de instituciones sectoriales sobre daños y apoyadas por los Comités Municipales de Emergencia en etapas de medio y largo plazo, en línea con el plan de reconstrucción y desarrollo sostenible, los compromisos básicos para la infancia en la acción humanitaria, los estándares de calidad de respuesta humanitaria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Algunos indicadores podrían requerir información levantada de primera fuente a través de sondeos rápidos, encuestas y entrevistas, con fuentes de verificación que permitan constatar la satisfacción de las necesidades de las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias, incluidos los grupos vulnerables y marginados.

Es importante resaltar la necesidad de acciones de sensibilización de las comunidades afectadas sobre el acceso a los servicios de WASH sin barreras, en particular, el riesgo de EAS por personal humanitario y los canales para reportar de manera confidencial. De igual manera, es importante la sensibilización y formación del personal humanitario de WASH sobre PEAS.

Por último, el Clúster WASH promoverá entre los socios la realización de la encuesta del Monitoreo al desempeño de la Coordinación del Clúster (CCPM por sus siglas en inglés) que permita:

- Asegurar una coordinación eficiente y eficaz
- Hacer un balance de qué áreas funcionales operan bien y qué áreas necesitan mejorar
- Crear conciencia acerca del apoyo necesario de la Coordinadora Residente y Equipo Humanitario de País, las agencias líderes, los clústeres globales o los socios del clúster
- Fortalecer la transparencia y la colaboración dentro de un clúster.

Personas afectadas por indicador (2022-2023)

Miles de personas(K)

Millones de personas (M)

	PERSONAS AFECTADAS	FACTORES ASOCIADOS	GRUPOS MÁS VULNERABLES
% de viviendas con acceso a servicios de agua (conexiones por tubería)	1,5M	ETA e IOTA, COVID-19	Afectados por ETA e IOTA, población sin conexión a un sistema de agua, poblaciones de acogida a migrantes
% de acceso a instalaciones de saneamiento e higiene mejoradas	1,2M	ETA e IOTA, COVID-19	Población rural, periurbana sin acceso a saneamiento
Eventos que actualmente afectan la continuidad de servicios WASH en municipios (desastres de origen natural, brotes de enfermedad y flujos migratorios)	727K (referencia pob. reportada por afectaciones ETA e IOTA)	ETA e IOTA, dengue, diarreas, inundaciones, sequía, migración	Afectados por ETA e IOTA, migrantes en tránsito, población con calidad de agua deficiente, población con brotes de dengue, población con posible afectación por inundaciones, sequía

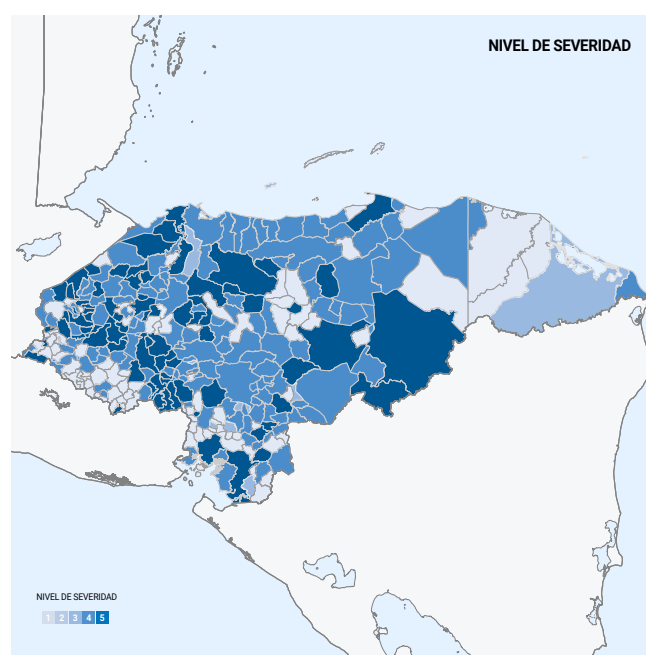
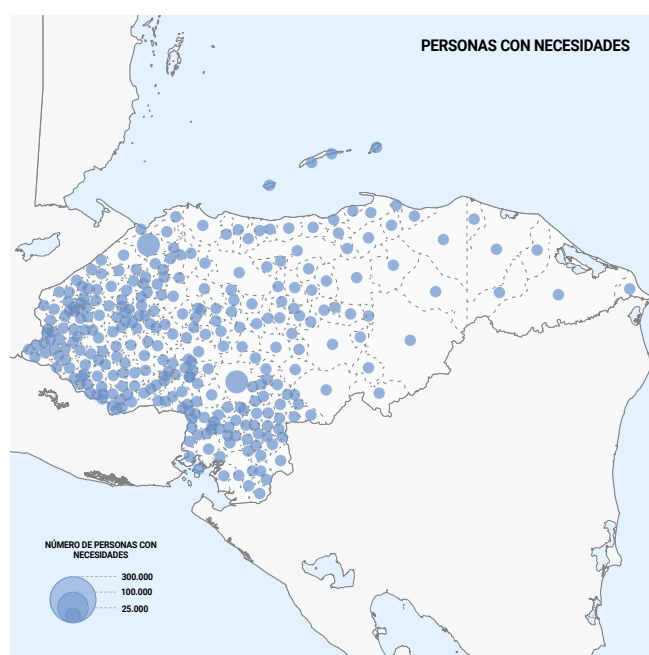
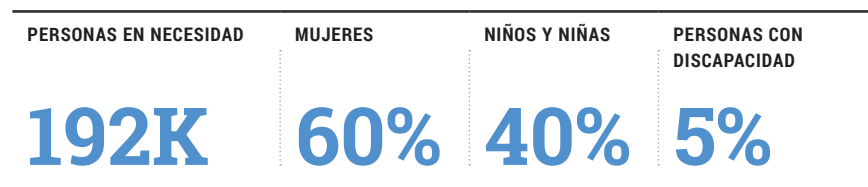
Indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
WASH – 01	% de viviendas con acceso a servicios de agua (conexiones por tubería)	Índice de agua - SGJD (2021) Categorización municipal
WASH – 02	% de acceso a instalaciones de saneamiento e higiene mejoradas	SIASAR 2.0 (2014-2019) - INFORM (2021)
WASH – 03	Eventos que actualmente afectan la continuidad de servicios WASH en municipios (desastres de origen natural, brotes de enfermedad y flujos migratorios)	INFORM (2021), COPECO (2020), Matriz de priorización Eta e Iota (2020), Encuesta SANAA, CONASA, ERSAPS (2020), datos oficiales de migración INM (2022), Datos de Unidad de vigilancia de Salud en Dengue y Diarreas sin sangre a la semana 32/2022, Análisis conjunto con socios Clúster WASH.

Personas en necesidad por grupo etario
(2022-2023)

EDAD	PERSONAS EN NECESIDAD	PORCENTAJE
NNA mujeres 0-17	369K	20% <div></div>
NNA hombres 0-17	355K	19% <div></div>
Mujeres 18-60	421K	23% <div></div>
Hombres 18-60	404K	22% <div></div>
Mujeres +60	69K	4% <div></div>
Hombres +60	66K	4% <div></div>
Migración (todos los grupos)	160K	9% <div></div>
Total	1,84M	
Con discapacidad (% del total)	92K	5% <div></div>

3.2 Clúster Alojamiento de Emergencia



En la arquitectura humanitaria, se entiende el sector de alojamiento como el proceso por el que las personas afectadas por una crisis recuperan su derecho a una vivienda adecuada. Este proceso incluye actividades como la distribución de enseres no alimentarios relacionados con el hogar (NFI), construcción de alojamientos individuales temporales, construcción y reconstrucción de viviendas dañadas, planificación de sitio, apoyo a familias de acogida, transferencias monetarias condicionadas, entrenamiento en reconstrucción segura y apoyo al alquiler, entre otros.

Con un déficit habitacional del 60%⁶⁸, Honduras, al igual que otros países centroamericanos sufre una gran presión demográfica y movimientos de población rural hacia centros urbanos, generada por razones económicas, los impactos de las sequías, la inseguridad alimentaria y la violencia. A esto se suman los movimientos mixtos de población proveniente de otros países en busca de asilo en los Estados Unidos, así como personas en procesos de deportación.

68 Vivienda en Centroamérica. INCAE. 2018.

Más de un millón de personas⁶⁹ se asientan en zonas de riesgo buscando cubrir sus necesidades de alojamiento y son éstas quienes principalmente sufren las consecuencias de los eventos de origen geo-climático. La proliferación de asentamientos

humanos informales urbanos, más allá de las consideraciones legales, conlleva graves carencias de servicios, inseguridad, segregación y en muchos casos, el incremento de la vulnerabilidad que originó el desplazamiento en primer lugar.

	TOTAL HOGARES	TOTAL VIVIENDAS	DÉFICIT		TOTAL	PORCENTAJE
			CUANTITATIVO	CUALITATIVO		
Honduras (2018)	1.881.577	1.838.527	125.784	969.639	1.095.423	60%

Fuente: Vivienda en Centroamérica. INCAE. 2018.

Personas en necesidad

EDAD	PERSONAS EN NECESIDAD	PORCENTAJE
Mujeres 18-59	46,8K	24,3%
Hombres 18-59	47,7K	25%
NNA hombres 0-17	41,2K	21,5%
NNA mujeres 0-17	40,1K	21%
Mujeres +60	8,0K	4,2%
Hombres +60	8,2K	4,3%
Total	192K	

Proporción de hogares desplazados según necesidades prioritarias al momento de desplazamiento

Ninguna necesidad	27%	
Otras necesidades	6%	
Orientación legal	5%	
Asistencia en salud física	6%	
Protección de bienes	7%	
Asistencia psicológica	17%	
Protección durante el movimiento	18%	
Alimentos, vestuario, aseo, enseres	62%	
Ayuda para trasladarse	74%	
Alojamiento	74%	

Los porcentajes corresponden a la incidencia de cada necesidad sobre el total de hogares desplazados. No suman 100 por ciento dado que cada hogar reportó hasta tres necesidades prioritarias⁷⁰.

69 Por lo menos 1.2 millones de personas viven en superficies susceptibles a inundaciones. Datos de Open Street Map procesados por Map Action.

70 SEDH/ACNUR. Estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno por Violencia en Honduras 2004-2018. Diciembre 2019. <https://data2.unhcr.org/es/documents/download/73689>

Población afectada

1. Hogares con vivienda destruida por eventos geo-climáticos en los últimos dos años.

Se considera con necesidad crítica a las personas cuya vivienda fue destruida por eventos geo-climáticos (Eta, Iota e inundaciones) en los últimos dos años y que permanecen en situaciones de desplazamiento forzado. Esta situación conlleva la vulneración de la interacción entre comunidades y redes de apoyo, así como la imposibilidad de generar medios de vida, con implicaciones de largo plazo. El impacto es diferenciado para las mujeres jefas de hogar, las adolescentes y las niñas y se refleja en una profundización de las situaciones de vulnerabilidad frente a diferentes riesgos y formas de VBG, incluyendo la explotación y el abuso sexual por personal humanitario.

Además, 85.734 personas viven en viviendas dañadas por Eta e Iota, que aún no logran repararlas, o que pudieron repararlas solo parcialmente. Para este año se incluyó también el número de personas evacuadas y aquellas cuyas viviendas fueron dañadas y destruidas a causa de inundaciones, deslizamientos e incendios en los últimos tres años⁷¹.

2. Hogares que actualmente viven en áreas inseguras afectadas por eventos geo-climáticos.

Los fenómenos climáticos, en particular huracanes e inundaciones, están aumentando en frecuencia y gravedad y dificultan que las comunidades afectadas ya vulnerables a causa de la pobreza, la delincuencia y otros factores socioeconómicos- puedan recuperarse e invertir el tiempo y recursos necesarios para lograr una vivienda adecuada. Con el impacto añadido de las sequías y la inseguridad alimentaria, un gran porcentaje de agricultores de subsistencia particularmente del Corredor Seco, optan por dejar sus hogares buscando otras formas de subsistencia.

3. Hogares desplazados debido a peligros comunitarios/regionales (incluida la violencia y conflictos) con necesidad de alojamiento

Unas 247.090 personas se desplazaron internamente en Honduras entre enero de 2004 y agosto de 2018. Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Atlántida fueron los principales departamentos expulsores y receptores de hogares desplazados, mientras que San Pedro Sula, el Distrito Central, La Ceiba y Choluteca eran los cuatro municipios más afectados por el desplazamiento interno, y los municipios con mayor número de homicidios registrados en los cinco años anteriores⁷².

Además, 56.777 personas han ingresado irregularmente desde enero al 6 de julio de 2022, a través de las Delegaciones de Danlí, CAMI Choluteca, Trojes, CAMI Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como a puntos en Guasaule y la Fraternidad en Choluteca, Agua Caliente y El Poy en Ocotepeque y en El Paraíso. De esta población, el 54.84% son hombres, 29.32% mujeres, 8.52% niños y 7.31% niñas. Se estima que al menos 74% de estas personas requieren asistencia en alojamiento temporal⁷³. Considerando que el número mayor de personas registrado durante un mes en estas zonas fue de 17.150 y que su estadía en territorio hondureño no sobrepasa siete días en la mayoría de los casos, se calcula que 4.288 personas requieren asistencia de alojamiento temporal en todo momento.

Proyección de las necesidades

Al menos 29.463 personas viven actualmente en áreas propensas a inundaciones⁷⁴. A medida que se intensifique la frecuencia de desastres a causa del cambio climático, se pronostica que los recursos hídricos disminuirán, las sequías serán más pronunciadas y aún más personas se encontrarán en riesgo y con vulnerabilidad agravada en todos los departamentos del país. Si a eso se suma el desplazamiento por inseguridad alimentaria, la

71 Informes de implementación de los miembros de la mesa de Alojamiento y datos del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) 2020.

<https://sheltercluster.org/es/response/honduras-hurricanes-eta-and-iota>

72 Estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno por Violencia en Honduras 2004-2008

73 Idem

74 A partir de datos del Centro de Estudios Valle de Sula, Análisis de amenaza de inundaciones, Sequías y deslizamientos a nivel nacional. INE, Secretaría de Estado del despacho legal Presidencial, COPECO.

situación de pobreza, la marginalidad y actual déficit de alojamiento, se prevé que los números presentados anteriormente seguirán en aumento. Sin embargo, para establecer con certeza la proyección de las necesidades, se requiere identificar las brechas de la asistencia humanitaria actual, para superponerla con los datos de riesgos geo-climáticos, socioeconómicos y de crecimiento poblacional.

Se considera que el alojamiento es la base de la asistencia humanitaria, ya que establece el espacio vital para retomar la normalidad y aquel donde las personas pueden gozar los beneficios de protección, bienestar psicológico, dignidad, mejor salud, a partir de la cual las mujeres y las niñas, los niños y los hombres pueden recuperarse y reconstruir sus vidas y medios de vida. La asistencia en alojamiento y asentamientos establece las bases para que las comunidades puedan experimentar una tensión reducida, cohesión social y participación comunitaria. Es por eso que el acompañamiento de alojamiento a la asistencia proporcionada por otros sectores es vital para el impacto a largo plazo del trabajo humanitario. Esto se evidencia también en el acompañamiento a la población en movimiento en términos de alojamiento individual y adecuado para sus necesidades diferenciadas.

Panorama y población afectada

Por criterios de protección y seguridad, la respuesta en alojamiento temporal individual tanto para personas desplazadas por fenómenos geo-climáticos como riesgos comunitarios⁷⁵ es la opción más apropiada. Cuando la opción de albergues colectivos sea la única disponible, es importante apoyar oportunamente a las personas que salen de ellos y requieran una solución para acceder al derecho a la vivienda digna. Este apoyo debe tomar en consideración la regeneración de medios de vida y la mantención de redes comunitarias de apoyo.

Monitoreo

El monitoreo del avance de la asistencia en alojamiento se efectúa a través de la revisión de informes efectuados por los socios del cluster de Alojamiento en la plataforma 345W y visitas de campo. A nivel subregional, los actores de alojamiento son direccionados a grupos de coordinación establecidos, por ejemplo para los movimientos mixtos liderizados por el cluster de Coordinación y Gestión de Albergues (CCCM) y el cluster de Protección.

Asimismo, se siguen los mecanismos establecidos por el Global Shelter Cluster, para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos y la corrección de la coordinación, cuando esta fuera necesaria.

Indicadores

INDICADORES PARA EL CÁLCULO DE PIN	PIN	CONSECUENCIAS HUMANITARIAS	FUENTE
Personas cuya vivienda fue dañada y destruida por eventos geo-climáticos en los últimos dos años y que no fue reparada ni reconstruida + Personas afectadas por los recientes eventos geo-climáticos	92.5 K	Estándares de vida	CONVIVIENDA, SEDIS, 345W database, Socios de la Mesa de Shelter Honduras, Centro de Estudios Valle de Sula, Análisis de amenaza de inundaciones, sequías y deslizamientos a nivel nacional. INE, Secretaría de Estado del despacho legal Presidencial, COPECO
Hogares desplazados debido a violencia, con necesidad de alojamiento	121.5 K	Estándares de vida	ACNUR, CONADEH, NRC, UNAH

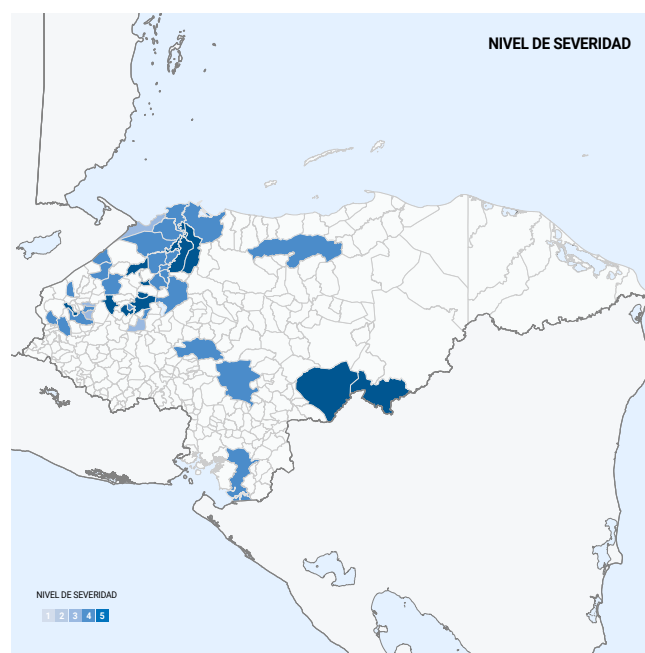
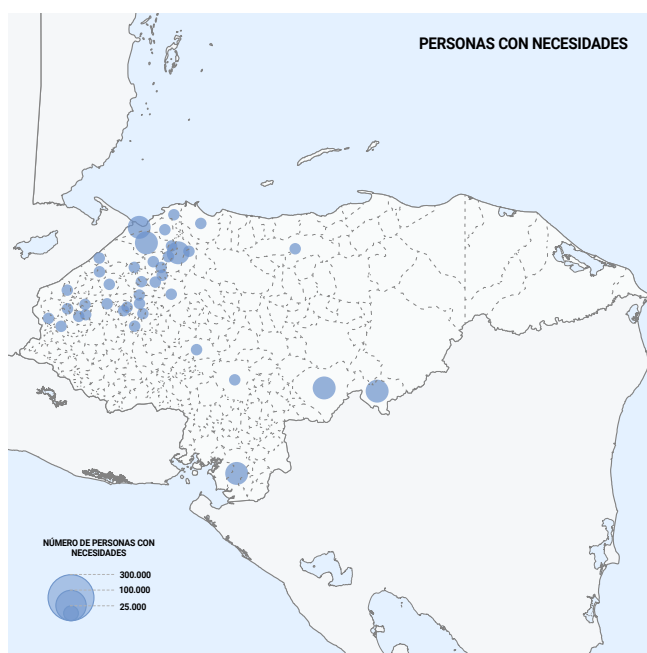
75 Indicador de alojamiento según el Marco Conjunto Intersectorial (JIAF) “% of HHs who are displaced due to community/regional hazards” que implica el grado de vulnerabilidad en el entorno comunitario e incluye la vulnerabilidad a la violencia real o la amenaza de violencia, la coerción y la privación deliberada.

3.3

Clúster de Coordinación y Gestión de Albergues (CCCM)



PERSONAS EN NECESIDAD	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HOMBRES
383K	29%	16%	4,5%	50%



La coordinación y gestión de albergues es la provisión de asistencia y protección a personas desplazadas por desastres de origen natural y/o conflictos en base al marco legal de protección internacional y leyes nacionales y al cumplimiento de las normas mínimas para la respuesta humanitaria (Esfera). La gestión de alojamientos se fundamenta en los principios de participación y rendición de cuentas a poblaciones afectadas con el fin de asegurar su dignidad durante el desplazamiento.

El Clúster de CCCM tiene como objetivo principal proteger a las personas afectadas por desastres o desplazamientos proporcionando un alojamiento que garantice el acceso a servicios de protección y asistencia humanitaria de forma digna asegurando la integración de los enfoques de protección, género e inclusión. Considerando la respuesta multisectorial, las acciones del clúster se realizan en coordinación con los Clústeres de Alojamientos de Emergencia, Seguridad Alimentaria, Agua y Saneamiento, Protección, Salud, y las Áreas de Protección para la Niñez y VBG, entre otros.

Análisis de las necesidades humanitarias

Honduras es una nación altamente vulnerable ante los eventos climatológicos, muestra de ello son las afectaciones causadas por las Tormentas Eta e Iota, que entre los años 2020 y 2021 afectaron directamente a más de 37.000 personas que fueron desplazadas y se habilitaron más de 1.000 albergues que atendieron aproximadamente a 96.649⁷⁶ personas. Pese a que el país aún se encuentra en recuperación, a septiembre de 2022 las fuertes lluvias provocaron el desplazamiento de personas en diferentes zonas del país; 150 albergues han sido habilitados y unas 9.427 personas han sido albergadas en al menos 99 comunidades⁷⁷, debido a deslizamientos e inundaciones. En octubre, la Tormenta Tropical Julia agravó más la situación debido a la cantidad de lluvia que provocó nuevamente el desbordamiento de ríos y quebradas, sumando más comunidades a las afectaciones antes descritas e interrumpiendo tramos de carreteras de la ruta migratoria que cruzan las personas migrantes en su paso por Honduras.

En 2022, el INM ha reflejado un aumento histórico de las cifras de flujos migratorios mixtos irregulares: en 2021 se registraron 17.590 atenciones en las diferentes delegaciones a nivel nacional y a agosto 2022 ya se registraban más de 88.000⁷⁸ personas migrantes en movimiento tanto intra como extracontinentales que ingresan al país. Las delegaciones del INM ubicadas en frontera suroriente de Honduras reportan atenciones a más de 1.000 personas migrantes por día⁷⁹ necesitadas de alojamientos temporales durante el cruce en su ruta migratoria por del territorio hondureño, así como el cumplimiento y la salvaguarda de sus derechos.

Otro grupo vulnerable son las personas retornadas, quienes a su regreso voluntario o forzado vuelven a Honduras como su país de origen carentes de herramientas que permitan su resiliencia durante su proceso de retorno, incluyendo la necesidad de albergue. La cantidad de personas migrantes

retornadas según estadísticas oficiales también continúa en aumento y durante 2022 se han atendido aproximadamente 70.725 personas migrantes retornadas.

Proyección de las necesidades

El Clúster de CCCM ha identificado que la población con mayor necesidad de una respuesta humanitaria es de 383.000 personas (aproximadamente 111.751 mujeres y 192.693 hombres). Los principales grupos vulnerables son las personas migrantes y desplazadas internas por eventos hidrometeorológicos, migrantes y refugiadas extra e intra continentales y la población migrante retornada.

Aún continúa la carencia de actores especializados en la gestión y coordinación de albergues a nivel comunitario, así como la vulnerabilidad en las capacidades locales y la falta de recursos para la atención, lo que se refleja en la falta de una atención adecuada y alojamientos temporales con estándares que garanticen una respuesta digna.

Según el reporte del último Análisis Rápido de Género (enero 2022) continúa el impacto diferenciado entre mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ albergadas, donde las condiciones físicas de las estructuras o espacios destinados como albergues no son adecuados y seguros para estas poblaciones al no cumplir en la mayoría de los casos con los requerimientos mínimos en cuanto a la separación de poblaciones y familias (hacinamiento) y la no existencia de espacios privados y seguros para aseo personal y con pocas medidas de seguridad⁸⁰. Con respecto a PEAS, frente al riesgo se ha observado la necesidad de formar al personal humanitario sobre acciones de prevención y respuesta a la EAS.

Monitoreo

El monitoreo de la respuesta se realizará regularmente a través de las mesas de coordinación y en los

76 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46853/3/S2100044_es.pdf

77 OCHA Infografía Afectaciones y Respuesta a la temporada lluviosa, al 29 de septiembre de 2022.

78 <http://inm.gob.hn/estadisticas.html>

79 Reporte 10 Situación Frontera Oriente y Sur Oriente Danlí y Trojes. 1 de septiembre de 2022.

80 <https://reliefweb.int/report/honduras/honduras-lisis-r-pido-de-g-nero-arg-desaf-os-para-las-mujeres-y-ni-ante-una>

albergues a través de evaluaciones multisectoriales que integren el análisis de género; de esta manera se garantizará el acceso a la información sobre las necesidades y condiciones de la población desplazada en albergues y asentamientos similares, integrando el análisis de género. Además, se dará seguimiento a un mapeo georreferenciado de albergues a nivel nacional consensuado con las autoridades gubernamentales responsables de la respuesta y los actores humanitarios.

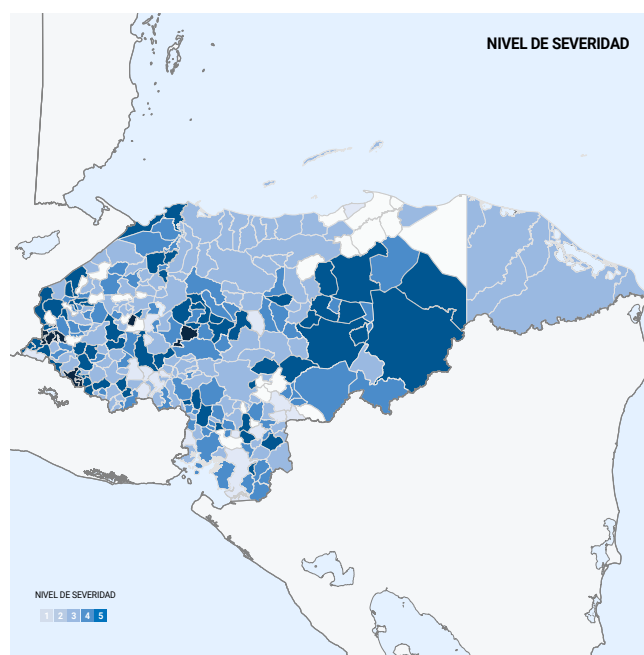
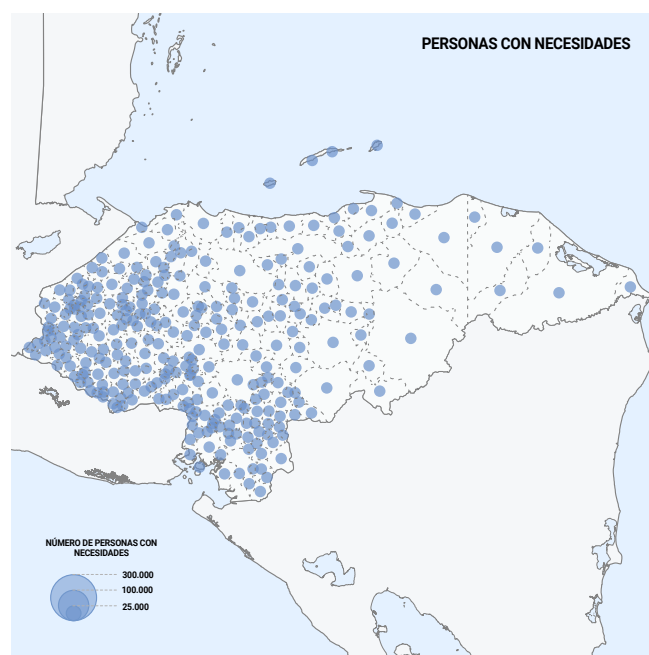
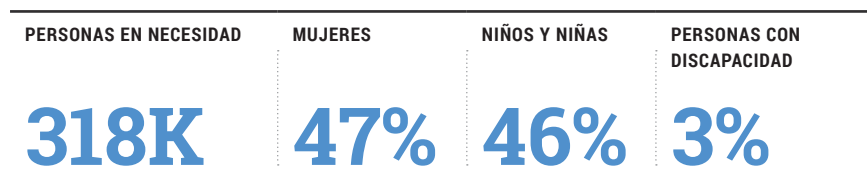
Los socios de la mesa reportarán en las reuniones bimensuales sobre las personas beneficiarias alcanzadas desagregadas por género y edad, así como las acciones realizadas y planificadas. Los fondos ejecutados para la respuesta humanitaria y las actividades se registrarán en la matriz 345W de OCHA (desagregado por edad y sexo).

Indicadores

#	INDICADOR	CLÚSTERES	FUENTE
01	Porcentaje de la población en lugares con acceso a mecanismos de reclamación y retroalimentación que funcionan	Protección, Logística	Evaluaciones COPECO. Mayo 2021. DTM Feb.2022
02	Porcentaje de la población con acceso a los servicios básicos a poca distancia a pie	Alojamientos/ Artículos no alimentarios, Logística	Evaluaciones COPECO. Mayo 2021. DTM Feb.2022
03	Porcentaje de la población en sitios que son física y socialmente adecuados	Alojamientos/ Artículos no alimentarios	Evaluaciones COPECO. Mayo 2021. DTM Feb.2022

3.4

Clúster de Educación



El sector educativo ha sido uno de los más afectados por situaciones de emergencias en Honduras. Muchos de los centros educativos fueron destruidos por las Tormentas Eta e Iota y no se han podido restablecer en su totalidad. La pandemia de COVID- 19 ha significado una importante amenaza para los NNA, poniendo en riesgo la salud, el bienestar y sobre todo los aprendizajes de los NNA que se ausentaron de las aulas durante casi dos años, afectando especialmente a quienes no pudieron beneficiarse de los modelos de educación virtual. La exclusión por razones de pobreza, vulnerabilidad y falta de empleo en el núcleo familiar hizo imposible la adquisición de dispositivos

inteligentes y/o la compra diaria de la conexión a internet, lo que repercute directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la promoción de los NNA en el sistema educativo. En otros casos, la exclusión viene determinada por el desplazamiento forzado de las familias en búsqueda de un mejor futuro.

Análisis de las necesidades humanitarias

La exclusión es uno de los principales problemas que afronta el sistema educativo. Según la Secretaría de Educación, cerca de 1,2 millones de NNA (40 por ciento de la población en edad escolar) se encuentran desescolarizados⁸¹. La exposición a

⁸¹ Estadísticas de la Secretaría de Educación.

riesgos provoca que los NNA sean afectados por diversas vulnerabilidades incrementando los índices de abandono escolar y siendo las niñas las más perjudicadas, ya que es a ellas a quienes se les adjudican responsabilidades en el hogar y en un índice considerable de casos se enfrentan a matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas, abandonando sus estudios y su proyecto de vida y aumentando su situación de vulnerabilidad frente a la VBG.

El desplazamiento forzado y la migración forman parte del árbol de vulnerabilidades de la Estrategia Nacional de Prevención y Seguridad Escolar. Los NNA abandonan los centros educativos por razones de pobreza y/o violencia, entre otras condiciones y emprenden la ruta migratoria con la esperanza de obtener un mejor futuro al lado de sus familiares; en el peor de los casos estos transitan sin la compañía de un adulto; en muchos casos estas causas son coincidentes. Las estadísticas muestran que entre 2021 y 2022, unos 55.072 NNA han abandonado sus estudios a causa de la migración⁸².

El gran desafío que enfrenta la Secretaría de Educación es reinsertar a los NNA que por diversas vulnerabilidades (cualquier tipo de violencia, trabajo infantil, embarazos tempranos infantiles forzados, crisis socioeconómica, entre otras) han migrado. De acuerdo con el sexto Informe de Monitoreo de la ODK (Open Data Kit) de 2021 implementado por la Secretaría de Educación, el 49.9 por ciento de 79.983 NNA no estaban siendo atendidos porque migraron (39.912 NNA). Según el Instituto Nacional de Migración, en 2021 retornaron 20.182 NNA mientras que a septiembre de 2022 han retornado 20.012, por lo que las proyecciones indican que habrá un incremento de NNA retornados⁸³.

Para facilitar la reinserción de esta población, en 2018 se creó un protocolo para reinsertar a la niñez migrante garantizando el derecho a la educación. Este protocolo proporciona los primeros auxilios psicoemocionales para NNA, facilita el proceso de matrícula, así como

las priorizaciones y adecuaciones curriculares de manera oportuna, afectuosa y apropiada de acuerdo con las vulnerabilidades que viven los NNA migrantes retornados. Este proceso se realiza con el objetivo de fortalecer la visión de la educación como factor protector de los NNA ante diversas crisis y mejorar la capacidad de respuesta de la Secretaría de Educación.

La rehabilitación de la infraestructura educativa es una prioridad: de 17.525 centros educativos a nivel nacional, el 81 por ciento presentan algún tipo de daño en su infraestructura. Las Tormentas Eta, Iota y Julia dañaron 1.201 centros educativos⁸⁴ y más de un centenar se habilitaron como albergues provisionales, lo que genera un mayor deterioro de la infraestructura y precariza las condiciones de los mismos. Actualmente, 90 centros educativos están cerrados por completo. Es de vital importancia rehabilitar los centros educativos a nivel nacional bajo un enfoque de inclusión y creación de espacios amigables que sean el lugar protector por excelencia y beneficien el proceso de enseñanza aprendizaje.

Proyección de las necesidades

El flujo migratorio de familias que salen del país por diversas razones continúa y las necesidades de los NNA de esas familias siguen siendo: el acompañamiento psicopedagógico de NNA en su tránsito (entregando cartillas de lecturas rápidas, cuentos cortos y recursos didácticos de llenado interactivo para ser un puente en el proceso de aprendizaje durante su paso en centros de descanso y zonas de acogida temporal); y la reinserción de NNA retornados a través de la oferta de modalidades educativas flexibles que permitan la nivelación y promoción en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es imprescindible desarrollar estrategias sistematizadas que permitan disminuir la cifra de NNA excluidos del sistema. Para lograrlo, es necesario: crear herramientas pedagógicas y recursos de aprendizaje que aborden diferentes vulnerabilidades

82 Estadísticas de la Secretaría de Educación, pág.74.

83 Instituto Nacional de Migración. <http://inm.gob.hn/estadisticas.html>

84 Secretaría de Educación SIPLIE. <https://planmaestro.se.gob.hn/>

para que puedan ser implementadas de manera oportuna y apropiada en los centros educativos; promover el centro educativo como el primer espacio protector que fomenta la participación de las asociaciones de padres de familia y la comunidad en las actividades educativas; y fortalecer estrategias de atención psicoemocional y estandarizar adecuaciones y priorizaciones curriculares para nivelar las competencias de NNA desescolarizados que son reinsertados al sistema educativo.

Panorama y población afectada

Honduras tiene 3,5 millones de NNA en edad escolar; de estos, alrededor de 1,2 millones están fuera del sistema educativo y están constantemente expuestos a una serie de vulnerabilidades como la violencia, el embarazo en adolescentes, el trabajo infantil, la migración, entre otras, situación que incrementa las cifras de abandono escolar. Lo anterior es alarmante considerando que el requerimiento mínimo del sector social al sector educativo es la educación básica (hasta noveno grado) pero las cifras de deserción escolar imposibilitan cumplir con esa demanda.

Sumado a ello, la Tormenta Julia deterioró las condiciones hidrosanitarias en centros educativos. Unos 1.613 NNA se vieron forzados a evacuar sus hogares y permanecer en albergues. Es necesaria una intervención integral, así como la dotación de kits de herramientas de contención emocional y material didáctico para los centros educativos, apoyo al personal docente que pueda implementar las herramientas de respuesta rápida de la Secretaría de Educación y brindar primeros auxilios psicopedagógicos a NNA afectados.

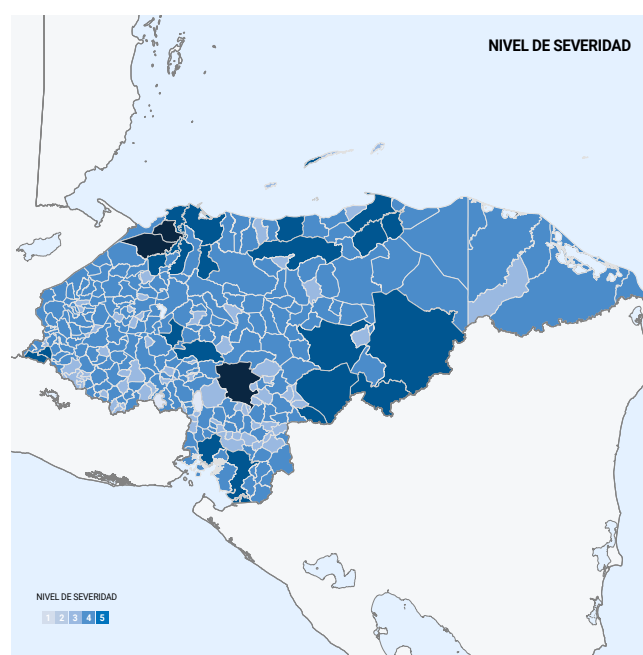
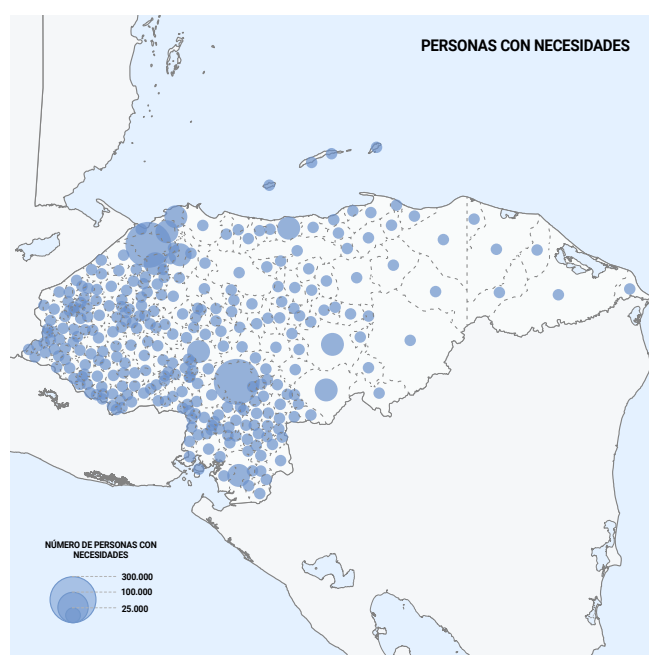
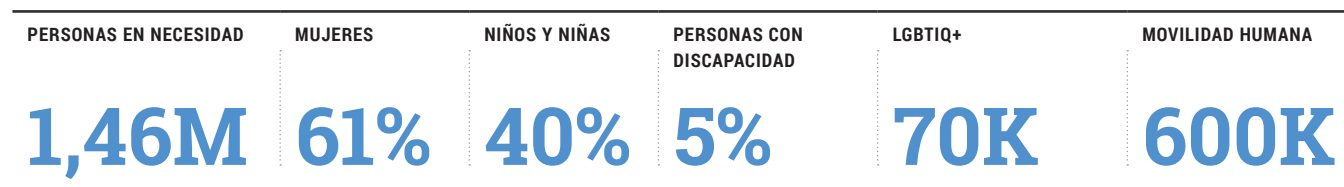
Monitoreo

El Clúster de Educación y la Secretaría de Educación realizarán un proceso de seguimiento y monitoreo constante de las estrategias creadas para dar respuesta ante las diversas vulnerabilidades con el objetivo de identificar avances en la capacidad de respuesta del Estado, sociedad civil y agencias de cooperación internacional. Con el monitoreo se podrán obtener datos relevantes para formulación de proyectos y estrategias orientadas a evitar la deserción escolar. A la vez, nos permitirá optimizar recursos evitando la duplicidad de esfuerzos para tener una mayor cobertura de NNA en necesidad.

Indicadores

#	INDICADOR	PIN	CONSECUENCIAS HUMANITARIAS	FUENTE
01	Número de niñas y niños que no asisten a la escuela por sexo y nivel escolar como resultado de las crisis	275,2K	Estándares de Vida	Secretaría de Educación
02	Número de escuelas cerradas/no funcionales a causa de los fenómenos naturales	3,8K	Estándares de Vida	Secretaría de Educación
03	NNA fuera de sistema educativo por migración	39,9K	Estándares de Vida	Secretaría de Educación

3.5 Clúster de Protección



Honduras enfrenta una multiplicidad de crisis en el ámbito social, económico, político y ambiental que se manifiestan y refuerzan en un contexto de violencia generalizada en el que los riesgos de protección se profundizan y materializan de manera diferencial y desproporcionada sobre las mujeres, las personas LGBTIQ+, los NNA, las personas con discapacidad y los pueblos étnicos.

Análisis de las necesidades humanitarias

En el ámbito social y económico, el país afronta las consecuencias de un crecimiento insuficiente y de

escaso impacto sobre la reducción de la pobreza, altos índices de informalidad laboral y una desigualdad estructural que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, la población con discapacidad, los pueblos indígenas y las comunidades afro hondureñas.

Los efectos de la pandemia de COVID-19 y de los huracanes a finales de 2020 tuvieron un resultado negativo en todos los indicadores del desarrollo humano, así como en la dinámica de la violencia y los riesgos sobre la población⁸⁵.

⁸⁵ De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2022, Honduras presentó un índice de 0.634, que lo sitúa en la posición 132 de 189 países, ubicándose sólo por encima de Haití en los países de América Latina y el Caribe. IDH Honduras Pág. 33

Los índices de violencia se mantienen muy por encima de la media en LAC. En 2021, la tasa de homicidios fue de 38.6 por cada 100.000 habitantes⁸⁶, casi el doble de la tasa promedio de la región (19.2 por cada 100.000 habitantes)⁸⁷.

Además, la violencia en Honduras está presentando cambios en las dinámicas que se materializan, principalmente, en la agudización de los escenarios de disputas territoriales en zonas históricamente impactadas por la violencia como San Pedro Sula, La Lima, Choloma, y Tegucigalpa, así como en zonas en donde el nivel de incidencia registrado históricamente era menor como Danlí, Choluteca, Olancho, Valle, La Ceiba y Gracias a Dios.

Los controles y restricciones impuestas por las maras y pandillas han aumentado, especialmente en los centros urbanos, afectando de manera particular las zonas periféricas en donde se registra el agravamiento de las restricciones a la movilidad y a la libertad, la extorsión, uso, utilización y reclutamiento forzado, así como del despojo, la apropiación indebida y la destrucción de viviendas.

A nivel rural, las disputas por las tierras, particularmente aquellas vinculadas a proyectos extractivos y a conflictos prolongados no resueltos, son causa de la exacerbación de la violencia, de los riesgos sobre los liderazgos comunitarios y del despojo y el desplazamiento forzado.

En este contexto, la violencia sigue siendo un detonante de la huida de la población en búsqueda de protección, tanto internamente como fuera de las fronteras del país.

Honduras es el sexto país con mayor cantidad de solicitudes de asilo presentadas en el extranjero en 2021. Durante ese año, 59.800 personas de nacionalidad hondureña solicitaron asilo, un 13 por ciento más que en 2020.

El análisis de la magnitud del desplazamiento forzado interno se ve dificultado debido a la ausencia de un sistema de registro que facilite la identificación y atención de la población afectada. No obstante, de acuerdo con el Estudio de Caracterización más reciente, al menos 247.090 personas (el 2.7 por ciento de la población hondureña) se vio forzada a desplazarse por la violencia de 2004 a 2018. Ante la gravedad de esta situación, cabe resaltar los limitados recursos de la respuesta institucional de emergencia para brindar una protección integral.

A este escenario se suman las necesidades humanitarias generadas por el ingreso de personas refugiadas y migrantes en movimientos mixtos. De acuerdo con cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2022 ingresaron de manera irregular 141.200 personas que han sobrepasado las capacidades de respuesta y atención de las instituciones y actores humanitarios.

Proyección de las necesidades

La pobreza, la desigualdad, la discriminación, la violencia, la corrupción, la impunidad y las consecuencias de la crisis sanitaria y humanitaria generada por la COVID-19, así como por las devastaciones de Eta e Iota y más recientemente, los impactos de la temporada de lluvias en los últimos meses de 2022, bajo un escenario caracterizado por la ausencia de un Estado de Derecho pleno, eficiente y transparente⁸⁸, generan la crisis multicausal (multicrisis) que agudiza los efectos de los riesgos de protección y condiciona las proyecciones de las necesidades humanitarias.

En este contexto, el número de personas en necesidad (PIN) de protección ha aumentado: (i) por la persistencia de los riesgos sobre la población; (ii) por la erosión de los mecanismos de afrontamiento, adaptación y autoprotección de las personas y las comunidades; (iii) por la confluencia de riesgos

86 Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL)

87 Insight Crime. Febrero de 2022. Balance de los homicidios en 2021. [INSIGHTCRIME. Homicidios 2021](#)

88 De acuerdo con el IDH 2022, el Estado de Derecho se ha debilitado de manera sistemática en los últimos 20 años, con crisis recurrentes de gobernabilidad que han afectado a la población, dañado la capacidad estatal de respuesta a las demandas sociales crecientes y desacelerado los avances en el desarrollo humano. Op. cit. [IDH Honduras](#) Pág. 27.

ambientales en zonas con presencia de crimen organizado; (iv) por la debilidad en la respuesta en prevención y abordaje integral de las causas estructurales del desplazamiento y la violencia.

Monitoreo

El monitoreo de la situación humanitaria y de protección se efectuará a través de los acuerdos definidos entre el Sector Regional de Protección y las Áreas de Responsabilidad de REDLAC, el Global Protection Cluster (GPC), así como las estructuras definidas a nivel nacional y local, incluyendo los Equipos Locales de Protección y el dispositivo de presencia de la membresía de los actores de

protección para asegurar una adecuada actualización de los riesgos y necesidades.

Metodológicamente, el Clúster de Protección seguirá integrando el Marco Analítico de Protección (PAF, por sus siglas en inglés) con el objetivo de mantener el análisis nacional, territorial, temático y poblacional a través de los estándares comunes y validados a nivel global. Este monitoreo se traducirá en análisis de protección actualizados y se constituye en una herramienta fundamental para consolidar la centralidad de la protección en la estructura humanitaria.

Indicadores

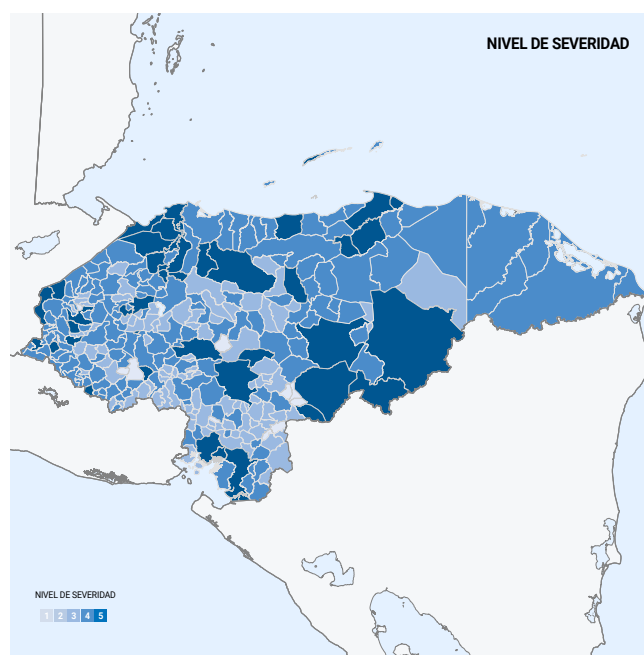
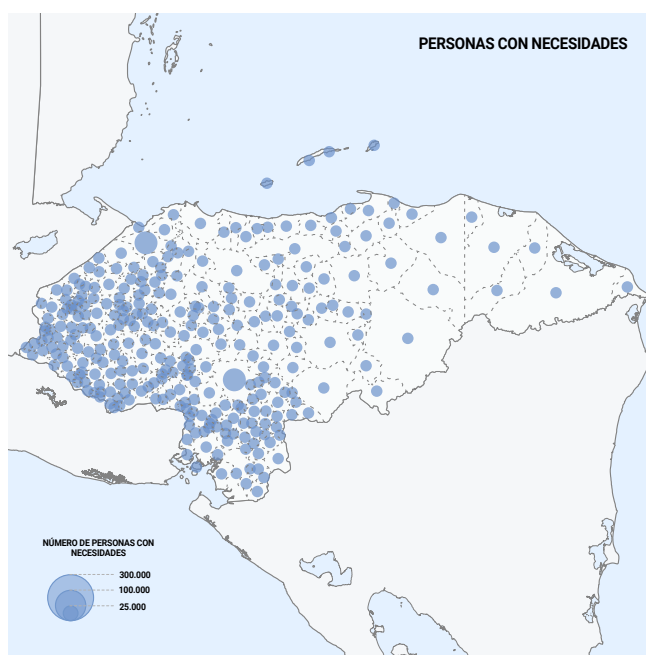
#	INDICADOR	CLÚSTERES	FUENTE
01	Personas desplazadas internamente, retornadas y refugiadas en relación con la población de acogida	Protección	Personas refugiadas y solicitantes de asilo (INM) Retornadas (INM) Movimientos mixtos (INM) IDPs (Caracterización CONADEH)
02	Amenazas e incidentes notificados en las comunidades monitoreadas	Protección	Inundación - Sequía (COPECO) Presencia de grupos armados (Análisis de actores protección)
03	Víctimas de homicidio, lesiones personales, desaparición como consecuencia de un conflicto, violencia, u otra situación	Protección	Homicidios (SEPOL) Enfrentamientos, Protestas, Disturbios, Despliegues estratégicos, Violencia contra civiles (ACLED)

3.5.1

Área de Responsabilidad de Protección de la Niñez



PERSONAS EN NECESIDAD	NNA MUJERES	NNA HOMBRES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CUIDADORES	NNA
546K	44%	43%	5%	8%	27K



Análisis de las necesidades humanitarias

En Honduras, la niñez y la adolescencia (39.4 por ciento de la población, según el INE) representa una de las poblaciones en condición de vulnerabilidad más afectadas. Las niñas, niños y adolescentes (NNA) enfrentan diferentes formas de violencia en entornos que deberían ser protectores, como el hogar, la escuela y la comunidad. Estos riesgos de violencia, abuso, negligencia y explotación de niños y niñas en el país se ven agravados por la pobreza (tres de cada cinco niñas o niños hondureños viven en un estado de pobreza

multidimensional y uno de cada cuatro niños vive en pobreza extrema), el acceso limitado a una educación de calidad, servicios sociales y opciones de medios de vida y exacerbados en las situaciones de emergencias.

En 2021, 758.095 NNA de entre cinco y 17 años estaban fuera de la escuela, de los cuales el 50.2 por ciento expresaron como razón principal la falta de recursos económicos, seguido por un 26.3 por ciento, que indicaron no querer seguir estudiando⁸⁹. Se ha duplicado la cantidad de NNA vinculados al trabajo infantil, cerca de un millón de NNA de entre cinco

89 FEREMA. (s. f.). Informe de Progreso Educativo HONDURAS 2022

y 17 años trabajan en Honduras, principalmente en labores agrícolas. Este aumento de más del doble de lo que se registraba a inicios de 2020 se explica por la paralización de la educación generada por la COVID-19 y por Eta e Iota⁹⁰.

Los NNA en Honduras corren un riesgo desproporcionado de muerte violenta. Durante los últimos 24 años, particularmente entre febrero de 1998 y junio de 2022 se han registrado 14.084 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años⁹¹. En 2021 se registraron 14.385 denuncias por delitos cometidos contra la niñez asociadas a violencia, negligencias o situación de vulnerabilidad de las niñas y niños menores de 18 años⁹², aunque las denuncias no reflejan toda la problemática ya que para muchas niñas y niños víctimas no es accesible ni seguro denunciar. Existe un incremento del reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado como maras y pandillas que ejercen control territorial en algunas comunidades, limitando el acceso humanitario y que no se visibiliza actualmente.

La violencia sexual y física contra NNA es asunto que requiere el mayor nivel de relevancia. En 2020 se presentaron 1.749 requerimientos fiscales de delitos sexuales cometidos contra NNA que tenían de cero a 17 años, el 90 por ciento (1.572) fue contra niñas y el 10 por ciento (177) contra niños⁹³. Según la Encuesta EVCNNA⁹⁴, el 47 por ciento de las mujeres víctimas de abuso sexual en su infancia fueron abusadas por un familiar y el 15.5 por ciento del sexo por coerción o físicamente forzado contra las niñas resultaron en embarazos. Todos estos factores influyen para que Honduras tenga tasas altas de embarazo en adolescentes⁹⁵ y muchas niñas sufran de violencia sexual en sus hogares de forma invisibilizada.

Según la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), en 2021 se registraron aproximadamente

12.194 retornos de NNA. Este número ha sido sobrepasado solo con datos de NNA retornados de enero a agosto de 2022, que suman 12.473, lo que resulta en un reto muy complejo en la protección de derechos de la niñez, ya que la migración infantil se incrementa y normaliza⁹⁶.

Proyección de las necesidades

La capacidad estatal para responder a las necesidades de la niñez y adolescencia sigue siendo muy débil y falta un sistema de protección fortalecido. El Área de Responsabilidad de Protección de la Niñez ha fortalecido los entornos protectores a nivel familiar y comunitario para disminuir los riesgos de violencia, abuso, explotación y negligencia, así como atendido directamente a los NNA en necesidad de servicios especializados de protección asegurando que la respuesta se adecúe a sus diferentes necesidades y capacidades según su condición de género, etnia y discapacidad. Dichos servicios incluyen la atención en salud mental para NNA víctimas de violencia física, psicológica y/o sexual; la implementación de espacios seguros y amigables; y la asesoría y orientación legal a prestadores de servicios para la remisión de casos a la DINAF y Ministerio Público, entre otros.

Pese al enorme trabajo de los organismos que brindan respuesta a las niñas y niños, existe una brecha importante. Los riesgos de protección que enfrentan los NNA son severos y variados y se prevé su incremento, por lo que resulta necesario asegurar una respuesta de protección de los derechos de la niñez con un financiamiento adecuado.

Panorama y población afectada

La convergencia de múltiples emergencias, el incremento de las consecuencias del cambio climático, la pobreza, el acceso limitado a una educación de calidad, los servicios sociales, las opciones de medios

89 FEREMA. (s. f.). [Informe de Progreso Educativo HONDURAS 2022](#)

90 EFE. 22 diciembre de 2021. Más de 400.000 niños y niñas entre cinco y 17 años trabajan en Honduras. www.laprensa.hn. EFE. [Trabajo Infantil](#)

91 Casa Alianza Honduras. Junio 2022. [Informe mensual](#).

92 Datos registrados a partir del Informe remitido por la Secretaría de Seguridad sobre denuncias de delitos contra la niñez, que incluyen: homicidio, suicidio, asesinatos, abandono, negligencia, maltrato, acoso sexual, abuso sexual, explotación sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, proxenetismo, incesto, pornografía, secuestro, trata, tortura, violencia intrafamiliar y otras formas de violencia.

93 Informe del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), [Observatorio Nacional de la Violencia \(ONV\)](#), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

94 Subsecretaría de Seguridad en Prevención, Secretaría de Seguridad. Honduras [Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes, 2017](#). Tegucigalpa, Honduras, 2019.

95 Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la tasa de embarazo adolescente en Honduras roza los 89 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, superior al promedio de la región de 61 nacimientos y más del doble del promedio mundial. [Proceso digital](#)

96 Instituto Nacional de Migración. INM. [Niños y niñas retornados](#)

de vida, la inseguridad alimentaria, migración infantil y un débil sistema de protección de derechos de la niñez aumentan la vulnerabilidad de las niñas y niños en las zonas más afectadas por las crisis.

Monitoreo

El monitoreo de la situación humanitaria se realizará a través de la estructura dispuesta por el Clúster de Protección y las Áreas de Responsabilidad (AdR) de VBG y Protección de la Niñez, con la contraparte de gobierno⁹⁷. El AdR de Protección de la Niñez realizará el monitoreo de manera trimestral para identificar

ajustes posibles en la intervención, a partir del reporte a la plataforma 345W. El reporte sectorial se actualizará en las plataformas previstas por OCHA y el AdR Global de Protección de la Niñez. Los fondos se monitorean por el reporte en la plataforma Financial Tracking Service (FTS).

Se desarrollarán productos de información basados en datos de los socios e instituciones de gobierno, entre otros. Estos productos servirán de apoyo a los análisis de situación del AdR y sus socios.

Necesidades previstas por indicador (2022-2023)

Miles de personas(K)

	NNA EN NECESIDAD	FACTORES ASOCIADOS	GRUPOS MÁS VULNERABLES
NNA *retornados por municipio (Tasa de NNA por cada mil NNA)	10K	Migración	NNA Migrantes retornados
% de NNA de 5-17 en edad escolar no matriculados	642K	Violencia, trabajo infantil, ETA e IOTA, COVID-19, migración	NNA 5-17 no matriculados
NNA que denuncian violencia (llamadas) por municipio (Tasa de NNA por cada mil NNA)	14K	Violencia	NNA 0-17 que sufren violencia
% NNA 0-17 en trabajo infantil (peligroso) cifra estimada	349K	Trabajo infantil	NNA 5-17 en trabajo infantil peligroso

Indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
CP – 01	NNA *retornados por municipio (Tasa de NNA por cada mil NNA)	DINAF (2021)
CP – 02	% de NNA de 5-17 en edad escolar no matriculados	SEDUC (2020)
CP – 03	NNA que denuncian violencia (llamadas)	Sistema Nacional de Emergencias 911 - Gobierno de Honduras (2021)
CP – 04	% NNA 0-17 en trabajo infantil (peligroso)	ENDESA/MICS 2019 (Datos a nivel departamental)

97 <https://www.fundeu.es/recomendacion/gobierno/>

Personas en necesidad por grupo etario
(2022-2023)

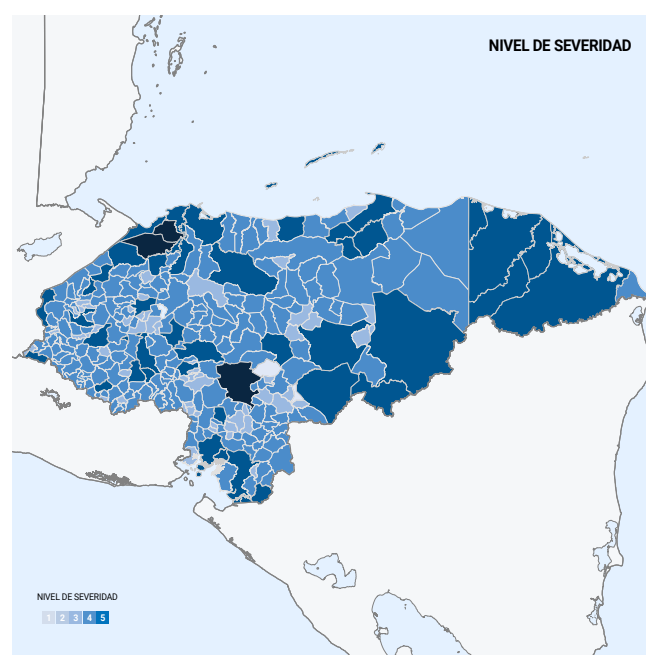
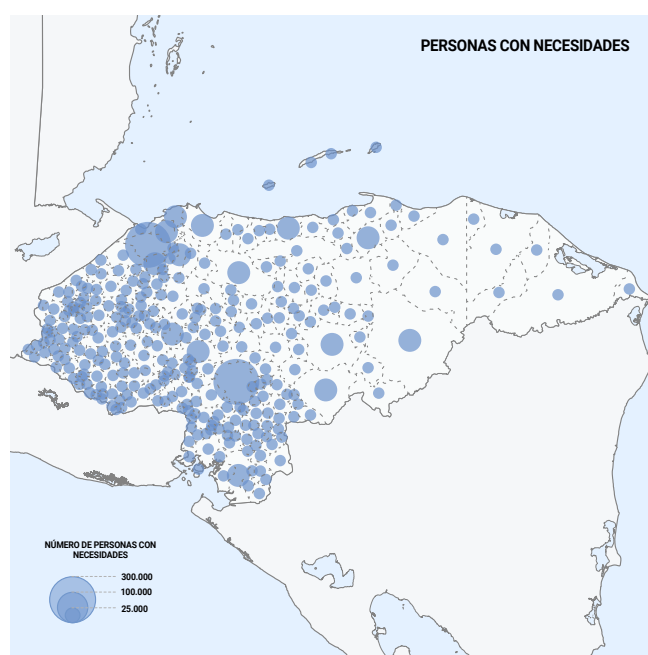
EDAD	PERSONAS EN NECESIDAD	PORCENTAJE
NNA mujeres 0-17	242K	44% <div></div>
NNA hombres 0-17	233K	43% <div></div>
Migración en movilidad humana NNA mujeres y hombres 0-17	27,2K	5% <div></div>
Cuidadores mujeres y hombres +18	43,7K	8% <div></div>
Total	546K	
Con discapacidad (% del total)	27K	5% <div></div>

3.5.2

Área de Responsabilidad de Violencia Basada en Género (VBG)



PERSONAS EN NECESIDAD	MUJERES Y NIÑAS	HOMBRES	NIÑOS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
984K	81%	12%	7%	15%



Honduras se encuentra entre los países más violentos contra mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. Su tasa de femicidios es la más alta de la región, según el Observatorio de Igualdad de Género de Latinoamérica y el Caribe de la CEPAL. Entre enero de 2020 y agosto de 2022, se registraron 818 muertes violentas de mujeres y femicidios (una mujer asesinada cada 24 horas)⁹⁸. Además, un reflejo del alarmante índice de crímenes de odio contra personas con identidad de género y orientación sexual diversa son las 373 muertes violentas de personas LGBTIQ+ reportadas entre 2009 y 2020⁹⁹.

Análisis de las necesidades humanitarias

La confluencia de múltiples factores de crisis afecta de manera diferenciada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. Las emergencias agravadas y el impacto desatendido son impulsores y agravantes de la VBG, debilitando los factores protectores e incrementado los factores de riesgo y las manifestaciones de VBG. Las emergencias profundizan las brechas estructurales, carencias en los sistemas de protección social y fragilidad de los medios de vida de la población más vulnerable, con una disminución en el

⁹⁸ Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres.

⁹⁹ Red Lésbica Catrachas. (s. f.). Informe Sobre Muertes Violentas de personas LGBTI 2009–2020.

acceso a servicios de salud, especialmente de SSR, a mecanismos de denuncia y de justicia y a servicios de primera línea para sobrevivientes de VBG¹⁰⁰.

Entre 2020 y 2022 el Sistema Nacional de Emergencia 911(SNE-911) ha contabilizado más de 180.000 llamadas de auxilio¹⁰¹ para denunciar diferentes expresiones de violencia de pareja íntima. En algunas zonas del país, la violencia sexual continúa siendo el tercer delito cuantificado por el Ministerio Público¹⁰², con mayor incidencia de casos entre niñas de 10 a 19 años, lo cual es congruente con la tasa de matrimonios y uniones tempranas infantiles forzadas: el 27 por ciento de niñas de entre 15 y 19 años del área rural se encuentran unidas actualmente en matrimonio, el 14 por ciento reporta que su pareja es 10 o más años mayor que ella, y el porcentaje de maternidades y embarazos tempranos forzados en la infancia asciende al 28 por ciento¹⁰³.

Así mismo, se estima que el 30 por ciento de las víctimas del delito de trata de personas son niñas y niños y el 50 por ciento son mujeres, con una elevada incidencia en fines de explotación sexual, y otras modalidades, como matrimonio forzado, servidumbre involuntaria y reclutamiento forzoso¹⁰⁴.

Las barreras para el acceso a los servicios de atención a las personas sobrevivientes siguen vigentes y los recursos financieros destinados a la respuesta son limitados en fondos per-se y en alcance geográfico, influyendo directamente en el incremento de la exposición a riesgos de VBG y la situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas. Además, los recursos y acciones destinadas a la PEAS son inferiores a la necesidad en la respuesta.

Pese al enorme trabajo de los organismos que brindan respuesta a las personas sobrevivientes de VBG, existe una disparidad entre los altos índices de VBG y el número de servicios especializados para responder.

De manera diferenciada, las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, dentro de los flujos migratorios mixtos, enfrentan severas exposiciones de sufrir VBG y barreras para acceder a una respuesta inmediata de calidad, ya que los servicios de respuesta no se encuentran cercanos y disponibles en los puntos fronterizos, poniendo en riesgo la salud, salud mental y la vida de las personas sobrevivientes de VBG.

Las personas LGBTIQ+ han enfrentado históricamente vulnerabilidad de sus derechos y riesgos, que se incrementan durante las multicrisis. Las personas LGBTIQ+ denuncian tratos denigrantes y negación de servicios durante las emergencias.

Las mujeres y niñas con discapacidad afrontan formas únicas de VBG como resultado de su discapacidad¹⁰⁵ y las mujeres viviendo con el VIH sufren violaciones constantes de sus derechos sexuales y reproductivos, niveles altos de VBG y discriminación¹⁰⁶.

Igualmente, para las mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes existen barreras significativas para acceder a servicios de respuesta a la VBG y cuando acuden a estos, no son tratadas acorde a su origen étnico; en muchos casos son revictimizadas y discriminadas.

Proyección de las necesidades

Honduras atraviesa una crisis humanitaria para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ que se refleja en los datos estadísticos y en la calidad de vida. La VBG debe considerarse una urgencia a atender en sí misma.

El incremento de la inseguridad alimentaria, migración irregular, violencia estructural y desplazamiento forzado profundizarán el impacto diferenciado para los grupos en mayor riesgo de sufrir VBG. Si no se amplían los recursos financieros, humanos y técnicos para aumentar el número de servicios de respuesta a la

100 CARE-ONU Mujeres. Análisis Rápido de Género, Honduras 2021.

101 Estadísticas nacionales del SNE-911.

102 Informe de veeduría social sobre la calidad en los servicios de atención en las instituciones de acceso a la justicia. Intibucá, La Esperanza, Yamaranguila, Gracias y Distrito Central, CEM-H,2020.

103 Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS 2019).

104 Caracterización psicosocial de las mujeres víctimas de trata según las diferentes modalidades establecidas en la Ley contra la trata de personas en Honduras.

105 Diagnóstico sobre la discriminación y violencia contra las mujeres con discapacidad física-motora -AHLMYS Honduras, 2020.

106 Organización LLAVES, 2020. Investigación para la vinculación de la violencia contra las mujeres y niñas, femicidio, el VIH y el impacto de la COVID-19.

VBG, incluyendo acciones de prevención y mitigación de riesgos, las necesidades de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ continuarán incrementándose y las dinámicas de VBG seguirán perpetuándose. Ello aumentará las violaciones a sus derechos humanos, daños irreparables a la salud, mecanismos de afrontamiento y pérdida de vidas humanas, que se presenta también, pero no exclusivamente, en crecientes números de femicidios.

Es necesario generar una respuesta directa a las necesidades de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ garantizando que se trabaje efectivamente y desde todos los clústeres en la integración de la prevención de la VBG, la mitigación de los riesgos y el incremento de servicios multisectoriales de atención a las sobrevivientes de VBG, incluidas las personas sobrevivientes de EAS por personal humanitario, así como de los mecanismos de protección que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+ de manera regular y en medio de las emergencias y situaciones de crisis que golpean al país.

Panorama y población afectada

La estructural brecha de género sumada a la inseguridad alimentaria, la disminución en el acceso

a medios de vida, la interrupción de servicios especializados de respuesta, el desplazamiento forzado y la migración impactan de manera desproporcional en la calidad de vida y la garantía de los derechos de las mujeres y niñas. Los grupos históricamente marginados, como las personas LGBTIQ+, mujeres y niñas afrodescendientes e indígenas y con discapacidad, diariamente sufren los efectos rezagados de las crisis y los resultados invisibilizados dentro de las comunidades afectadas por las emergencias.

Monitoreo

El AdR de VBG continuará realizando de manera periódica, con la coordinación y apoyo de los socios, las Evaluaciones de Necesidades y Riesgos, así como los análisis de contexto cualitativos que permitan identificar brechas en la respuesta y barreras en el acceso a los servicios y la recuperación. Por otra parte, la difusión de herramientas como el Sistema de Alertas de VBG y el Análisis de Riesgos de VBG multidimensionales en conjunto con otros clústeres permiten continuar monitoreando las dinámicas y situaciones de VBG en los municipios y comunidades afectadas por las crisis humanitarias.

Indicadores

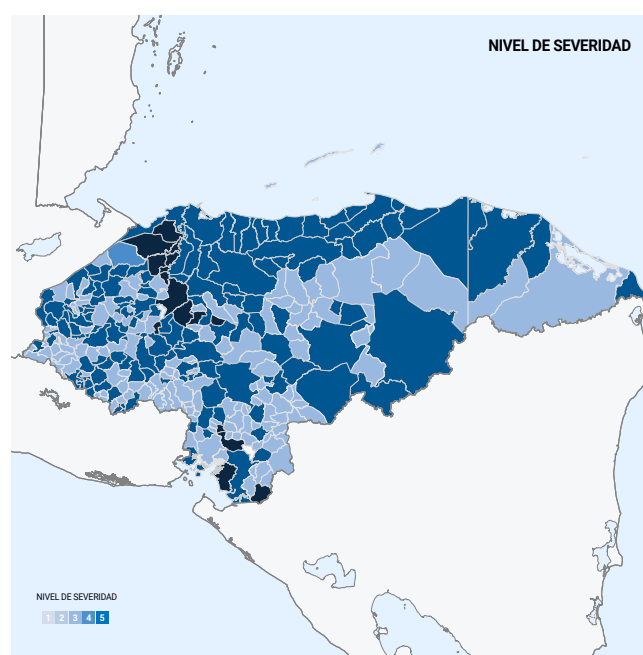
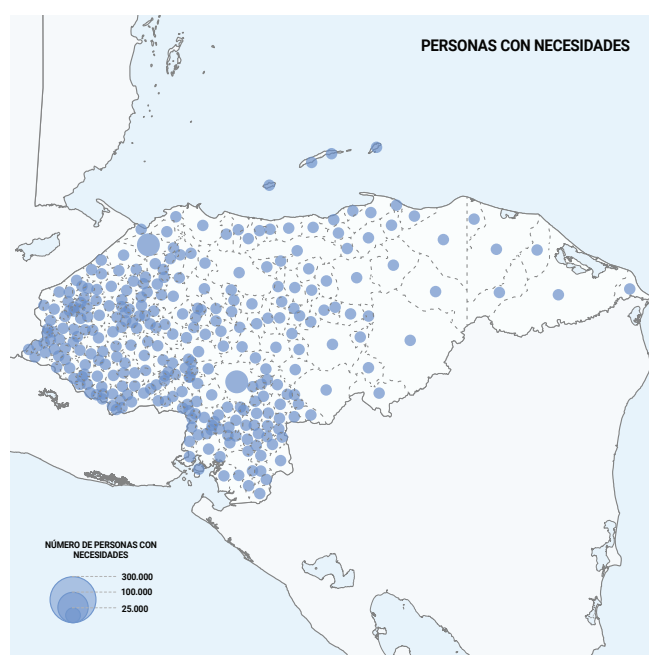
#	INDICADOR	CLÚSTER	FUENTE
01	Número de servicios básicos de respuesta a la VBG disponibles para sobrevivientes	VBG	OMM, Mapeo del SCVBG
02	Prevalencia de embarazos infantiles forzados	VBG	ENDESA, INE (proyección 2022)
03	Porcentaje de mujeres y niñas en riesgo de VBG	VBG	ENDESA, Observatorio de la pobreza, INE (proyección 2022)
04	Número de personas LGBTIQ+ que informan preocupaciones por daño, amenazas o discriminación en el área donde viven	VBG	CONADEH 2020 -2021

3.6

Clúster de Recuperación Temprana



PERSONAS EN NECESIDAD	MUJERES	HOMBRES	MUJERES CABEZA DE HOGAR	NNA	ADULTOS MAYORES
706K	60%	40%	115K	41%	8%



Más de 700.000 personas tienen necesidades humanitarias asociadas a la recuperación temprana de sus condiciones de vida causadas por la reducción de ingresos en hogares afectados por emergencias, la reducción de capacidad de cultivo de familias agricultoras y la incapacidad para recuperar su vivienda y hábitat. Las constantes emergencias asociadas a inundaciones y fenómenos de remoción en masa en el país, la dificultad para la recuperación ante los impactos de Eta e Iota y la COVID-19, sumado a problemas estructurales de pobreza, desigualdad y dificultad para ordenar y gobernar el territorio en zonas de riesgo mantienen la crisis humanitaria y las necesidades.

Análisis de necesidades humanitarias

El impacto de Eta e Iota y la COVID-19 dejaron 1,1 millones de personas con necesidades de recuperación temprana en 2021. La reducción de esta cifra a 706.000 para 2022 muestra un proceso de recuperación lento y graves dificultades de restauración de las condiciones de vida.

Estas cifras están estrechamente relacionadas con la pobreza. Según el INE, en 2021 el 54 por ciento de la población era pobre y se estima que la cifra habría alcanzado el 73 por ciento en 2022 como consecuencia de los impactos de Eta e Iota, la COVID-19 y el estancamiento de la económica mundial. Con un coeficiente de Gini de 0,55 (2022), Honduras se

ubica como una de las sociedades más desiguales de Latinoamérica (INE).

Aunque las necesidades de recuperación temprana se extienden por todo el país, la situación es especialmente grave en los departamentos del norte: Yoro, Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios y Copán (este último por las recientes afectaciones), así como en los departamentos del Paraíso y Choluteca, en el sur.

Las necesidades humanitarias incluyen apoyar a los hogares donde la agricultura es su medio de subsistencia y que no han logrado recuperar sus áreas de cultivo a causa de las constantes inundaciones, la pérdida de capital, fuerza laboral y el alza en los precios de los insumos. Según el Clúster de Recuperación Temprana, en 2022 unas 230.000 personas están afectadas directamente en los ingresos de sus familias por la disminución de sus cultivos en comparación con 2021. Esto también agrava la complicada situación de inseguridad alimentaria y nutricional del país.

Las mujeres, los jóvenes, los niños, las niñas, las y los adultos mayores y las personas con discapacidad ven exacerbadas sus vulnerabilidades en condiciones de desastre. Factores de riesgo como la feminización de la pobreza, el desempleo, la inseguridad alimentaria y la reducción del acceso a los servicios de salud afectan especialmente a las mujeres y las exponen a riesgos agravados y formas diversas de VBG, incluyendo la EAS por personal humanitario.

Según la Secretaría de Inclusión Social, en 2021, el 68 por ciento de los hogares con necesidades humanitarias por Eta e Iota estaban encabezados por mujeres. La pérdida de empleo es especialmente alta en mujeres como consecuencia de la COVID-19 y de las tormentas, disminuyendo los ingresos de sus hogares e incrementado el trabajo de cuidados y la explotación sexual. La violencia de género también incrementó en las contingencias y todavía no se establecen condiciones de seguridad, habitabilidad e ingresos para las mujeres en condición de vulnerabilidad socioeconómica.

Las necesidades de recuperación en población joven, adolescentes y en niñez se reflejan en la deserción o disminución de su calidad escolar, así como en el aumento del desempleo, que ha incrementado el trabajo infantil, la explotación sexual y la vinculación con maras, pandillas y actividades ilegales como mecanismos de afrontamiento negativos.

Proyección de necesidades

La disminución de personas con necesidades en comparación con 2021 responde al pico de afectación por las Tormentas Eta e Iota y no al mejoramiento de los procesos de recuperación temprana en los hogares. Por el contrario, la cifra actual, considerando que no ocurrieron grandes desastres en el último año, muestra un estancamiento en la restauración y mejoramiento de las condiciones de vida perdidas en las emergencias y proyecta un panorama donde gran parte de los hogares afectados por emergencias se convierten en hogares en condición de pobreza o pobreza extrema.

A ello se suma el incremento de las precipitaciones en agosto y septiembre de 2022 y los efectos de la Tormenta Tropical Julia en octubre, que ha afectado directamente a más de 188.000 personas. Si las condiciones de riesgo se mantienen, surgirán nuevas emergencias asociadas a inundaciones, fenómenos de remoción en masa y epidemias, aumentando el número de población afectada en 2022. Es muy posible que la población afectada por Eta e Iota y otras emergencias recientes sufra de manera acumulativa los impactos de estas nuevas emergencias, agravando su situación de necesidad.

Las acciones para la reducción del riesgo, la preparación para la emergencia y para la respuesta humanitaria pueden disminuir el impacto de la activa temporada de lluvias, pero no serán suficientes para evitar el incremento de familias afectadas.

Se espera un aumento de las personas afectadas por esta nueva emergencia dadas las lecciones aprendidas en emergencias anteriores. La experiencia de Eta e Iota expone que el modelo de coordinación de la respuesta fue ampliamente superado. Se estima que

437.000 personas fueron evacuadas antes y después del evento, (88 por ciento en Cortés). Sin embargo, 95 personas perdieron la vida y 8 desaparecieron, de las cuales 32 se encontraban en Cortés y 16 en Santa Bárbara, ambos en Valle de Sula.

Monitoreo

El Clúster de Recuperación Temprana monitorea el aumento de familias afectadas por emergencia, la recuperación de ingresos y condiciones de hábitat en hogares afectados, así como el avance de la recuperación en poblaciones priorizadas como mujeres y jóvenes a través de los siguientes indicadores:

- Tasa de pobreza y pobreza extrema (INE)
- Coeficiente de Gini (INE)
- Familias afectadas por emergencia (COPECO)
- Reducción de área de cultivos (FAO, UTSAN, INE)
- Tasa de empleo en mujeres y jóvenes (INE)

- Tasa de recurrencia de afectación por emergencia (Clúster RT)
- Índice de riesgo y capacidades de recuperación (INFORM, COPECO)
- Número de viviendas afectadas por emergencias (COPECO)
- Infraestructura social afectada por emergencias (FHIS)

Se utilizarán los reportes EDAN desarrollados por cada municipio en coordinación con la AMHON para desarrollar un análisis territorial detallado de las afectaciones y de las necesidades de recuperación. El clúster promoverá la evaluación de necesidades de recuperación temprana y su impacto humano.

Para aumentar la eficiencia del monitoreo, el clúster realizará una focalización territorial, sectorial y poblacional, de acuerdo con los impactos de las emergencias futuras y las zonas con mayores necesidades reportadas en este análisis.

Indicadores

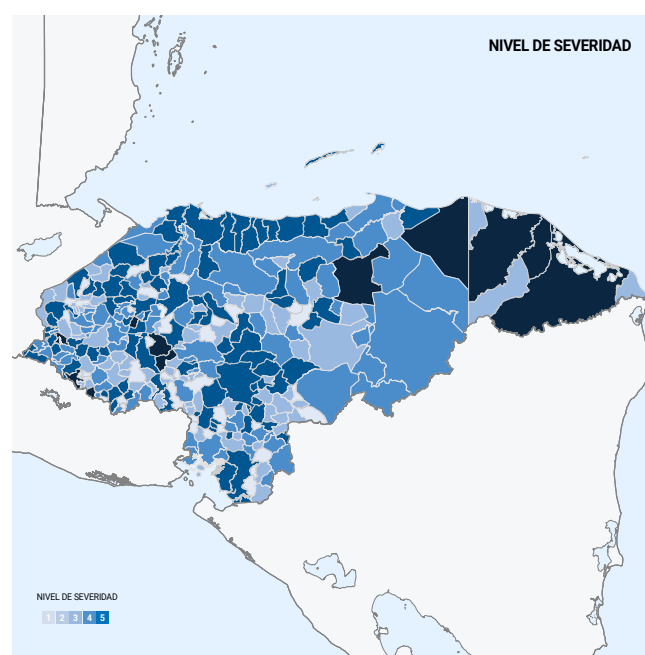
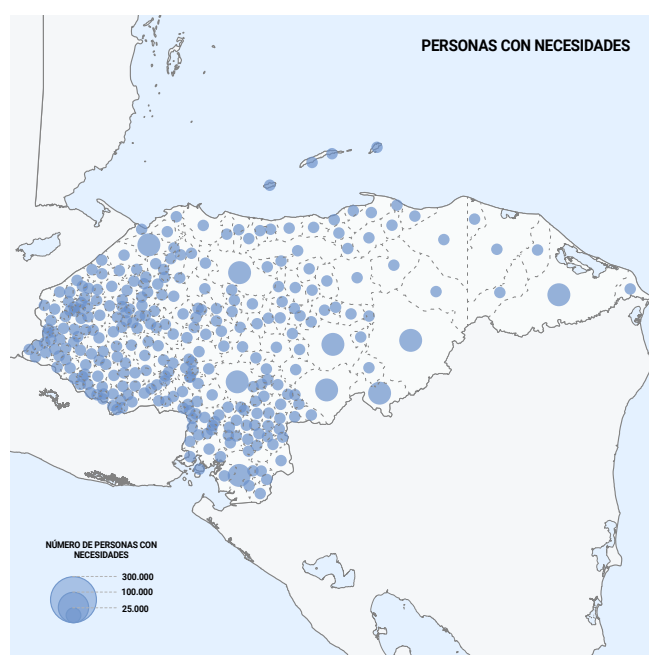
#	INDICADOR	CLÚSTER	FUENTE
01	Número de personas con reducción de acceso a sus medios de subsistencia	Recuperación Temprana, Seguridad Alimentaria.	FAO, PMA, UTSAN, INE
02	Número de personas con necesidad de apoyo en sus ingresos	Recuperación Temprana	SEDIS, INFORM, COPECO, CEPREDENAC, INE

3.7

Clúster de Salud



PERSONAS EN NECESIDAD	MUJERES	NNA	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MUJERES Y HOMBRES MAYORES DE 60 AÑOS
1,2M	50%	41%	39K	90K



El sistema sanitario en Honduras es uno de los sectores con media y alta vulnerabilidad estructural frente a las diferentes amenazas naturales y antrópicas y es susceptible de experimentar crisis y desastres, así como de requerir asistencia humanitaria en situaciones de emergencias. El Clúster de Salud es prioritario para asegurar la recuperación, restablecimiento y bienestar de las poblaciones con necesidades humanitarias, en especial las de mayor vulnerabilidad, incluyendo las personas sobrevivientes de VBG.

Análisis de las necesidades humanitarias

El país enfrenta amenazas naturales de diversa magnitud y frecuencia ocasionadas por tormentas

tropicales, huracanes, desbordamientos de ríos, sequías y temblores que afectan a las poblaciones, sus estructuras y actividades, principalmente en los departamentos y municipios más vulnerables de las regiones atlántica, centro y occidente. A esto se suma la vulnerabilidad económica y social acumulada en las últimas décadas que han incidido en el desarrollo humano y en el incremento de la demanda de asistencia humanitaria en salud en situaciones de emergencias y desastres.

Desde 2020, el país ha sufrido simultáneamente la pandemia de COVID-19 (más de 456.391 casos acumulados y 10.993 muertes acumuladas a 26 de septiembre de 2022, Semana Epidemiológica 38); la epidemia de dengue con 18.499 casos acumulados

hasta la SE 36 de 2022, con un aumento del 128 por ciento de casos en relación con la misma SE de 2021 (8.099 casos); y un brote de malaria en el departamento de Gracias a Dios desde 2020 (858 casos), 2021 (1.598 casos) y 2022 (2.618 casos).

Se estima que la mortalidad materna en 2021 se duplicó a 125 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en relación al 2020. El porcentaje de niñas y adolescentes embarazadas en el país es del 22.9 por ciento. El promedio de hijos por mujer es de 2.6 (1.4 promedio de hijos son de mujeres con mejor percentil de riqueza y mayor nivel educativo; en contraste con 4 hijos promedio en mujeres con limitado acceso a educación y el quintil de menor riqueza). La prevalencia de métodos anticonceptivos en el país es del 70 por ciento. En contexto de emergencias, las necesidades insatisfechas se incrementan llegando a un 20 por ciento. Existen daños significativos en la infraestructura de la red de servicios de salud sobre todo en municipios afectados por inundaciones. Aún existen barreras para acceder a los servicios de atención y manejo clínico para personas sobrevivientes de violencia sexual.

Entre 2014 y 2022, se registran 227.279 personas extranjeras ingresando por puntos irregulares; de estos, el 44 por ciento (101.392) fueron registrados entre enero y septiembre de 2022 (INM), denotando un aumento significativo en el flujo de movimientos mixtos en tránsito y en consecuencia la exigencia en la provisión de servicios de salud para garantizar la protección de los derechos de estas poblaciones durante su permanencia en el país.

La discontinuación de servicios esenciales crea un riesgo adicional para las personas viviendo con el VIH. Las bajas coberturas de inmunización en los niños y niñas incrementan el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas inmunoprevenibles en las poblaciones de mayor riesgo.

La salud mental y el apoyo psicosocial también son necesarios con urgencia para ayudar a las poblaciones afectadas por las distintas crisis a hacer frente a las situaciones adversas que enfrentan.

Proyección de las necesidades

En 2023, la probabilidad de que las necesidades humanitarias en salud aumenten es alta debido a la continuación de la pandemia de COVID-19, la epidemia de dengue y del brote de malaria, así como el aumento en los movimientos mixtos y las amenazas naturales que afectan el país con frecuencia a lo largo del año.

Es de esperar que estas amenazas sigan teniendo impacto en la capacidad de respuesta del Clúster Salud, de por sí ya debilitado y sobrecargado, exacerbándose la escasez de recursos esenciales y las limitaciones que padecen las poblaciones vulnerables para acceder a servicios de salud, siendo imperativo continuar brindando asistencia humanitaria para fortalecer las capacidades de respuesta a las emergencias y desastres.

Adicionalmente, en situaciones de emergencias también se limita la continuidad de los servicios de SSR, por lo que desde el Área de Responsabilidad de Salud Sexual y Reproductiva se establecen dos prioridades:

- Salvar vidas de mujeres en edad fértil (MEF), incluidas las adolescentes y embarazadas garantizando el acceso a servicios esenciales y de calidad para la atención prenatal, complicaciones y emergencias obstétricas, atención de partos, manejo clínico de violencia sexual y planificación familiar (PF).
- Fortalecer la capacidad de la Secretaría de Salud para garantizar la continuidad de los servicios esenciales de SSR que salvan vidas, incluida la salud materna, neonatal y la planificación familiar.

Indicadores de cierre – determinantes del PIN

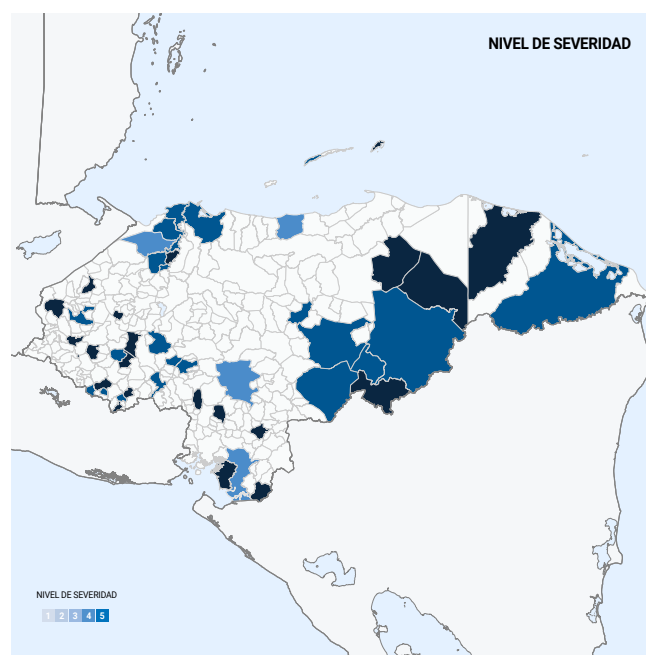
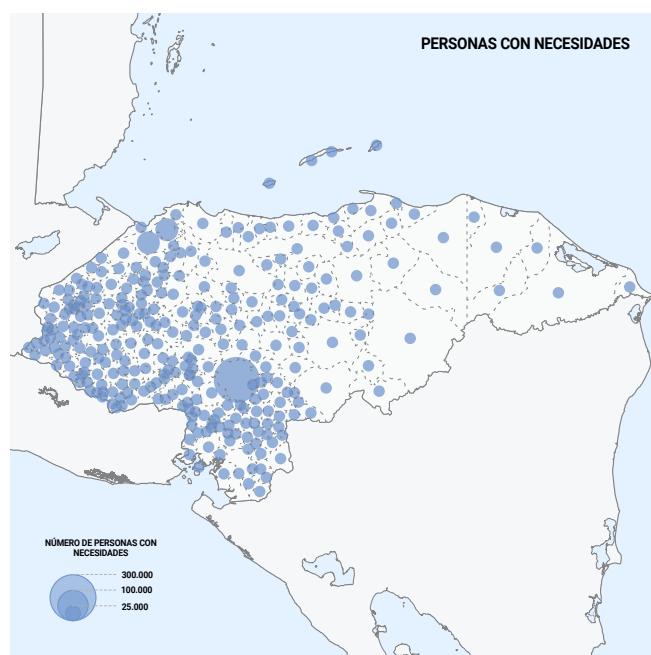
#	INDICADOR	CLÚSTER	FUENTE
01	Cobertura de DTC3 (DPT3 / PENTA3) en < 1 año, por unidad administrativa	Salud	Programa Ampliado de Inmunización/Secretaría de Salud
02	Porcentaje de niños de seis meses a 18 meses que han sido vacunados contra el sarampión	Salud	Programa Ampliado de Inmunización/Secretaría de Salud
03	Porcentaje de la población que puede acceder a la atención sanitaria primaria a menos de una hora a pie de las viviendas	Salud	Programa Ampliado de Inmunización/Secretaría de Salud

3.7.1

Área de Responsabilidad Salud Sexual y Reproductiva



PERSONAS EN NECESIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	POBLACIÓN INDÍGENA Y AFRODESCENDIENTE	MUJERES
437K	5%	8%	100%



Panorama y población afectada

Del total de personas con necesidades humanitarias proyectadas para el Clúster Salud (1,2M), se identificaron 385.000 en 31 municipios de 12 departamentos con alta exposición y vulnerabilidad a fenómenos naturales, a bajas coberturas de vacunación, a un limitado acceso a servicios de salud y al dengue o la malaria, con presencia importante de poblaciones étnicas y personas refugiadas y migrantes en movimientos mixtos transitando por el país.

En el AdR de SSR, se estiman 437.000 personas con necesidades en 47 municipios de 12 departamentos:

- 141.000 embarazadas (según el MISP, el 12 por ciento de las MEF en situaciones de emergencia estarán embarazadas).
- 47.000 partos (según el MISP, el 4 por ciento de las MEF en situaciones de emergencia necesitarán atención de parto).
- 23.000 casos de violación sexual (según el MISP, el 2 por ciento de la población sexualmente activa).
- 110.000 adolescentes hombres.
- 114.000 adolescentes mujeres.

Monitoreo

El monitoreo de los indicadores se realizará por el Clúster de Salud y su AdR de SSR, que tienen entre sus funciones la coordinación, planificación y seguimiento de actividades con los socios de acuerdo con los mandatos de la Red Humanitaria de Honduras. Además, el Clúster de Salud gestiona la información priorizada para la respuesta y

preparación a las emergencias y desastres para la toma de decisiones, así como para la formulación y seguimiento de proyectos humanitarios. Asimismo, participan en evaluaciones de daños y análisis de necesidades humanitarias que sirven de medio para el intercambio de datos e información relevante entre los socios y para la implementación de acciones de comunicación del riesgo.

Indicadores salud sexual reproductiva

#	INDICADOR	CLÚSTER	FUENTE
01	Porcentaje de establecimientos de salud de atención primaria en salud y hospitales que dan MCVS incluyendo PPE y/o anticoncepción	SSR	Secretaría de Salud/MISP Calculator
02	Número de mujeres en edad fértil a quienes se les provee de un método anticonceptivo de larga duración (DIU, implante hormonal) post evento obstétrico en los hospitales y servicios maternos del país	SSR	Secretaría de Salud/MISP Calculator

3.8

Clúster de Seguridad Alimentaria y Nutrición



PERSONAS EN NECESIDAD

2,6M

MUJERES MAYORES
DE 18 AÑOS

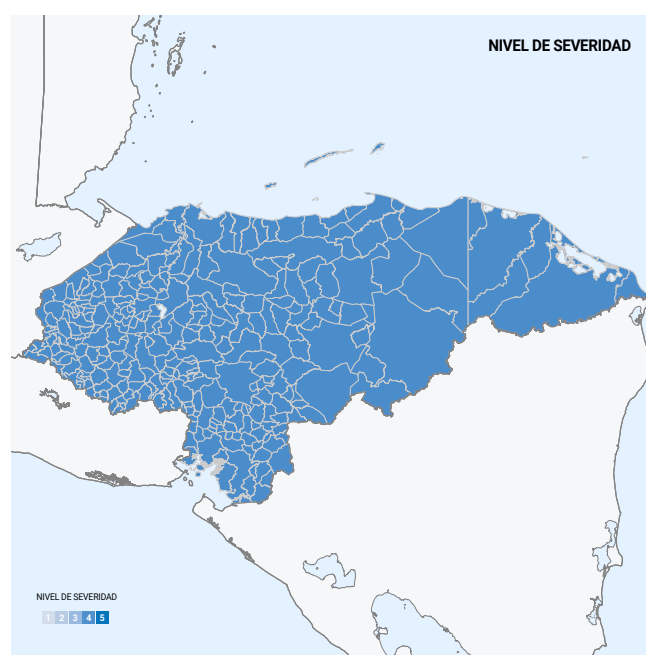
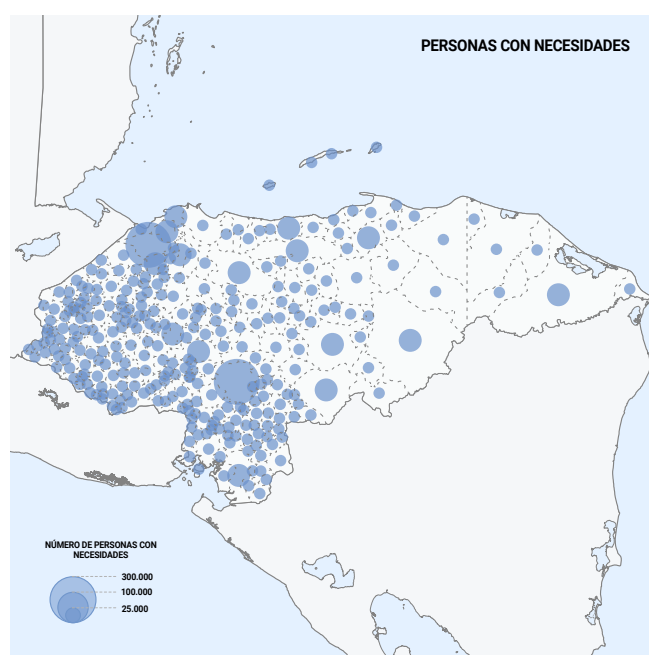
880K

NNA

965K

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

68K



Análisis de las necesidades humanitarias

En 2022, para el periodo de hambre estacional (de junio a agosto), 2,6 millones de personas están en Crisis o Emergencia de inseguridad alimentaria aguda (Fases 3 o 4 CIF). Para esta proyección de 2022, el análisis CIF consideró el incremento en los precios de alimentos y el agotamiento estacional de las reservas de granos básicos, pero no contempló el impacto significativo de la crisis mundial en el alza de precios de los combustibles y cadenas de suministros.

Se espera que la tasa de inflación se mantenga alta durante el período de las perspectivas debido a los efectos persistentes de los choques y la incertidumbre de los mercados mundiales. Los datos recolectados por la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y

Nutricional (UTSAN) en abril de 2022 indican que para el 97 por ciento de los encuestados la principal fuente de acceso a los alimentos era a través de la compra y que el 82 por ciento de los ingresos de los hogares provenían principalmente del empleo informal. El 66 por ciento de los hogares encuestados indicó que sus ingresos no son suficientes para cubrir los costos de la canasta básica, principalmente por la pérdida del valor adquisitivo e incremento de precios por la inflación interna y externa.

Las fuertes lluvias empezaron a afectar al país en agosto de 2022, lo que provocó graves consecuencias en el país y afectó a la población principalmente en la parte occidental del norte de Honduras (Atlántida, Choluteca, Colón, Cortés, Valle, Gracias a Dios y

Santa Bárbara). Las lluvias excesivas continuaron en septiembre, lo que llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia nacional debido a las inundaciones y los deslizamientos de tierra. Unas semanas más tarde, las lluvias asociadas al Huracán Ian siguieron empeorando la situación, dejando zonas del país completamente inundadas e inaccesibles. El 10 de octubre, cuando los suelos ya estaban saturados y otras zonas seguían inundadas, la Tormenta Tropical Julia azotó el país.

Como consecuencia, los hogares más vulnerables de las zonas afectadas se vieron gravemente golpeados por las inundaciones perdiendo sus activos, reservas alimentarias y pertenencias, lo que les dejó en una situación de necesidad urgente de alimentos. Estos hogares se enfrentan a una situación crítica: no tienen nada que comer o no tienen acceso a los alimentos. Su dignidad se ve gravemente afectada. Además, el exceso de lluvias ha provocado una importante pérdida de cultivos; según COPECO, unas 97.300 hectáreas de tierra se han visto afectadas. Esto, sumado a los altos costos de los insumos, ha provocado que los rendimientos sean menores al promedio y que la demanda de mano de obra agrícola disminuya, lo que a su vez se traducirá en menores ingresos para los medianos y pequeños productores y en insuficientes reservas de granos en los hogares, aumentando la inseguridad alimentaria.

Este panorama crítico afecta de manera diferenciada a las mujeres y niñas, profundizando el contexto de desigualdad y siendo un impulsor para mecanismos de afrontamiento negativos, como sexo por supervivencia y uniones infantiles tempranas forzadas. A la vez, las mujeres indígenas y de zonas rurales se enfrentan a la pérdida de recursos, cultivos, animales domésticos, exacerbando su situación de vulnerabilidad y los riesgos de VBG.

Nutrición

En este contexto de inseguridad alimentaria y medios de vida afectados, el estado nutricional de los grupos más vulnerables (niños y niñas menores de cinco años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia materna) corre mayor riesgo de deteriorarse.

Según los datos de la última ENDESA, a nivel nacional, el 18.7 por ciento de los niños y niñas padecen desnutrición crónica (23.2 por ciento para el área rural). El 1.9 por ciento de los menores de cinco años padecen de desnutrición aguda, lo que aumenta el riesgo de un sistema inmunitario débil con mayor predisposición de contraer infecciones y morir. Si sobreviven, están más expuestos al retraso del crecimiento y a sufrir retrasos en el desarrollo a largo plazo.

La desnutrición, incluida la restricción en el crecimiento fetal, la lactancia materna subóptima, el retraso en el crecimiento, la desnutrición aguda y la carencia de vitamina A y zinc provocan el 45 por ciento de las muertes infantiles (3,1 millones de muertes al año).

Proyección de las necesidades

Según los datos de campo de UTSAN, PMA, FAO y Caritas, se espera que más de 3,2 millones de personas enfrenten Crisis o niveles peores de inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 o peor CIF) a partir de octubre de 2022 y hasta junio de 2023, lo que representa un fuerte aumento de 0,5 millones en comparación con el mismo período del año pasado.

De los 18 departamentos, 17 se clasificaron en Fase 3, excepto Cortés (Fase 2 CIF). Las lluvias de septiembre de 2022 afectaron drásticamente los cultivos en las zonas norte y occidente, lo que incrementaría el número de personas en Crisis o peor (Fase 3 o peor CIF). Los departamentos con mayor severidad son: Gracias a Dios (43 por ciento), Lempira (32 por ciento) y La Paz (30 por ciento); estos dos últimos son productores de granos básicos de subsistencia y cultivo de café.

Los hogares que no pudieron dedicarse al trabajo agrícola o cosechar sus cultivos vieron agudizada su inseguridad alimentaria por la falta de empleo, el agotamiento de las reservas, el alza de los precios de alimentos y la crisis en la cadena de suministros a nivel internacional, entre otros factores. El período de hambre estacional podría acentuar el uso de estrategias de afrontamiento de crisis y emergencia en

los hogares afectados. El incremento de los precios de los insumos productivos (fertilizantes principalmente) repercute negativamente en los procesos productivos y se prevé la reducción de áreas de siembra de granos básicos en los próximos ciclos.

Los hogares urbanos de periferia, a raíz de los confinamientos y las recientes inundaciones, han visto mermados sus ingresos. Además, se enfrentan a tasas de inflación acumulada del 6.57 por ciento e interanual del 10.22 por ciento a consecuencia de los altos precios de los combustibles y el conflicto entre Ucrania y Rusia, que han incrementado a niveles exacerbados los costos de los alimentos. El agotamiento de reservas en el mercado afecta principalmente a hogares que obtienen sus alimentos por medio de compra.

En contextos de emergencias como las sequías, tormentas y la crisis de movilidad humana y desplazamiento, estas situaciones pueden agravarse e impactar el estado nutricional de los niños y niñas menores de cinco años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia materna.

Monitoreo

Junto con las instituciones gubernamentales como UTSAN y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Clúster SAN realizará un seguimiento periódico a los acontecimientos que afectan al país para identificar y monitorear las situaciones que podrían interrumpir el funcionamiento natural entre los cinco pilares de la seguridad alimentaria con el propósito de adelantarse a los impactos no deseados en la población que puede ser sujeto de inseguridad alimentaria.

Así mismo, para el Clúster SAN se seguirán monitoreando las acciones reportadas en la plataforma 345W de OCHA.

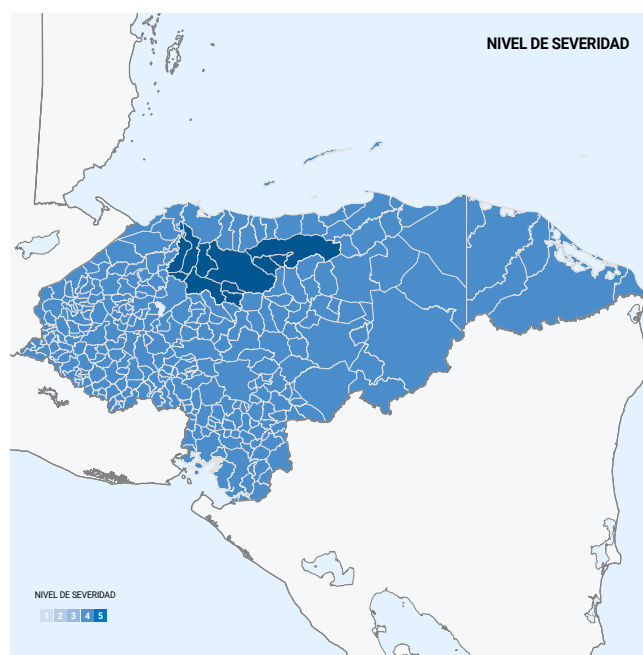
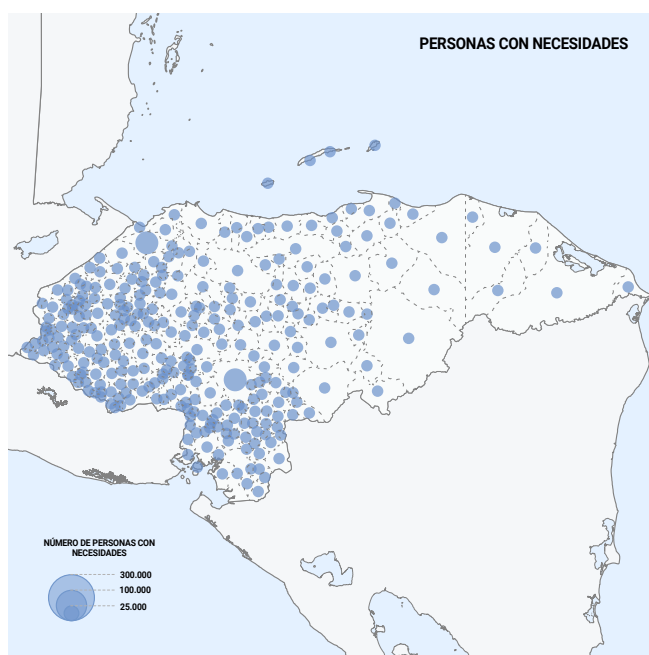
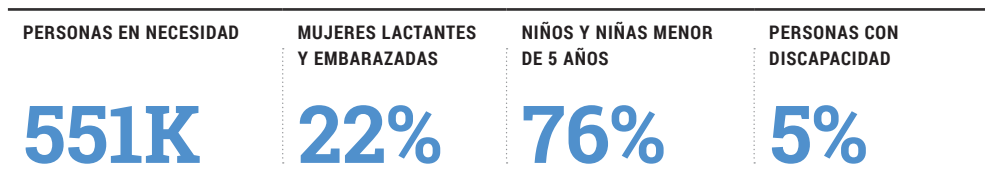
Adicionalmente, en conjunto con el Gobierno, se establecerá un plan de monitoreo de la seguridad alimentaria planificando al menos dos ejercicios de Clasificación de Seguridad Alimentaria (CIF) que permitan ajustar y evaluar el avance de los proyectos vinculados a seguridad alimentaria.

Análisis de indicadores

#	INDICADOR	CLÚSTER	FUENTE
01	Clasificación integrada en Fases (CIF)	SAN	Gobierno de Honduras
02	Precio al consumidor y Canasta Básica	SAN	Banco Central de Honduras
03	Fragilidad Económica	SAN	PMA ICA (Integrated Context Analysis)
04	Estrategias de afrontamiento	SAN	PMA-FAO-UTSAN (Unidad Técnica de Seguridad)
05	Factores agravantes (efectos Guerra , TT Ian , Julia, inflación externa/interna)	SAN	PMA-FAO

3.8.1

Área de Responsabilidad Nutrición



El contexto de la seguridad alimentaria y nutricional podría verse afectado en gran manera por las dificultades en el acceso a los servicios de salud y nutrición, incluyendo la suplementación con micronutrientes, falta de servicios de agua y saneamiento, bajas fuentes económicas para la compra de alimentos, el aumento de la tasa de desempleo y el aumento del endeudamiento de los hogares, especialmente los afectados por las diferentes emergencias suscitadas en el país. Con las crisis humanitarias prolongadas, la prevalencia de la malnutrición en todas sus formas sigue siendo elevada. Los niños y niñas que padecen desnutrición aguda en los dos primeros años de vida corren mayor riesgo de morir que los afectados mayores de dos años.

Análisis de las necesidades humanitarias

Según la última ENDESA, a nivel nacional el 18.7 por ciento de los niños y niñas padecen de desnutrición crónica (23.2 por ciento en el área rural); el 1.9 por ciento de los menores de cinco años padecen de desnutrición aguda; el 51.4 por ciento de los recién nacidos recibieron lactancia en la primera hora de vida y solo el 30.2 por ciento de niños y niñas de cero a cinco meses les fue proporcionada la lactancia de forma exclusiva.

Los menores de seis meses que recibieron alguna vez lactancia materna sin otros líquidos no llegaron a recibir ni un mes completo, aumentando el riesgo de mortalidad en los dos primeros años de vida (la OMS recomienda que la lactancia materna exclusiva dure como mínimo seis meses).

El 36.3 por ciento de los menores de cinco años padecen anemia (36.8 por ciento en el área rural).

Todo lo anterior aumenta el riesgo de un sistema inmunitario débil con mayor predisposición a contraer infecciones y morir. Si los niños y niñas sobreviven, están más expuestos al retraso del crecimiento y a sufrir retrasos en el desarrollo a largo plazo.

Por otro lado, en el contexto de país, la alimentación y el cuidado del contexto familiar está asignada a la mujer. Según un estudio realizado a la población indígena y afro hondureña (Universidad Autónoma de Honduras, 2018), si bien existen brechas socioeconómicas con relación al acceso de servicios básicos, el modelo de regresión logística establece que existe correlación entre la desnutrición crónica y las variables anatómicas y socioeconómicas de la madre. Condiciones como el nivel educativo, el quintil de riqueza y la estatura de la madre son determinantes muy robustos relacionados a la desnutrición en niñas y niños¹⁰⁷. Las mujeres enfrentan severas afectaciones a su salud nutricional al ser las responsables del trabajo de cuidados en el hogar; son el miembro de la familia que se alimenta en menor medida o con menos nutrientes necesarios y en los casos de pobreza extrema, las mujeres sacrifican su alimentación para que sus hijas e hijos puedan comer.

El limitante identificado como grupo técnico de nutrición es la falta de información actualizada con relación a la situación nutricional en el país. Hasta el momento se cuenta con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en 2021. Además, es necesaria la actualización de las guías, protocolos y lineamientos en materia de nutrición.

Proyección de las necesidades

Las emergencias derivadas de las sequías, tormentas y la crisis de movilidad humana y desplazamiento pueden agravar e impactar en el estado nutricional de

los grupos de población más vulnerables. Se estima que entre 2022 y 2023, 545.000 personas entre niños y niñas menores de cinco años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia materna presentarán algún problema de malnutrición, incluyendo un incremento en los casos de desnutrición aguda, así como un aumento en los casos de anemia por la poca disponibilidad de suplementos por micronutrientes, ya que los establecimientos de salud pública no disponen de una cantidad suficiente de estos suplementos para niños, niñas, embarazadas y lactantes del país.

Dado el panorama presente y lo cambiante de la situación humanitaria, para el grupo de nutrición es importante considerar las acciones relacionadas al mismo, incluyendo: el apoyo, la promoción y protección de la lactancia materna; la suplementación con micronutrientes durante el embarazo y lactancia y en menores de cinco años; el control de la malnutrición aguda moderada y malnutrición aguda severa; la alimentación complementaria adecuada; así como abogar por la actualización de las guías, protocolos y lineamientos en contextos de emergencia.

Monitoreo

El monitoreo de las acciones e identificación de brechas se realizará de manera trimestral para identificar ajustes posibles en la intervención a partir del reporte a la plataforma 345W. El reporte sectorial se actualizará en las plataformas previstas por OCHA, el Clúster Global de Seguridad Alimentaria y el Clúster Global de Nutrición. Los fondos se monitorean con el reporte en la plataforma FTS.

El Clúster Global de Nutrición promoverá entre los socios la realización de la Encuesta de Monitoreo al desempeño de la Coordinación del Clúster (CCPM) que permitirá identificar las brechas y oportunidades en la coordinación.

107 Universidad Nacional Autónoma de Honduras <https://mdd.unah.edu.hn>

Necesidades previstas por indicador (2022-2023)

Miles de personas(K)

	PIN	FACTORES ASOCIADOS	GRUPOS MÁS VULNERABLES
% prevalencia de lactancia materna exclusiva en niños/as entre 0 y 5 meses	122K	Agravante ETA e IOTA, COVID-19, seguridad alimentaria	NN entre 0 y 5 meses
Diversidad mínima de la dieta en niños/as entre 6 y 23 meses	215K	Agravante ETA e IOTA, COVID-19, seguridad alimentaria, sequía	NN entre 6 y 23 meses
% prevalencia de retraso del crecimiento (TEZ) en niños/as entre 0 y 59 meses	177K	Agravante ETA e IOTA, COVID-19, seguridad alimentaria	NN entre 0 y 59 meses con retraso de crecimiento
% prevalencia de sobrepeso en niños/as entre 0 y 59 meses	45K	Agravante ETA e IOTA, COVID-19, seguridad alimentaria	NN entre 0 y 59 meses con sobrepeso
% prevalencia de anemia en niños/as entre 6 y 59 meses	298K	Agravante ETA e IOTA, COVID-19, seguridad alimentaria	NN entre 6 y 59 meses con anemia
Prevalencia DAG en NNA <5 años según PTZ	49K	Agravante ETA e IOTA, COVID-19, seguridad alimentaria	NN con desnutrición aguda general
Prevalencia DAS en NNA <5 años según PTZ	1,2K	Agravante ETA e IOTA, COVID-19, seguridad alimentaria	NN con desnutrición aguda severa
Prevalencia de anemia en mujeres embarazadas de entre 15-49 años	58K	Agravante ETA e IOTA, COVID-19, seguridad alimentaria	MEL con anemia
Prevalencia de anemia en mujeres lactantes de entre 15-49 años	60K	Agravante ETA e IOTA, COVID-19, seguridad alimentaria	MEL con anemia

Indicadores para análisis de severidades

#	INDICADOR	FUENTE
01	% prevalencia de lactancia materna exclusiva en niños/as de entre 0 y 5 meses	(Tabla 7.5) ENDESA/MICS 2019
02	Diversidad mínima de la dieta en niños/as de entre 6 y 23 meses	(Tabla 7.7) ENDESA/MICS 2019
03	% prevalencia de retraso del crecimiento (TEZ) en niños/as de entre 0 y 59 meses	(Tabla 8.1) ENDESA/MICS 2019
04	% prevalencia de sobrepeso en niños/as de entre 0 y 59 meses	(Tabla 8.1) ENDESA/MICS 2019
05	% prevalencia de anemia en niños/as de entre 6 y 59 meses	(Tabla 12.1) ENDESA/MICS 2019

Personas en necesidad
(2022-2023)

EDAD	PERSONAS EN NECESIDAD	PORCENTAJE
Menores de 5 años	420K	76% <div></div>
Mujeres embarazadas	58K	10,5% <div></div>
Mujeres lactantes	60K	11% <div></div>
Flujos mixtos: menores de 5 años	12K	2,1% <div></div>
Flujos mixtos: mujeres embarazas y lactantes	2K	0,4% <div></div>
Total	551K	
Con discapacidad (% del total)	27K	5% <div></div>

Parte 4

Anexos

TROJES, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, HONDURAS

Foto: OCHA / Vincent Tremeau



4.1

Fuentes de datos

Tipo de evaluación por clúster

CLÚSTER	TIPO DE EVALUACIÓN	NÚMERO	SOCIOS	LÍDER
Seguridad Alimentaria	Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF)	90	15	PMA

Clúster de Protección

La principal fuente de información para el análisis de las necesidades humanitarias es el Análisis de Protección que lideró el Clúster de Protección en conjunto con las Áreas de Responsabilidad de VBG y de Protección de la Niñez, con el propósito de analizar el contexto e identificar los principales riesgos que enfrenta la población en Honduras a nivel nacional. [Honduras Protection Analysis Update](#). Este documento se sustentó en los análisis territoriales y de otras fuentes primarias que permitieron complementar la información reportada.

A continuación, se detallan las principales fuentes consultadas:

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Situación de los Derechos Humanos 2021. 4 de marzo de 2022. [OACNUDH. Informe 2022](#)
- Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Boletín bimestral: conflictividad en Honduras. Enero-febrero 2022. Transición política con transición de país. Marzo 2022 [ASJ. Boletín En-Fe 2022](#)
- Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Informe: "Conflicto y violencia política en las elecciones de Honduras, 2021. Causas, detonantes y oportunidades de mitigación". Noviembre 2021. [ASJ. Informe Conflicto Electoral](#)
- Casa Alianza Honduras. Junio 2022. [CASA ALIANZA. Informe mensual](#)
- Centro de Derechos de Mujeres (CDM). (s. f.) Observatorio de Violencias Contra las Mujeres 2022. [CDM. Observatorio 2022](#)
- Centro de Estudios de la Mujer - Honduras. CEM - H. Julio 2020. Informe de veeduría social sobre la calidad en los servicios de atención en las instituciones de acceso a la justicia Intibucá. [CEM. Informe de Veeduría Social](#)
- CEPAL. Observatorio de Igualdad de Género. Feminicidio. 22 de abril de 2022. <https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe Anual 2021, capítulo V. Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes de país o temáticos. Honduras. [CIDH. Informe 2021](#)
- Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones

- Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Joint IDP Profiling Service (JIPS). Estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno por Violencia en Honduras 2004-2018. Diciembre 2019. [CIPPDV. Caracterización 2004-2018](#)
- Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Informe Especial. “Situación del Desplazamiento Forzado Interno en Honduras entre 2016 y 2021”. [CONADEH. Informe Especial](#)
 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH). “La extorsión, un detonante del desplazamiento forzado de personas en Honduras”. [CONADEH. Informe sobre Extorsión](#)
 - Consejo Nacional Electoral, Honduras. Noviembre 2021. Elecciones Generales 2021, 28 de noviembre - Escrutinio General. Consejo Nacional Electoral. [CNE. Resultados Elecciones](#)
 - Consejo Noruego para los Refugiados. “Ningún lugar es seguro. Derechos de vivienda, tierra y propiedad para las personas afectadas por el desplazamiento en Honduras”. Mayo 2022.
 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, ente rector en materia de niñez y familia en Honduras, 22 de diciembre de 2021. [Mapeo sobre IRCAS a nivel nacional](#)
 - Instituto Nacional de Estadística. Julio 2021. LXXII Encuesta permanente de propósitos múltiples. [INE Pobreza](#)
 - Instituto Nacional de Estadística. Marzo 2021. “Situación de la Mujer Hondureña en el Marco del Día Internacional de la Mujer”, pág. 2. [INE. Situación de la Mujer Hondureña](#)
 - Instituto Nacional de Migración. Hondureños retornados. <http://inm.gob.hn/estadisticas.html>
 - Insight Crime. Febrero 2022. Balance de InSight Crime de los homicidios en 2021. [INSIGHTCRIME. Homicidios 2021](#)
 - Informe del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). [Observatorio Nacional de la Violencia \(ONV\)](#)
 - Naciones Unidas. Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Honduras 2022-2026. [NACIONES UNIDAS. Marco de Cooperación](#)
 - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe de Desarrollo Humano. Honduras. Estado de Derecho, fundamento de la transformación 2022 -2030. Julio 2022. [IDH Honduras](#)
 - Red Lésbica - Catrachas. Informe Sobre Muertes Violentas de personas LGBTI 2009–2020. [CATRACHAS. Muertes violentas](#)
 - REDLAC. Boletín 17. Crisis de Protección en el Norte de Centroamérica, México y Panamá. Datos claves de octubre a diciembre 2021. [REDLAC. Boletín 17](#)
 - Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) [SEPOL](#)
 - Subsecretaría de Seguridad en Prevención, Secretaría de Seguridad. Tegucigalpa, 2019 [Honduras Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes, 2017](#)

Área de Responsabilidad de Protección de la Infancia

El Análisis de Necesidades Humanitarias de Protección de la Infancia se sustenta en diversas fuentes de información, investigación y análisis procuradas por instituciones del Estado y organismos internacionales. A la vez, la información es alimentada con la Actualización del Análisis de Protección (PAU) e impulsada por el Clúster de Protección junto con las AdR de VBG y Protección de la Niñez. El proceso se

llevó a cabo en una consulta directa con los actores humanitarios y socios de los tres sectores, así como en una revisión de información secundaria.

El marco referencial del actual análisis incluye:

- Informe de Progreso Educativo HONDURAS 2022
- Datos sobre el trabajo infantil peligroso ENDESA 2019.
- Informes del Observatorio de Derechos de Casa Alianza Honduras. Junio 2022.
- Datos registrados a partir del informe remitido por la Secretaría de Seguridad sobre denuncias de delitos contra la niñez, incluyendo: homicidio, suicidio, asesinatos, abandono, negligencia, maltrato, acoso sexual, abuso sexual, explotación sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, proxenetismo, incesto, pornografía, secuestro, trata, tortura, violencia intrafamiliar y otras formas de violencia.
- Informe del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
- Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes, Subsecretaría de Seguridad en Prevención, Secretaría de Seguridad. Honduras.
- Informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la tasa de embarazo adolescente en Honduras.
- Mapeo sobre Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo (IRCAS) a nivel nacional.

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, ente rector en materia de niñez y familia en Honduras.

- Informes sobre niños y niñas retornados o en tránsito por Honduras. Instituto Nacional de Migración y DINAF.

Clúster de Alojamiento de Emergencia

A continuación, se detallan los datos utilizados por el Clúster de Alojamiento de Emergencias para sus dos indicadores:

Indicador 1: Hogares cuya vivienda hubiera sido destruida o severamente dañada por eventos geo-climáticos en los últimos dos años.

Para el cálculo de severidad se aplicaron cuatro criterios: (1) vulnerabilidad socioeconómica; (2) vulnerabilidad a riesgos de desastres por fenómenos geo-climáticos (inundaciones, deslizamientos y sequías); (3) ubicación en municipios que no recibieron ningún tipo de asistencia después de Eta e Iota o donde la asistencia no superó el 41 por ciento; (4) municipios afectados por inundaciones y deslizamientos a causa de las intensas lluvias en septiembre de 2022. En consecuencia, se llegó a un número de 92.512 personas que se encuentran actualmente con necesidad humanitaria en esta categoría.

Para estimar el número de personas actualmente en riesgo, se utilizaron datos georreferenciados del alcance de las inundaciones de 2020¹⁰⁸, informes de daños de la Secretaría Nacional de Infraestructura y Transporte, así como los datos de daños a la infraestructura del Centro de Estudios del Valle de Sula. Los datos demográficos de 2021¹⁰⁹ fueron superpuestos para estimar la exposición de la población a daños por inundaciones.

108 Comisión Permanente de Contingencias.

109 MapAction

Considerando que el riesgo de afectación por fenómenos futuros incrementaría la severidad de la necesidad humanitaria actual, se superpusieron los datos del Análisis Integral de Contexto del Clúster de Seguridad Alimentaria, el índice de severidad nacional por sequía y los datos de frecuencia de fenómenos de origen geo-climático durante los últimos dos años¹¹⁰, para estimar la severidad del indicador 1.

Indicador 2. Personas desplazadas debido a peligros comunitarios/regionales, incluida la violencia y conflictos (personas en movilidad).

El dato de 247.090 personas desplazadas internamente en Honduras entre enero de 2004 y agosto de 2018 se utilizó como base de cálculo para determinar las necesidades de alojamiento. El dato de ubicación de denuncias por hechos violentos se utilizó para determinar los municipios con mayor incidencia

de desplazamiento por peligros comunitarios. A esto, se calculó que un 9 de personas desplazadas optó por huir del país asumiendo que el porcentaje de emigración de esta población es similar al resto del país; todo ello considerando que un 74 por ciento de estas personas se encontraban en necesidad inmediata de alojamiento (ver gráfica siguiente) y que un 27 por ciento logra recuperarse por sus propios medios¹¹¹.

110 COPECO

111 ACNUR, NRC. Estudio sobre el acceso a soluciones seguras y dignas de Alojamiento Temporal para Población en Situación de Movilidad Humana en Honduras. Julio 2020. Recuperado en agosto de 2022. <https://nrc.org.co/wp-content/uploads/2021/12/Estudio-AT-Digital-compressed.pdf>

4.2

Metodología

El número de personas en necesidad (PIN) intersectorial para el Panorama de Necesidades Humanitarias 2022 (HNO) se calculó usando el Marco de Análisis Intersectorial Conjunto (JIAF, por sus siglas en inglés), una metodología global en la que se analizan los eventos o choques que afectan las condiciones humanitarias en la población a partir de tres pilares: i. Estándares de vida, ii. Mecanismos para afrontar el choque y iii. Bienestar Físico y Mental. Con el marco analítico se realizó una selección de “drivers” (desencadenantes) que determinan las necesidades humanitarias en el país que requieren asistencia (afectaciones por movilidad humana, afectaciones por choques de origen socio natural, violencia y seguridad alimentaria). Para cada uno de estos factores se definieron los indicadores que determinan el impacto en los grupos vulnerables, asignando una carga poblacional según los niveles de severidad del 1 al 5, en donde 1 son estándares mínimos aceptables y necesidades básicas satisfechas y 5 corresponde el colapso total de los estándares de vida, de parte de cada clúster. La recolección y procesamiento de la información ha sido realizada por el Grupo Técnico de Manejo de Información (GTMI) mediante el análisis de un promedio de tres indicadores por clúster o área de responsabilidad. Sin embargo, se han enfrentado importantes desafíos por la falta de disponibilidad de los datos o por la relevancia de esta en el tiempo; por ejemplo, información de necesidades humanitarias a nivel de comunidades, especialmente para temáticas como la sequía crónica, violencia extrema y migración, entre otras.

Clúster de Protección

El análisis de las necesidades humanitarias del Clúster de Protección fue elaborado bajo el Marco de Análisis de Protección (PAF). La información que sustenta el análisis se concentra en los datos cualitativos y cuantitativos identificados tanto en las fuentes secundarias disponibles, como en las fuentes primarias priorizadas a partir de la identificación de los vacíos de información. En esta medida, se convocaron ejercicios de análisis conjunto a nivel nacional y local para reforzar los hallazgos relacionados con los cambios en las dinámicas de la violencia y sus impactos sobre la población.

Marco de Análisis Intersectorial Conjunto (Joint Intersectoral Analysis Framework, JIAF)

Contexto		
Política	Economía	Sociocultural
Jurídica y política	Tecnológico	Demografía
Medio ambiente	Seguridad	Infraestructura

Personas que viven en la zona afectada

Evento/Shock	
Factores impulsores	Factores subyacentes / vulnerabilidades preexistentes

Personas afectadas

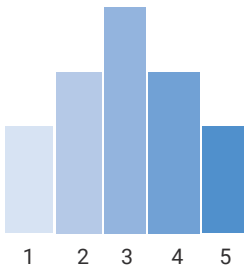
Impacto		
Impacto en el acceso humanitario	Impacto en los sistemas y servicios	Impacto en las personas

Condiciones humanitarias

Personas en necesidad



Severidad de las necesidades



Necesidades/preocupaciones prioritarias actuales y previstas
Por edad, género y características de diversidad relevantes

JIAF escala de severidad

FASE DE GRAVEDAD	REFERENCIA CLAVE RESULTADO	RESPUESTA POTENCIAL OBJETIVOS
1 Ninguna/Mínima	<p>Niveles de vida aceptables (teniendo en cuenta el contexto): posibilidad de tener algunos signos de deterioro y/o servicios sociales básicos inadecuados, posibles necesidades de fortalecimiento del marco legal.</p> <p>Capacidad de satisfacer todas las necesidades básicas sin adoptar mecanismos de afrontamiento insostenibles (como la erosión/el agotamiento de los activos).</p> <p>Ausencia o riesgo mínimo/bajo de impacto en el bienestar físico y mental.</p>	<p>Construir la resiliencia</p> <p>Apoyar a la reducción del riesgo de catástrofes</p>
2 Estrés	<p>Niveles de vida estresados, lo que lleva a la adopción de estrategias de afrontamiento (que reducen la capacidad de proteger o invertir en los medios de vida).</p> <p>Incapacidad de satisfacer algunas necesidades básicas sin adoptar mecanismos de afrontamiento estresados, insostenibles y/o reversibles a corto plazo.</p> <p>Impacto mínimo en el bienestar físico y mental (bienestar físico y mental estresado) en general.</p> <p>Posibilidad de que se produzcan algunos incidentes de violencia localizados/objetivados (incluyendo violaciones de los derechos humanos).</p>	<p>Apoyar a la reducción del riesgo de catástrofes</p> <p>Proteger los medios de subsistencia</p>
3 Severa	<p>Degradación de los niveles de vida (respecto a los habituales/típicos), lo que lleva a la adopción de mecanismos de afrontamiento negativos con amenaza de daños irreversibles (como la aceleración de la erosión/el agotamiento de los activos).</p> <p>Reducción del acceso/disponibilidad de bienes y servicios sociales/básicos. Incapacidad de satisfacer algunas necesidades básicas sin adoptar mecanismos de afrontamiento de crisis/emergencia - irreversibles a corto/medio plazo.</p> <p>Degradación del bienestar físico y mental. Daños físicos y mentales que provocan una pérdida de dignidad.</p>	<p>Proteger los medios de subsistencia</p> <p>Prevenir y mitigar el riesgo de deterioro extremo de las condiciones humanitarias</p>
4 Extrema	<p>Colapso del nivel de vida, con una supervivencia basada en la asistencia humanitaria y/o en estrategias de afrontamiento extremas e irreversibles a largo plazo.</p> <p>Pérdida/liquidación extrema de los bienes de subsistencia que provocará grandes carencias/necesidades a corto plazo.</p> <p>Violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos.</p> <p>Presencia de daños irreversibles y aumento de la mortalidad.</p>	<p>Salvar vidas y medios de subsistencia</p>
5 Catastrófica	<p>Colapso total del nivel de vida.</p> <p>Agotamiento casi total de las opciones de afrontamiento.</p> <p>Mecanismos de afrontamiento de último recurso/agotados.</p> <p>Mortalidad masiva (CDR, U5DR) y/o daños irreversibles. Daños físicos y mentales irreversibles generalizados que provocan un exceso de mortalidad.</p> <p>Violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos.</p>	<p>Revertir/Prevenir la muerte masiva y/o el colapso total de los medios de vida</p>

4.3

Brechas y limitaciones de la información

La metodología utilizada para la construcción del presente HNO, enfocada en la magnitud y la severidad de las necesidades de los grupos poblacionales más afectados, constituyó un desafío en términos de indicadores, fuentes de datos y lineamientos, sobre todo por la falta de información sistematizada para respaldar el análisis de los indicadores seleccionados.

A pesar de que se han contado con evaluaciones realizadas por las organizaciones y clústeres, la falta de estandarización para cumplir con los requerimientos de la metodología JIAF ha limitado su uso.

El país cuenta con un análisis CIF que fue actualizado en diciembre de 2021 con proyecciones hasta el mes de agosto de 2022. No obstante, existen limitaciones porque solamente llega a niveles departamentales (nivel administrativo 1) dificultando precisar las necesidades humanitarias en temas de seguridad alimentaria a niveles comunitarios, así como la identificación clara de áreas geográficas con impacto

humanitario que deben ser priorizadas. Al haberse realizado en diciembre de 2021, el análisis CIF no consideró los efectos del conflicto Ucrania-Rusia en los precios de los combustibles y fertilizantes, limitando el alcance del análisis.

Se recomienda que el Equipo Humanitario de País, el Grupo Intersectorial de Coordinación y el Grupo Técnico de Manejo de Información aborden un plan de evaluaciones multisectoriales a nivel de hogares para ciertos indicadores seleccionados que puedan llenar estas brechas de información en la próxima actualización del HNO y a través de del proceso de implementación del HRP. Las evaluaciones multisectoriales permitirán identificar las zonas geográficas más críticas en necesidades humanitarias evitando priorizaciones de manera dispersa.

4.4

Acrónimos

ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados	IRI	International Research Institute for Climate and Society (Instituto Internacional de Investigaciones para el Clima y la Sociedad)
ARG	Análisis Rápido de Género	ITS	Infección de Transmisión Sexual
BCR	Banco Central de Reserva	JIAF	Joint Intersectoral Analysis Framework (Marco de análisis intersectorial)
BID	Banco Interamericano de Desarrollo	MIRPS	Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe	NCA	Norte de Centroamérica
CODEM	Comités de Emergencia Municipal	NNA	Niñas, Niños y Adolescentes
CIF	Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases	NRC	Norwegian Refugee Council (Consejo Noruego para Refugiados)
CONRED	Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres	OCHA	Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
DINAF	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia	ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
DTM	Displacement Tracking Matrix (Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos)	OIM	Organización Internacional para las Migraciones
DRC	Danish Refugee Council (Consejo Danés para los Refugiados)	OIT	Organización Internacional del Trabajo
EDAN	Evaluación de Daños y Necesidades	OMM	Organización Meteorológica Mundial
EHP	Equipo Humanitario de País	OPS/OMS	Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud
ENDESA/ MICS	Encuesta Nacional de Demografía y Salud/ Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados	PIB	Producto Interior Bruto
EPP	Equipo de Protección Personal	PiN	People in Need (Personas en Necesidad)
GTMI	Grupo Técnico de Manejo de la Información	PMA	Programa Mundial de Alimentos
HNO	Humanitarian Needs Overview (Panorama de las Necesidades Humanitarias)	PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
IASC	Inter-Agency Standing Committee (Comité Permanente entre Organismos)	REDLAC	Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres para América Latina y el Caribe
ICCG	Inter-Clúster Coordination Group (Grupo Intersectorial de Coordinación)	RHH	Red Humanitaria en Honduras

SANAA	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	VIH-SIDA	Virus de la Inmunodeficiencia Humana- Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida
UNAH	Universidad Nacional Autónoma de Honduras	WASH	Water, Sanitation and Hygiene (Agua, Saneamiento e Higiene)
VBG	Violencia Basada en Género		

PANORAMA DE NECESIDADES HUMANITARIAS

HONDURAS